

**DISERTACIÓN PREVIA A LA DEFENSA DE GRADO PARA LA OBTENCIÓN DEL
TÍTULO DE LICENCIADO MULTILINGÜE EN NEGOCIOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES**

**LA INFLUENCIA DE LA GUERRA ANTIDROGAS ESTADOUNIDENSE EN LA
POLÍTICA Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN EL PERIODO DE 1971 A 1990.**

JONATHAN DAVID MORALES OLALLA

**AGOSTO, 2015
QUITO – ECUADOR**

DEDICATORIA

*A todos los que creyeron en mí,
cuando incluso yo no podía hacerlo.*

AGRADECIMIENTOS

*A mis padres por su paciencia
A mis amigos por su apoyo.
A mi novia por su comprensión.
A mi hermana por su crítica.
A mis profesores por su ayuda.
No lo habría hecho sin ustedes.*

ÍNDICE GENERAL

I.	TEMA	1
II.	RESUMEN	1
III.	ABSTRACT	2
IV.	RÉSUMÉ	3
V.	INTRODUCCIÓN	4

CAPÍTULO I

LAS POLÍTICAS ESTADOUNIDENSES DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y SU ROL EN EL AUMENTO DEL NARCOTRÁFICO DE COCAÍNA DE COLOMBIA

1.1.	La declaración de la Guerra contra las Drogas y el discurso de Nixon.	11
1.1.1.	Los antecedentes y las razones para la prohibición	11
1.1.2.	La estrategia y el discurso para la Guerra contra las Drogas	15
1.1.3.	Las leyes implementadas y las instituciones creadas.	20
1.2.	La influencia de EE.UU. en Latinoamérica y la exportación de políticas prohibicionistas	24
1.2.1.	El rol de liderazgo de EE.UU. y la Guerra contra las Drogas	25
1.2.2.	Las circunstancias y las perspectivas de los países Andinos	27
1.2.3.	La ideología de EE.UU. y su influencia en su política externa.....	29
1.3.	La consolidación de Colombia como principal exportador de cocaína y su mercado con EE.UU... ..	31
1.3.1.	La cocaína y el aumento de su demanda en EE.UU..	32
1.3.2.	La oferta y la ventaja competitiva de Colombia	36
1.3.3.	La diversificación y el desarrollo de la industria de la cocaína	41

CAPÍTULO II

LA NARCOTIZACIÓN DE LA RELACIÓN BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

2.1.	La inestabilidad y la violencia en Colombia	46
2.1.1.	La crisis política y la falta de presencia estatal.....	47
2.1.2.	Las guerrillas izquierdistas.....	50
2.1.3.	El paramilitarismo y las autodefensas	53
2.2.	El tráfico de drogas colombiano y la comunidad internacional	55
2.2.1.	La expansión del narcotráfico y los carteles de drogas	56
2.2.2.	El tráfico de drogas y las consecuencias en la sociedad.....	60
2.2.3.	El conflicto colombiano y la comunidad internacional.....	64
2.3.	La política exterior y las medidas de cooperación	67
2.3.1.	La política exterior de EE.UU. y las críticas a sus contradicciones.....	68
2.3.2.	La política exterior colombiana y su reajuste.....	72
2.3.3.	Las políticas prohibicionistas y las medidas aplicadas	76

CAPÍTULO III

LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN TERRITORIO COLOMBIANO Y LAS NARCO-GUERRILLAS

3.1.	Las relaciones entre los grupos irregulares y los carteles de drogas.....	82
3.1.1.	La guerrilla y los traficantes de drogas.....	82

3.1.2.	Corrupción y manipulación dentro del Estado colombiano	86
3.1.3.	La vinculación entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares y los carteles	88
3.2.	La teoría de las narcoguerrillas como estrategia de EE.UU	92
3.2.1.	Antecedentes y formulación de la teoría	92
3.2.2.	La política exterior de Reagan con América Latina y el Caribe	95
3.2.3.	La implementación de la teoría	98
3.3.	La intervención inapropiada de EE.UU. en Colombia	101
3.3.1.	El fracaso de la guerra contra las drogas y la teoría de la narcoguerrilla ..	102
3.3.2.	La intervención en otros países de la región	105
3.3.3.	Protección de intereses económicos y políticos de EE.UU	109
VI.	ANÁLISIS	112
VII.	CONCLUSIONES.....	120
VIII.	RECOMENDACIONES	125
	LISTA DE REFERENCIAS	132
	ANEXOS	139

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1	
INSUMOS PARA PREPARAR 1 KG DE COCAÍNA EN 1980.....	43
TABLA 2	
INGRESOS NETOS DEL NARCOTRÁFICO (USD MILLONES).....	62
TABLA 3	
PRINCIPALES PAÍSES DE TRÁNSITO DE HOJA DE COCA Y COCAÍNA A EE.UU.	65
TABLA 4	
ASISTENCIA ESTADOUNIDENSE ANTINARCÓTICA A COLOMBIA EN MILLONES DE DÓLARES.	80

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 TENDENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN LA POBLACIÓN ADULTA DE EE.UU. EN LOS 80.....	34
GRÁFICO 2 PORCENTAJES DE FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS EN PUBLICACIONES EN INGLÉS.....	35
GRÁFICO 3 IMPORTACIONES ESTIMADAS DE COCAÍNA ILÍCITA EN TONELADAS MÉTRICAS.....	35
GRÁFICO 4 HECTÁREAS DE CULTIVOS ILEGALES EN COLOMBIA	39
GRÁFICO 5 MAPA DE LAS RUTAS DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN COLOMBIA.....	40
GRÁFICO 6 TIPOS DE DELITO EN MEDELLÍN EN LOS 80	42
GRÁFICO 7 PRODUCCIÓN TOTAL DE COCAÍNA.....	44
GRÁFICO 8 MAPA DE TASA DE MUERTE ENTRE 1000 PERSONAS DE 1948 A 1963... 47	
GRÁFICO 9 PRECIOS DE 1 KG DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN 1981	57
GRÁFICO 10 CANTIDAD DE HOMICIDIOS ANUALES EN COLOMBIA (1970-1990).....	58
GRÁFICO 11 INGRESOS NETOS DEL NARCOTRÁFICO	63
GRÁFICO 12 MAPA DE RUTAS PARA EL TRÁFICO DE COCAÍNA DESCUBIERTAS AL CARTEL DE CALI	66
GRÁFICO 13 GASTO MILITAR DE LOS PAISES ANDINOS EN 1989	106
GRÁFICO 14 DISTRIBUCIÓN DE LA ASISTENCIA DE EE.UU. EN LA INICIATIVA ANDINA A COLOMBIA EN 1990	106

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1	
TENDENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN LA POBLACIÓN ADULTA DE EE.UU	143
ANEXO 2	
PORCENTAJES DE FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS EN PUBLICACIONES EN INGLÉS	144
ANEXO 3	
IMPORTACIONES ESTIMADAS DE COCAÍNA ILÍCITA EN TONELADAS MÉTRICA	145
ANEXO 4	
HECTÁREAS DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN LOS PAÍSES ANDINOS (1979 – 1983)	146
ANEXO 5	
PRODUCCIÓN TOTAL DE COCAÍNA EN COLOMBIA	147
ANEXO 6	
HECTÁREAS CON CULTIVOS ILEGALES EN COLOMBIA	147
ANEXO 7	
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO EN MEDELLÍN EN LOS 80	148
ANEXO 8	
GRÁFICO CIRCULAR DE LAS ARMAS USADAS EN HOMICIDIOS	148
ANEXO 9	
MAPA DE LAS GUERRILLAS MÓVILES Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA	149
ANEXO 10	
PRECIOS DE 1 KG DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN 1981	150
ANEXO 11	
HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL EN COLOMBIA ENTRE 1946 – 2006	151
ANEXO 12	
VENTA DE INMUEBLES ATRIBUIBLE A LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA .	153
ANEXO 13	
TRÁFICO DE DROGAS Y PARTICIPACIÓN COLOMBIANA	153
ANEXO 14	
DÓLAR NEGRO Y OFICIAL EN EL BALANCE EXTERNO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA	154
ANEXO 15	
GASTO MILITAR EN LATINOAMÉRICA EN 1989	155

ANEXO 16	
ASISTENCIA ECONÓMICA DE EE.UU. A LA INICIATIVA ANDINA EN	
1990 (USD MILLONES)	156

I. TEMA

LA INFLUENCIA DE LA GUERRA ANTIDROGAS ESTADOUNIDENSE EN LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD COLOMBIANA EN EL PERIODO DE 1971 A 1990.

II. RESUMEN

El presente estudio describe, bajo la perspectiva constructivista, la influencia de la relación entre Colombia y Estados Unidos en el fenómeno del tráfico ilegal de cocaína en las décadas de los 70 y 80. El Constructivismo toma en consideración los diferentes elementos históricos y sociales que dieron origen a las políticas prohibicionistas en la Guerra contra las Drogas, y el cambio en la construcción social de ambos países con respecto al uso y abuso de estupefacientes. Dichas políticas cambiaron permanentemente la dinámica social del consumo de drogas en EE.UU., accidentalmente aumentando el uso de cocaína, cuya demanda en aumento sería satisfecha por la industria colombiana. El imparable crecimiento de este negocio ilícito exacerbó el conflicto interno colombiano, aumentando la inestabilidad y la violencia perpetuada por las guerrillas y los grupos paramilitares. Además, los carteles narcotraficantes se convirtieron en organizaciones con alcance multinacional y en una amenaza para la región. Por estas razones, EE.UU. “*securitizó*” la industria de las drogas y “*narcotizó*” la relación bilateral con Colombia para priorizar la búsqueda de soluciones definitivas a esta problemática. Sin embargo, la evidencia muestra que el gobierno en Washington no estaba realmente interesado en ganar esta cruzada utópica, sino que simplemente la retórica de la misma le sirvió como estrategia geopolítica para perseguir sus intereses en territorio extranjero.

Palabras clave

Colombia – Estados Unidos

Guerra contra las Drogas

Cocaína

Constructivismo

Narcotráfico

III. ABSTRACT

The present study describes, under the constructivist perspective, the influence of the relationship between Colombia and the United States in the phenomenon of cocaine trafficking in the 70s and 80s. Constructivism takes into account the different historical and social elements that gave rise to the prohibitionist policies in the War on Drugs, and the change in the social construction of both countries regarding the use and abuse of narcotics. These policies permanently changed the social dynamics of drug use in the US, accidentally increasing the use of cocaine, whose rising demand would be met by the Colombian industry. The unstoppable growth of this illicit business exacerbated Colombia's internal conflict, increasing instability and violence perpetuated by the guerrillas and paramilitary groups. In addition, the drugs cartels have become multinational organizations and a threat to the region. For these reasons, the United States "securitized" the drug industry and "narcotized" the bilateral relations with Colombia in order to prioritize the search for definitive solutions to this problem. However, evidence shows that the government in Washington was not really interested in making this utopian crusade, but simply in using its rhetoric as a geopolitical strategy to pursue their interests on foreign soil.

Key words

Colombia – United States

War on Drugs

Cocaine

Constructivism

Drug trafficking

IV. RÉSUMÉ

Ce document décrit, en base au point de vue constructiviste, l'influence de la relation entre la Colombie et les États-Unis pendant le développement du phénomène de trafic illégal de la cocaïne pendant les années 70s et 80s. Le Constructivisme prend en considération les différents éléments historiques et sociaux qui ont aidé à la création des politiques prohibitionnistes de la Guerre contre les Drogues et le changement à la construction sociale de ceux deux pays par rapport à l'usage et l'abus des substances stupéfiants. Ces politiques ont changé la dynamique sociale de la consommation des drogues aux États-Unis de manière permanente en augmentant accidentellement l'usage de la cocaïne. Par conséquence, la demande de ce type de drogue était rempli para l'industrie colombienne. L'incroyable croissance de cette affaire illicite a exacerbé le conflit interne en Colombie en augmentant l'instabilité et la violence qui ont été perpétrés par les guérillas et les groupes paramilitaires. Additionnement, les cartels du narcotrafic se sont devenus en organisations multinationales dangereuses pour toute la région. C'est pour cette raison, les États-Unis ont *securitisé* l'industrie des drogues en *narcotisant* la relation bilatérale avec la Colombie pour prioriser la recherche des solutions définitives a cette problématique. Cependant, les faits démontrent que le gouvernement à Washington n'était pas vraiment intéressé à la victoire de cette croisade utopique. Au contraire, la rhétorique liée à ce processus a été utilisée comme stratégie politique pour obtenir les intérêts américains en territoire étrangère.

Mots clés

Colombie – États-Unis
Guerre contre la Drogue
Cocaïne
Constructionism
Trafic de drogue

V. INTRODUCCIÓN

El ex presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la Guerra contra las Drogas a inicios de la década de los 70, vinculando permanentemente el consumo de las mismas con el crimen. Este discurso prohibicionista vino acompañado de las respectivas reformas a la normativa general que cambiarían la percepción y con ello el comportamiento de todo el Estado norteamericano con respecto al consumo de sustancias narcóticas. La aplicación de estas medidas de interdicción no solo alterarían permanentemente la dinámica del consumo de drogas dentro de EE.UU., sino que al momento de haber sido trasladadas a su agenda de política internacional repercutieron en las realidades y en las relaciones con los países productores. En el caso de Colombia, es necesario cuestionarse la incidencia de tales políticas en la expansión del comercio de cocaína y consecuentemente la aplicación de políticas que permitían la intervención de EE.UU.

Una parte fundamental de la estrategia antidroga de Estados Unidos era la erradicación en sus puntos de origen. Con este fin, el país del norte externalizó su lucha al resto del mundo, especialmente a los países productores. En Colombia, en donde al igual que en los demás países andinos, existía una historia ancestral, previa a la llegada de los españoles, en cuanto al cultivo de plantas de marihuana y hoja de coca, se observa un aumento en la producción de cocaína y la aplicación de políticas prohibicionistas afines a las de EE.UU. Las políticas antidrogas implementadas por Nixon redujeron el consumo de drogas alucinantes como la marihuana, pero aumentando el de drogas estimulantes como la cocaína; asimismo, trasladaron los cultivos de hoja de coca y marihuana hacia los países andinos. Esto sumado a las ventajas competitivas de Colombia, consolidó a este país como el principal exportador de coca al mercado estadounidense, razón por la cual tuvo que aliarse a la potencia del norte con el fin de compensar el desprestigio originado por el tráfico ilícito de drogas.

El presente análisis busca brindar una perspectiva completa en la que se analice cuidadosamente los elementos que dieron lugar a este proceso. Para ello se tomará en cuenta a los principales actores estatales y no estatales, así como sus intereses, comportamiento e identidades que definen la interacción entre ellos. Con este fin se han establecido tres objetivos

principales que se desarrollarán en los tres capítulos de desarrollo de la presente disertación respectivamente: primero, constatar la influencia de la Guerra contra las Drogas de EE.UU en la consolidación de Colombia como principal exportador mundial de cocaína, segundo identificar los problemas causados en Colombia por el aumento del tráfico ilegal de cocaína y las políticas aplicadas para contrarrestarlos, y por último examinar la injerencia en los asuntos internos de Colombia, que nada tenían que ver con el tráfico ilícito de drogas, para proteger los intereses políticos y económicos de EE.UU.

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se enfocarán los datos presentados bajo la luz del Constructivismo, el cual es una teoría dentro del campo de las Relaciones Internacionales, que busca explicar el proceso de construcción de la realidad a través de la observación de los individuos y el análisis de sus intereses y comportamientos (Guzzini, 2000: 1). De esta manera, esta teoría elabora nuevas propuestas y explicaciones frente a las de las escuelas clásicas como el realismo o el liberalismo, ya que da mayor prioridad al significado social que componen las necesidades y la motivación humana. Dentro del Constructivismo prevalece el contexto social, las percepciones y las relaciones que permiten explicar las acciones y reacciones que determinan la dinámica entre los diferentes actores, ya sean estatales o no estatales.

En el Constructivismo se prioriza los intereses, las creencias, la identidad, y el comportamiento de los actores. Por ejemplo, bajo esta teoría no se consideran importantes al poder armamentista, a las relaciones comerciales, a las instituciones internacionales o a los intereses nacionales, porque sean variables objetivas y cuantificables del mundo, sino por el significado social que conllevan. Las percepciones de amigos, enemigos, de aliados o de justicia se consideran elementos determinantes en el comportamiento de un Estado (Slaughter, 2011: 4-5). Por otro lado, se debe entender el concepto de Seguridad Nacional como instrumento de poder político refiriéndose a todos los ámbitos de la sociedad que se hallan en peligro y que se debe proteger para resguardar la integridad y los intereses del Estado; cabe acotar que para el Constructivismo el llamado interés nacional es la expresión de la identidad de una sociedad (Orozco, 2006: 164).

Así la *securitización*, es un proceso de construcción social mediante que permite al sector político a cargo de la seguridad justificar la adopción de medidas especiales que no se salen del marco jurídico y de los procedimientos ordinarios de decisión política por medio de una retórica de peligro o amenaza (Campesi, 2012: 5). Esta concepción sostiene que existen elementos dentro de nuestro medio que para ser reales no necesariamente deben existir en forma física, sino que basta con que estas construcciones sociales estén aceptadas implícitamente en la mentalidad de los individuos (Bentham, 2010: 1-2). Este concepto se cuestiona sobre si las amenazas a la Seguridad Nacional son objetivas y en verdad representan un peligro para los Estados o si en su lugar son subjetivas, y solo son percibidas como tal. Según los supuestos de la securitización, el concepto de seguridad y amenaza se basan principalmente en el discurso aplicado y en la forma en que algo es socialmente construido como un potencial riesgo para el bienestar o el desarrollo. De esta manera, el discurso dentro del proceso de securitización derivará del concepto de guerra y del malestar y necesidades que este genera dentro de una población que busca su defensa y supervivencia (Van Munster, 2012:1).

La teoría de *securitización* como parte del *Constructivismo*, resulta complementaria al momento de realizar un análisis profundo de esta problemática. Las dos teorías desechan la visión positivista de las relaciones internacionales que se aplican en el realismo y en el liberalismo, y por el contrario sostienen que la realidad se forma en base a nuestro lenguaje, imágenes, percepciones y la conceptualización de las cosas que se forma en nuestras mentes (Arriola, 2013:1). Asimismo, nuestra percepción del mundo que nos rodea determinará nuestro comportamiento individual, y a su vez este se trasladará al comportamiento colectivo que finalmente establecerá los patrones básicos como funciona nuestra sociedad. En el caso de la relación bilateral colombo-estadounidense se consideró pertinente realizar un análisis constructivista porque esta teoría argumenta que la interacción entre dos Estados debe basarse en el mutuo entendimiento y en la compartición de valores, lo cual se ajusta a la realidad estudiada.

De igual forma, al ser el Constructivismo una teoría reciente y publicada posteriormente a los eventos aquí descritos, esta permite arrojar una perspectiva de análisis innovadora con respecto a cómo y por qué se suscitaron ciertos hechos. Para el Constructivismo, la alianza entre Colombia y

EE.UU. se da en razón de la identidad construida entre ambos actores, la cual a su vez se basa en la similitud de sus intereses y las expectativas que ambos Estados tenían con respecto a su bienestar y desarrollo. Así también, se toma en consideración que al momento que la industria del tráfico de cocaína empieza a crecer en Colombia, los intereses y el comportamiento de sus individuos se ven alterados en una forma masiva y radical, lo cual cambia permanentemente la dinámica social con respecto a las drogas.

Igualmente, el Constructivismo toma en consideración la interacción histórica entre ambos países, el cambio en el comportamiento de los ciudadanos norteamericanos con respecto al aumento del consumo de cocaína y marihuana va a resultar en un cambio en los intereses de los ciudadanos en Colombia. De esta manera, la sociedad colombiana tolerará y fomentará la producción y comercialización primero de marihuana y luego de clorhidrato de cocaína al mercado estadounidense, con el fin de obtener una mayor cantidad de recursos económicos y asegurar su subsistencia. Sin embargo, la ambición desmedida en el marco de ilegalidad en el que se manejó esta industria provocaría un aumento de la violencia y el crimen dentro del país exacerbando así el conflicto interno que se daba desde la segunda mitad del siglo XX. Consecuentemente, el caos y la inestabilidad en el Estado colombiano serían percibidos como potenciales amenazas para la comunidad internacional, dando como resultado una intervención de parte de Estados Unidos con el motivo de la lucha antinarcóticos.

Con estos elementos en consideración, la hipótesis planteada para esta disertación dice que: “El aumento del narcotráfico de cocaína desde Colombia por las inadecuadas políticas estadounidenses de la Guerra contra las Drogas, influiría en el desprestigio de la imagen de Colombia obligándola a aplicar políticas complacientes a EE.UU., lo que permitiría la intervención de EE.UU. en asuntos colombianos con la excusa de la vinculación de los grupos insurgentes y el narcotráfico”. Con el fin de comprobar la hipótesis, se utilizó la metodología de análisis crítico del discurso por su enfoque interdisciplinario. El análisis de discurso permite conectar los niveles menores de análisis lingüístico con los antecedentes histórico-discursivos (Merino, 2006: 1). Así, una vez recopilada la información se procederá a sintetizarla y analizarla bajo la metodología de análisis de; discurso de Merino, enfocado en as estrategias

semánticas de la argumentación, para cumplir con los objetivos propuestos y así comprobar la veracidad de la hipótesis expuesta.

Dada la naturaleza en retrospectiva del presente análisis la información se ha recolectado a partir de fuentes de información secundaria proveniente de textos académicos, documentos gubernamentales de Colombia y EE.UU., reportes de organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas, publicaciones de periódicos y de revistas especializadas. Con este fin, se ha estudiado libros de historia, estadísticas y publicaciones, relacionados con la problemática planteada, acontecidos durante los años 1971 y 1990¹, ya que durante estas dos décadas se da el proceso de la declaración de la guerra norteamericana contra las drogas, la internacionalización de la misma, y la intervención militarizada en el Estado colombiano. Asimismo, se ha realizado una investigación sobre los antecedentes en ambos países que dieron origen a los diferentes fenómenos sociales y políticos de esa época. Finalmente, se incluyen análisis y puntos de vista de expertos en el tema, que permiten tener una perspectiva más completa sobre los cómo, por qué y para qué de las decisiones y acciones efectuadas por los diferentes actores involucrados.

De esta manera, la información presentada se ha dividido en tres capítulos que buscan describir el proceso de forma cronológica mientras en cada uno se explora una temática diferente. En el primero, se describe los antecedentes y las razones para que el ex Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, utilizara dentro de su campaña y de su agenda de gobierno el discurso de la guerra contra las drogas como una solución definitiva al crecimiento de la tasa de criminalidad en el país. Esto provoca un cambio en la dinámica dentro del consumo interno de drogas en el país, disminuyendo el consumo de drogas alucinógenas como la marihuana, el LSD y la heroína y aumentando el de drogas estimulantes como la cocaína y el *crack*. Por otro lado, las políticas de interdicción serían llevadas a la esfera internacional, y los programas de erradicación en México y Centroamérica trasladarían los cultivos ilícitos a Colombia, dando con esto el primer paso a que este país se consolide como el primer exportador de cocaína en el mundo.

¹ El periodo de estudio se extiende hasta 1990 porque durante la década de los 80, Colombia se consolida como país exportador de clorhidrato de cocaína; además, que la dinámica de la relación cambiará drásticamente con la caída del Muro de Berlín y la finalización del mandato del ex presidente norteamericano, Ronald Reagan.

En el segundo capítulo se analiza el debilitamiento de la estructura política de Colombia, que resultaría en una casi inexistente presencia estatal en ciertas regiones periféricas del país, para esto es importante considerar las creencias e intereses de estos actores no estatales como los carteles, las guerrillas y los grupos paramilitares, que se vieron involucrados con el narcotráfico. El conflicto interno en Colombia empezaría a partir del año 1946 durante el periodo denominado como *La Violencia*, por la crueldad perpetuada mutuamente entre los miembros de los dos partidos políticos rivales, liberales y conservadores. Este violento fenómeno político y social serviría de prelude para la conformación de grupos guerrilleros que proclamaban buscar la ruptura del *status quo* y proteger los intereses del pueblo, y de los grupos paramilitares que nacieron gracias a las fuerzas armadas y a los terratenientes que buscaban protegerse de los actos subversivos de las guerrillas. Este ambiente de hostilidad y caos ayudaría a que el narcotráfico se expanda rápidamente, conformándose carteles de droga con un alcance multinacional, provocando la narcotización de la relación bilateral colombo-estadounidense con el fin de solucionar de forma urgente esta situación.

En el tercer capítulo se describe la formulación de la teoría de las *narcoguerrillas*, según la cual existía una alianza definitiva entre los carteles de drogas y las guerrillas izquierdistas. Además, se revisa la política del ex presidente norteamericano, Ronald Reagan, y su postura con respecto a la región de Latinoamérica y el Caribe, y las múltiples críticas contra su administración por haber aplicado una serie de políticas belicistas e intervencionistas que no respetaban la soberanía de los demás países ni los derechos humanos de sus habitantes. La guerra contra las drogas permitió a Estados Unidos intervenir militarmente dentro de Colombia a propósito de la cooperación antinarcóticos, y la teoría de las narcoguerrillas le permitió específicamente transgredir su compromiso de no intervenir en asuntos de índole diferente a la de las drogas.

El análisis profundo de este proceso histórico se fundamenta en lo aprendido durante el estudio de la carrera de Licenciatura Multilingüe en Negocios y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La información presentada busca explicar la dinámica entre las causas y consecuencias que conformaron la problemática del tráfico ilegal de cocaína desde Colombia a Estados Unidos en las décadas de los 70 y 80. La

investigación desarrollada en este trabajo servirá como base de consulta a estudiantes y funcionarios públicos dedicados al estudio y elaboración de políticas públicas en el continente americano. Asimismo, se aborda temas relacionados con los problemas que se originan de la cooperación internacional de EE.UU. con respecto a los principios de soberanía y de no intervención.

Por lo tanto, a través del análisis constructivista del proceso de conformación y consolidación de esta problemática podremos determinar la influencia de la interacción entre los dos Estados dentro de sus respectivas sociedades y por ende su comportamiento. Se examinará la Securitización de la guerra contra las drogas como una estrategia política aplicada por los Estados Unidos dentro de su territorio y en otros países para distraer la atención del aumento de la criminalidad, del movimiento hippie y del síndrome de Vietnam, y aplicar políticas que se ajusten a sus intereses. Esto permitirá comprender de forma más completa y precisa el manejo de la política estadounidense en el marco de los programas de cooperación y de intervención extranjera. Para esto, se pretende dar una nueva visión a este fenómeno, más allá del imperialismo y la asimetría política, a través de un análisis profundo de las causas y elementos claves que conformaron este proceso, pues en palabras del Nobel de física británico, William Lawrence Bragg: *“Lo importante en la ciencia no es tanto obtener nuevos datos, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ellos.”*

CAPÍTULO I

LAS POLÍTICAS ESTADOUNIDENSES DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y SU ROL EN EL AUMENTO DEL NARCOTRÁFICO DE COCAÍNA DE COLOMBIA.

1.1. La declaración de la Guerra contra las Drogas y el discurso de Nixon.

El abuso en el consumo de drogas se agravó en Estados Unidos en la década de los 70 por varios fenómenos sociales, políticos y culturales. La reestructuración social por la expansión de los derechos civiles y la guerra de Vietnam contribuirían al aumento del consumo de sustancias ilícitas. Este nuevo contexto cambiaría las identidades de los individuos (Pauselli, 2012: 86), cuyos intereses ya no correspondían totalmente con los del Estado. En Estados Unidos se venía aplicando una normativa general que desde inicios del siglo XX cambió la perspectiva de toda la nación en cuanto al consumo de drogas, sin embargo en la administración de Richard Nixon se pone en evidencia el grado de evolución de las normas para responder a las circunstancias e intereses de la época. La nueva legislación modificó permanentemente las concepciones del público norteamericano con respecto a las drogas y sus consumidores (Dufton, 2012: 1).

Dado que el comportamiento de un Estado y sus individuos se define a partir de las creencias, normas e ideas dentro del país (Slaughter 2011: 4), el presidente Nixon con su discurso contra las drogas criminalizó radicalmente el consumo y tráfico de las mismas. Esto modificaría la concepción social dando como resultado que se gaste menos presupuesto estatal en programas de prevención y tratamiento, pues los adictos ya no eran considerados como víctimas que padecen una enfermedad; por el contrario, se aumentaría el presupuesto designado para el total cumplimiento de la ley, de manera que estos *criminales hedonistas* sean castigados. Con la securitización de las drogas por parte de la administración de Richard Nixon se manifestaron las consecuencias que la aplicación de estas leyes tuvo en el comportamiento del Estado (Pauselli, 2012: 86) y en la interacción con la comunidad internacional.

1.1.1. Los antecedentes y las razones para la prohibición.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como droga, sea legal o ilegal, a toda aquella sustancia que una vez introducida dentro del

organismo altera el funcionamiento normal del sistema nervioso central, provocando reacciones físicas o mentales. Esto estimula nuevas sensaciones en su consumidor y hasta puede generar trastornos psíquicos; estos cambios resultados de los efectos psicoactivos (a corto plazo) o crónicos (a largo plazo), sugestionan eventualmente al individuo al uso consuetudinario de dichas sustancias. La capacidad de crear dependencia física o psicológica es una de las características definitorias para que una sustancia sea considerada una droga (Barriga, 1993: 17). Entre estas, las drogas ilegales provocan múltiples daños a la salud y alteran el juicio y el pensamiento de las personas, lo que aumenta su riesgo de muerte o de lesión (NIH 2014: 1). Por lo tanto, en el concepto de Estado de bienestar el gobierno debe intervenir para asegurar la protección de sus ciudadanos (La silla vacía, 2012: 1).

Dada la naturaleza religiosa de la sociedad estadounidense, se aplicó en la misma un modelo moralista con respecto al consumo de drogas, ya que se consideraba como algo impúdico e indecente que cambiaba el funcionamiento normal de la mente humana y alteraba el comportamiento. Dentro de esta perspectiva, se pensaba que el mundo podía dividirse en blanco y negro, es decir, en gente buena y gente mala, en el cual la trasgresión de las normas sociales de convivencia es independiente de las características del funcionamiento y manejo de una determinada sociedad, pero son parte de la naturaleza intrínseca de cada individuo, por lo cual deben ser combatidas antes de que las acciones de estos transgresores, considerados como criminales, lleguen a causar malestar y perjuicios (Thoumi, 2002: 37-39).

En las primeras décadas del siglo XX no existían leyes gubernamentales que regularan formalmente el consumo de drogas dentro de la sociedad norteamericana, por lo que la creación de una normativa federal se dio en respuesta a las necesidades del país. Los problemas de adicción estaban presentes casi exclusivamente en las metrópolis del país, por lo que ahí había interés en crear normas regulatorias. Sin embargo, la situación era diferente alrededor del país y no todos los Estados se mostraban interesados en legislar en contra del consumo de las drogas. Por estas razones, no resultaba práctico formular leyes independientes en determinados Estados, mientras que no se aplicaran leyes equivalentes en los Estados vecinos y se restringiera el comercio interestatal. Era evidente la necesidad de una legislación federal que se aplicara en todo el país a pesar de las diferencias

entre los Estados, los cuales se preocupaban más por mantener su autonomía (Thoumi, 2002: 39).

La primera legislación contra las drogas fue adoptada en el año de 1914 mediante *El Acta Harrison*, según la cual solo los médicos estaban en capacidad de prescribir cualquier droga a sus respectivos pacientes y se penalizaba el comercio de heroína y cocaína (Barriga, 1993: 82). En el año de 1919 se aprobó la XVIII Enmienda Constitucional que prohibía el consumo de alcohol dentro del país, y restringía la prescripción de ciertas drogas en el campo de la medicina. Durante las décadas de 1920 y 1930 aumentó la asociación entre el crimen y el consumo de drogas. En el año de 1933 la XXI Enmienda Constitucional anularía la prohibición con respecto a las bebidas alcohólicas, mientras que en 1937 se declararía ilegal el comercio de marihuana mediante leyes exageradas en los impuestos (Thoumi, 2002: 40).

Dentro del país existieron principalmente dos enfoques con respecto a los fenómenos del consumo y la adicción a las drogas; por un lado la comunidad médica los consideraba como víctimas que padecían una enfermedad y necesitaban ayuda. Por otro lado, los grupos conservadores y religiosos consideraban que los consumidores eran personas inadaptadas y sin carácter, cuyas acciones debían ser detenidas para que su comportamiento no se proliferara dentro de la sociedad. Este debate contribuyó a la definición de las políticas con respecto al problema de las drogas en EE.UU. (Thoumi, 2002: 37-39). La criminalización de los narcóticos empezó en la década de los 40, cuando la Oficina Federal de Narcóticos, presidida por Harry Anslinger, realizó una propaganda amarillista contra el uso de drogas e implementó sanciones más estrictas para quienes violaran la ley (Bass, 1999: 1).

La xenofobia dentro del país influyó drásticamente en la construcción social de las drogas como una amenaza externa que nada tenía que ver con la identidad norteamericana construida hasta entonces. De esta manera, se asoció el consumo de ciertas drogas con la inmigración de determinados grupos raciales y étnicos, como: el opio con la inmigración china, el de marihuana con las personas latinas, especialmente de México, y el de cocaína con las personas de color. De ahí, dichas drogas fueron vistas desde otra perspectiva en comparación con el alcohol, el tabaco y las drogas prescritas por la comunidad médica, las cuales eran consideradas como parte de la

cultura norteamericana. Esta situación, ocasionó que se concibiera a las identidades de estas minorías raciales foráneas como una amenaza a los intereses nacionales prohibicionistas. Así, los consumidores serían excluidos y definitivamente ya no serían considerados como personas enfermas, sino como potenciales amenazas al desarrollo y bienestar del país (Thoumi, 2002: 41).

El problema del consumo de drogas en EE.UU. se disparó en la década de los 60 ya que se produjeron cambios importantes en la estructura interna del país y en el manejo de los derechos civiles (Barriga, 1993: 82). Durante este periodo aumentó la lucha por proteger los derechos de las minorías étnicas, de los homosexuales y de las mujeres, lo que desembocó en una pérdida del sentido de pertenencia en los ciudadanos al cuestionarse el control estatal que se ejercía sobre temas como los comportamientos sexuales, las relaciones entre diferentes razas, el respeto sumiso hacia la autoridad y el uso de drogas. Esto provocó un cambio en la forma de expresión de los individuos, quienes recurrieron al consumo de drogas ilegales como un símbolo de protesta social y para afirmar su individualidad (Thoumi, 2002: 43).

Estas reformas sociales darían origen al movimiento hippie, la cual era una tendencia anti sistema que popularizó el uso de drogas. Esta contracultura juvenil incentivaba el consumo de marihuana en los campus de las universidades e impulsaba a que los jóvenes busquen expandir su creatividad a través del uso de drogas alucinógenas como el LSD (Bass, 1999: 1). Este movimiento contribuiría a que la concepción de moralidad se vuelva relativa, dando como resultado una mayor apertura para el consumo de drogas (Thoumi, 2002: 43). Esta situación sería aprovechada por el presidente Richard Nixon para declarar en su discurso que la Guerra contra las Drogas es indispensable para reparar el vergonzoso legado que dejó esta corriente y evitar la decadencia moral de la población joven de EE.UU (La silla vacía, 2012: 1).

La Guerra de Vietnam también incidió negativamente en el problema del consumo y la adicción de sustancias ilegales (Bass, 1999: 1). Según un reporte presentado por dos congresistas en 1971, el 15% en los ejércitos americanos en servicio eran adictos a la heroína. Esta adicción les seguiría a los soldados de vuelta en EE.UU. aumentando la demanda interna de heroína y opio, y

motivando la iniciativa gubernamental de aplicar tratamientos con metadona² (Lee, 2001: 1). Sin embargo, la guerra no solo provocó una epidemia de adicción a las drogas dentro de los militares que volvían de Vietnam, especialmente con respecto al uso de sustancias opiáceas, sino que también generó inconformidad social dentro del país con respecto a las decisiones del gobierno (Thoumi, 2002: 43).

Por estas múltiples razones, en la década de los 70 se exteriorizó significativamente el malestar social relacionado con el abuso de sustancias ilegales (Gaviria y Mejía, 2009: 1). En ese entonces, se había proliferado el consumo de marihuana e incluso el de nuevas drogas psicodélicas de carácter sintético como el LSD (Thoumi, 2002: 43). Estas circunstancias llevarían a que el entonces candidato para la presidencia, Richard Nixon, declarara en 1968 la “guerra contra las drogas” como parte fundamental de su campaña política que buscaba controlar el crimen en la sociedad (Duke, 1999: 1). Richard Nixon ganaría esas elecciones convirtiendo definitivamente al abuso de las drogas en *el enemigo número uno* de los Estados Unidos (Bass, 1991: 1).

1.1.2. La estrategia y el discurso para la Guerra contra las Drogas.

En el año de 1971, el Presidente de EE.UU., Richard Nixon asignó fondos federales adicionales para programas de tratamiento, uno de los principales fue el controversial programa de metadona para tratar la adicción a la heroína. En junio de ese mismo año, Nixon se dirigió al congreso declarando que mientras exista una demanda, existirán individuos dispuestos a arriesgarse con el fin de satisfacerla; reconociendo públicamente con esta declaratoria que todos los esfuerzos de interdicción y erradicación estaban destinados a fracasar (Bass 1991: 1). Además, convocó una Comisión Nacional, denominada Shafer, compuesta principalmente por jóvenes, para aportar una nueva perspectiva en temas que preocupaban a la sociedad de esa época, como: la Guerra de Vietnam, la economía y la tasa de empleo, la educación, el cuidado del medio ambiente, la pobreza y sobretodo el consumo de drogas (Dufton 2012: 1).

² La metadona es un narcótico analgésico que se usa para tratar la adicción a sustancias opiáceas, en especial la heroína. Se lo administra en el paciente como droga sustituta mientras se espera una total recuperación. Sin embargo, se ha probado que no da resultados favorables, ya que la mayoría de los casos crea una nueva adicción en los pacientes (NIH, 2005: 1).

En el informe presentado por la Comisión Shafer sobre este último tema, se insistía en la importancia de direccionar los esfuerzos en encontrar el origen de los conflictos personales que provocaban el abuso en el consumo de drogas, es decir, proponían priorizar la importancia de brindar terapia a los adictos en lugar de encarcelarles o castigarles (Dufton 2012: 1). Asimismo, dicha Comisión propuso la despenalización de la marihuana, ya que no constituía mayor riesgo a la salud según los informes médicos, y era menos perjudicial que el consumo de bebidas alcohólicas (Linton, 2015). La Comisión a cargo del estudio del consumo de las drogas en la sociedad norteamericana reconocía que el problema del abuso de drogas era un síntoma causado por la incapacidad individual para lidiar adecuadamente con el ambiente que le rodea (Thoumi, 2002: 43).

Además, insistieron en el hecho de que los males profundos dentro de la sociedad empeoran el sentimiento íntimo de alienación. En este informe se reconocían como problemas sociales principalmente a los siguientes: que se permitiera la continuidad de la Guerra de Vietnam, el racismo individual e institucional, la contaminación del medio ambiente y las crisis sociales provocadas por la pobreza derivada de la inequidad en la redistribución de los recursos. Así, la Comisión concluía que si la preocupación del gobierno sobre el abuso de las drogas era verdadera, el mismo debería poner énfasis en corregir estos problemas que sirven como punto de partida para el problema de la adicción (Dufton 2012: 1). Sin embargo, el Presidente Nixon con el fin de aplicar una estrategia política más agresiva, percibió estas conclusiones como antiamericanas y a todo aquel a favor de legalizar la marihuana como *“un judío desgraciado”* (Linton, 2015: 1).

A pesar de las declaraciones y recomendaciones hechas por la Comisión, el Presidente Nixon no hizo caso a su discurso inicial y declaró la guerra contra las drogas en 1972 (Bass 1991: 1). En este contexto, no se categorizó a los consumidores de drogas como jóvenes alienados cuyas adicciones eran el resultado de habitar en una sociedad incongruente, corrupta e inequitativa, sino que fueron considerados como criminales que ofendían directamente los principios de moralidad en la nación y que por lo tanto merecían ser castigados severamente y puestos en prisión. Esta perspectiva, llevó al Presidente Nixon a disminuir el presupuesto asignado para la ayuda social con el fin de atacar las causas del abuso de drogas. Dicha acción crearía

una nueva tendencia en las políticas, según la cual el gobierno de EE.UU. gastaría menos en prevención y tratamiento, y más en asegurar el cumplimiento de la ley (Dufton 2012: 1).

A partir de entonces, las administraciones subsiguientes en Washington trabajarían para incrementar la separación entre los gastos de prevención y los correspondientes a la aplicación de la ley. Esta nueva división en el presupuesto estatal sería la base para la guerra propuesta contra las drogas. Se dejaría de financiar las labores relacionadas con la guerra contra la pobreza y se priorizaría el financiamiento de esta popular guerra política contra el crimen. Hasta ese momento, en respuesta al debate de que si los individuos adictos a las drogas eran víctimas de su ambiente o de su propio vicio, los académicos y las autoridades se habían inclinado a pensar que el abuso de las drogas era una consecuencia de los males de una determinada época. Sin embargo, a partir de las políticas aplicadas por Nixon, se aplicó una visión en la que los consumidores de droga eran el origen del crimen (Dufton 2012: 1).

Para el Presidente Nixon, el desenfrenado uso de drogas en la década de los 70, no se debía a las grandes presiones sociales provocadas por los problemas que la sociedad de ese entonces tenía la responsabilidad de corregir, sino que era una consecuencia de que los adictos a las drogas eran criminales hedonistas que no merecían nada más que castigos y una severa disciplina (La silla vacía, 2012: 1). Richard Nixon se oponía vehementemente a la idea de que cuando se rompe la ley es culpa de la sociedad y no del criminal. En su discurso, "*Silent Majority*", el ex presidente estadounidense apeló a que sus simpatizantes se uniesen a su causa con el fin de detener el creciente consumo de drogas y la violencia que este conllevaba (Dufton 2012: 1).

El problema de las drogas era indiscutiblemente una realidad en la década de los 70, lo que facilitó a la administración del ex-presidente la manipulación de la información para aumentar la evidencia de la relación entre la adicción a las drogas y el crimen (Dufton 2012: 1). Por ejemplo en un discurso en 1971, Nixon declaró que los adictos a las drogas eran responsables de haber robado más de 2 mil millones de dólares en propiedad al año, mientras que de acuerdo al FBI la cifra correspondiente en el país ese año era de apenas 1,3 mil millones (Beckett y Sasson, 2013: 50-51). Asimismo, el asesor de políticas domésticas de Nixon, John Ehrlichman, reconoció que

durante la campaña electoral de 1968³ mintieron sobre los efectos en la salud de la marihuana y sobre la relación directa entre el uso de drogas y el crimen. Esta estrategia daría resultado porque apelaron al miedo y a la ignorancia de la mayor parte de la población que temía a los hippies y a los negros por haberlos clasificado como adictos a las drogas (Duke, 1999: 1).

Con este cambio del debate se dejó de buscar soluciones a los problemas que realmente originaban el crimen y se concentraron simplemente en castigar a los criminales, esta doctrina conservadora basada en mantener la *Ley y el Orden* permitió dos cosas importantes al Presidente Nixon. Primero, con esto logró exonerar a las personas blancas de clase media de cualquier tipo de responsabilidad relacionada con la creciente violencia dentro de las ciudades a causa de las drogas, procurando así debilitar al partido demócrata por su vinculación con las minorías de color (Beckett y Sasson, 2013: 50-51). Segundo, cambió la imagen pública del consumidor de drogas para que sea visto como una amenaza peligrosa y anárquica a la civilización norteamericana (Dufton 2012: 1). Esto provocaría un trato desigual en la aplicación de la ley, ya que si bien solo el 13% de la comunidad afroamericana usaba drogas, un porcentaje similar al índice que abarcaba toda la población, este grupo representaba un inverosímil 74% de personas sentenciadas por posesión de sustancias ilícitas (Duke, 1999: 1).

A partir de Richard Nixon las políticas de drogas serían dirigidas siguiendo tres elementos claves que son: el poder de convencimiento al público, el poder para emprender iniciativas legislativas y el poder para dirigir la burocracia federal. Así, Nixon declaró que el problema de las drogas había escalado de ser un problema de la policía local a una *amenaza nacional* que atentaba contra la estabilidad de la nación. En sus discursos sostenía que se lograría más en la lucha contra el crimen duplicando la tasa de presidiarios en el país que cuadruplicando el presupuesto en la guerra contra la pobreza. El ex-presidente enfatizaba que la adicción a los narcóticos era la razón principal para que exista el crimen, ya que los adictos hurtan, roban y asaltan como medios para poder satisfacer su adicción (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 105-106)

³ Se vincularía la problemática de las drogas al crimen perpetuado dentro de la sociedad, en especial por las personas afroamericanas como una estrategia para dividir los votos del partido demócrata (Beckett y Sasson, 2013: 47-48).

De esta manera, Nixon reforzó la necesidad de su guerra contra las drogas, ya que los consumidores dejarían definitivamente de ser vistos como víctimas excluidas y su encarcelamiento sería visto como benéfico para los intereses de la nación. La ideología conservadora aplicada sostiene que el hombre está infectado por el virus del pecado original y que todos estamos propensos a realizar actos perversos, y asumir que podemos diagnosticar las causas y ofrecer las curas o soluciones adecuadas no es nada más que un engaño ilusorio. Además, esta teoría considera que el crimen no radica en las condiciones sociales que son responsabilidad del Estado, sino que es fruto de la inestabilidad de los individuos (Beckett y Sasson, 2013:46-47). La receta conservadora fue mantener la criminalidad bajo control, el adicto no necesita ser curado, sino que debe ser contenido para que no pueda causar ningún daño adicional. Esta fue la ideología que le permitió a Nixon presentar a sus políticas de la guerra contra las drogas como la solución moral definitiva en lugar de las fallidas iniciativas liberales (Dufton 2012: 1).

Una vez finalizado el mandato de Nixon, durante la presidencia de Gerald Ford (1974-1977) once Estados despenalizaron la posesión de marihuana, e incluso su sucesor Jimmy Carter (1977-1981) empezó una campaña para permitir hasta la posesión de una onza de esta droga. Sin embargo, la ola de criminalización se había extendido y estos intentos serían reemplazados por una histeria política antidrogas, liderada por el presidente Ronald Reagan (1981-1989). En el marco legislativo, se aplicaron penas draconianas que aumentaron las tasas de encarcelamiento por crímenes no violentos relacionados con las drogas, e incluso se consideraba la posibilidad de que los consumidores de drogas fueran ejecutados. A lo largo de la nación se implementó la propaganda masiva creada por la esposa del presidente, Nancy Reagan, llamada '*Just Say No*'⁴ y el programa de educación para las drogas D.A.R.E.⁵, sin ninguna evidencia científica de la efectividad de ninguno. Estas severas políticas antidrogas detuvieron la expansión de los programas de acceso a jeringas y otros programas con políticas de reducción de daños, provocando una rápida expansión del virus VIH responsable de la enfermedad del SIDA (Drug Policy Alliance, 2015: 1).

⁴ En español: 'Solo Di No'.

⁵ Drug Abuse Resistance Education.

1.1.3. Las leyes implementadas y las instituciones creadas.

El Presidente Nixon decidió complementar la retórica de su discurso con las respectivas iniciativas legislativas para poder llevarlo a cabo. Con este fin, el Acta Comprehensiva de Prevención del Abuso de Drogas y Control de 1970 abarcó las previas regulaciones estatales antidrogas bajo un solo estatuto. Mientras que el Acta Harrison de 1914 basaba la jurisdicción del control de drogas únicamente en el poder constitucional de asignar impuestos, el acta de 1970 basó dicha jurisdicción en los poderes más amplios y de comercio interestatal de la Constitución. Una de las medidas consideradas como más duras y extremas contenidas en el acta, fue una que permitía a los agentes federales solicitar órdenes imprevistas (“*no-knock*” en inglés) con las cuales tenían el derecho para ingresar a propiedades privadas, sean hogares o edificios, con el fin de conducir investigaciones sobre drogas sin la necesidad de notificar sobre su propósito o su autoridad (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

Dado que la campaña de Nixon para promover la guerra contra las drogas tuvo éxito en el campo legislativo, el gasto del presupuesto estatal para ejecutarla aumentó drásticamente en los años siguientes. El gasto en el cumplimiento de las políticas de drogas pasó de ser 43 millones de dólares en el año de 1971 a ser de 321 millones en 1975. Asimismo, con el aumento del expendio estatal también aumentaría la burocracia en esta rama del gobierno. En las tres décadas anteriores apenas se habían visto cambios organizacionales y crecimiento en el aparato del control de drogas (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106). Por ejemplo, en el año de 1969, se creó la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas con apenas un presupuesto de 14 millones de dólares y conformada por 60 agentes, para el año de 1972, el número de empleados se había triplicado y el presupuesto cuadruplicado (Chepesiuk 1999: 160).

En el año de 1973, la administración de Nixon unificó la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD⁶), la Oficina de Cumplimiento de la Ley en el Abuso de Drogas (ODALE⁷), la Oficina Nacional Inteligencia en Narcóticos y la Unidad de Investigación de Drogas en una nueva *superagencia*

⁶ En inglés, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs.

⁷ En inglés, Office of Drug Abuse Law Enforcement.

dedicada a las drogas: la Administración Para el Control de Drogas o DEA (por sus siglas en inglés, *Drug Enforcement Administration*) (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106). Esta agencia se dedicaría concretamente a combatir el consumo y el tráfico ilegal de drogas, ya que estas constituían según el gobierno una *amenaza a la seguridad nacional*. Si bien en el ámbito interno compartiría jurisdicción con el FBI, esta era la única institución autorizada, como se explicará posteriormente, a efectuar investigaciones y operaciones antidroga en territorio extranjero, volviéndose así la principal agencia en cuanto a la guerra contra las drogas en EE.UU. y en el continente americano (Chepesiuk 1999: 160).

El Congreso norteamericano, apoyó la iniciativa del Presidente Nixon sobre la guerra contra las drogas, con el fin de que se cumpla con lo que se había acordado en el Acta de Abuso de las Drogas y Tratamiento de 1972. Esta Acta era considerada la piedra angular en la historia de la legislación del abuso de drogas, ya que sugería una respuesta balanceada con respecto al abuso de las drogas, es decir la aplicación de políticas y programas de prevención y tratamiento a más de los esfuerzos para la aplicación de la ley. Sin embargo, en el año de 1984 la Comisión Federal en Crimen Organizado señaló que si bien se hicieron compromisos en el año de 1972 sobre lo que estaba estipulado en el Acta antes mencionada, estos no se volvieron efectivos, situación que se puede comprobar al observar los respectivos informes de autorizaciones de gastos y presupuestos (Chepesiuk 1999: 160).

Por otro lado, el Presidente Nixon hizo un llamado a los medios de comunicación para que se uniera a la lucha contra las drogas, exhortándolos a transmitir el mensaje de que las drogas se habían convertido en el *enemigo público número uno* de los Estados Unidos y que para contrarrestarlo deberían aplicar una estrategia de ofensiva total, a nivel mediático, gubernamental, nacional e internacional. Consecuentemente, al aplicar este enfoque con el que se dio inicio a una cruzada por la erradicación del consumo y la producción de drogas, las iniciativas propuestas por Nixon no solo aumentaron considerablemente las iniciativas para asegurar el cumplimiento de la ley en el territorio nacional, sino que además acrecentaron permanentemente los esfuerzos del país para llevar a impulsos una ambiciosa campaña de contención en el extranjero (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

Estados Unidos exportó sus políticas prohibicionistas a través de numerosos acuerdos internacionales desde inicios del siglo XX. En el año de 1920, se constituyó la primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones creando así el Comité Consultivo sobre el tráfico del opio y otras drogas. Este comité daría lugar a múltiples convenciones, convenios y protocolos subsiguientes de los cuales serían miembros los países que pertenecían a la Sociedad de Naciones y más tarde a las Naciones Unidas (Moreno, 2009: 23-25). Estas instituciones internacionales servirían para que EE.UU. influyera en las decisiones a nivel mundial como uno de los miembros líderes. Así, en el año de 1971, Nixon se suscribió a la Convención en Sustancias Psicotrópicas, la cual extendía las medidas de control en los tratados internacionales previos, ya que restringía la importación y exportación de drogas entre los países signatarios, salvo que sea con propósitos científicos o médicos (ONU, 1971: 5-7).

La guerra contra las drogas que se ejecutaría en el extranjero, buscaba eliminar definitivamente la oferta dentro del comercio de las drogas. Se pretendía detener el tráfico atacando a los productores de cultivos ilegales, es decir, de plantas que son utilizadas como materia prima para la elaboración de drogas como la marihuana, la coca y la amapola. La preocupación con respecto a la oferta extranjera tiene sus orígenes en el siglo XIX por los informes realizados por misioneros norteamericanos dedicados a estudiar el tráfico internacional de drogas. Sin embargo, antes de la administración de Nixon el enfoque del gobierno fue principalmente retórico, diplomático y de perfil bajo. El Presidente Nixon convirtió a la oferta extranjera en un tema trascendental, los narcotraficantes extranjeros serían considerados como enemigos de la nación y la guerra contra la oferta extranjera sería un pilar de la política antidroga de EE.UU. (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

La primera operación de Richard Nixon para intentar contener el tráfico de drogas en su fuente se denominó "*Operación Intercepción*" y tuvo lugar en el año de 1969. Para esta operación se desplegaron 2000 agentes en la frontera con México, los cuales revisaron el contenido en los autos y los camiones que cruzaban a Estados Unidos. La operación no tuvo los resultados esperados, provocando únicamente la animosidad mexicana. Después de este fracaso el presidente concentró su nuevo plan en Turquía, ya que era uno de los

principales países que exportaban ilegalmente heroína a EE.UU., con el fin de conseguir resultados dramáticos que le ayudaran a promover su guerra y a ganar sur elección en 1972. El gobierno de Washington presionó políticamente a Turquía para que tomen medidas severas para detener el tráfico de heroína, amenazándoles con quitarles la ayuda en cooperación al desarrollo. En este caso la estrategia daría resultados por un par de años hasta que se reorganice el comercio (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

Las políticas de Nixon fueron exitosas al inicio, especialmente con el tráfico ilegal de heroína. En 1971 los Estados Unidos presionaron a Turquía, México y al Triángulo Dorado del Sudeste asiático para que erradicaran sus cultivos de adormidera. En el año de 1973, el gobierno francés, logró cerrar los laboratorios ubicados en el sur de Francia y en Turquía de la mafia denominada *Conexión Francesa*, que era una de las principales organizaciones que contrabandeaban heroína dentro del territorio norteamericano. Esto alteró la oferta de heroína en la ciudad de New York, la cual era el principal mercado de esta droga en el país, ya que el precio se triplicó y la pureza bajó a la mitad (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106), ocasionando que los consumidores deban recurrir temporalmente al uso de otras drogas en reemplazo. No obstante, este logro no fue permanente, ya que los sindicatos encargados del tráfico ilegal se trasladaban constantemente, pasando por el Sudeste Asiático y México, siempre un paso delante de las autoridades y agentes estadounidenses.

Diez meses después de su reelección como Presidente en 1972, Richard Nixon señaló un importante avance en este tema, diciendo que Estados Unidos había doblado la esquina con respecto a la adicción a las drogas. Esta aseveración del presidente enviaba un mensaje de triunfo que advertía la intención de reducir su retórica sobre la guerra contra las drogas. El propósito de este discurso era recalcar que sí se habían logrado avances significativos para detener el consumo y comercio de heroína, y también que una vez terminadas las elecciones, Nixon estaba ansioso por justificar y nivelar el tremendo gasto federal que se había hecho en aplicar las políticas antidrogas. A continuación, el esfuerzo federal por controlar el comercio de drogas bajaría su ritmo, los programas pasaron del control de la Casa Blanca al de la burocracia federal; las campañas contra los vendedores y consumidores callejeros fueron abandonadas; y muchas de las responsabilidades de los

programas de drogas irían a las administraciones estatales (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

A pesar de que la visibilidad y la controversia del esfuerzo federal fueron sustancialmente reducidas, las instituciones y la lógica de la guerra contra las drogas de Richard Nixon quedó establecida de forma permanente, aunque ya no tuviera su prioridad original en la agenda política nacional. El presupuesto asignado se mantuvo alto durante las siguientes administraciones, si bien el ritmo de expansión se frenó después del discurso presidencial de victoria, el gasto gubernamental nunca volvería a bajar a los niveles precedentes. Se debe recalcar que las agencias creadas durante este periodo seguirían operando y expandiéndose, pero sobretodo que el vínculo expuesto entre las drogas y el crimen no desaparecería de la mente del público ni siquiera después de su declaración de éxito (Bertram, Blachman, Sharpe y Andreas, 1996: 106).

1.2. La influencia de EE.UU. en Latinoamérica y la exportación de políticas prohibicionistas.

La propaganda masiva y la presión política realizada por los Estados Unidos en contra del consumo y el comercio de drogas le permitieron exportar la securitización de los narcóticos a la comunidad internacional. La guerra contra las drogas no fue formulada por actores racionales ni contó con las respectivas bases científicas, sino que fue un producto de la identidad, la cultura, las normas y sobre todo fruto de la estrategia política en Washington (Bentham, 2010: 1). De todas maneras, el aumento de esta industria a nivel internacional alteraría definitivamente el proceso de construcción social que se formaba en los países de Latinoamérica, ya que cambiaría los intereses, ergo el comportamiento de los individuos en estos países, excusando la cooperación de EE.UU. con el fin de nivelar la situación causada por la progresión de la demanda (Barriga, 1993: 178).

Dentro de esta interacción, se categorizó a los países productores como incapaces de solucionar el problema por su cuenta y a EE.UU. como el líder mundial que tenía la obligación moral de intervenir. Así, la potencia del norte se concentró más en la institucionalización cooperativa (Carvajal, 2009: 206) con los países afectados por la producción de cultivos ilícitos, que en el control de su propia demanda interna, la cual constituía el punto de partida en este

proceso. La influencia de EE.UU. es evidente por el incremento en la cantidad de políticas prohibicionistas que se aplicaron en el continente. Esta cruzada contra la industria ilícita que se inició en el extranjero, subordinó a los objetivos sociales y a los derechos civiles en las agendas políticas de estos países. Además, las agencias norteamericanas, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, cometieron acciones censurables, contrarias al discurso de mantener el orden, (McDonald, 2013: 1) que terminaron causando malestar y descontrol en las comunidades foráneas.

1.2.1. El rol de liderazgo de EE.UU. y la Guerra contra las Drogas

El malestar social y el descontrol de la industria de las drogas se dio por la asimetría existente entre los países en desarrollo donde se producían los alcaloides y los países desarrollados en los que habitan los consumidores que constituyen su demanda. Con la excusa de nivelar esta situación se consideró indispensable que los países con mayor cantidad de recursos brinden asistencial internacional, ya que las drogas representaban un problema mundial. De esta manera, EE.UU. buscó convertirse en el país líder que invertiría sus recursos para proteger la salud y la vida de todas las personas, presionando a toda la comunidad internacional a brindar la ayuda a los Estados más débiles (Barriga, 1993: 178-179). Los países con menos recursos recibirían todo tipo de proyectos de cooperación para tratar de lidiar con el problema del tráfico internacional.

Además, históricamente el control de Estados Unidos del comercio de drogas se ha basado con el modelo de contención, al considerar que la mejor forma de reducir la demanda era eliminando la oferta (Fryer, 1993: 1). Así, el gobierno norteamericano usó su poder como líder mundial para incitar a las demás naciones a unirse en su lucha para combatir el crecimiento de la industria de las drogas en sus territorios. En el año de 1978, se creó el Departamento Estatal de la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos⁸, que sería renombrado en 1994 como BINLEA, para que se encargue de los aspectos internacionales con relación al problema de las drogas. Este departamento tenía dos objetivos principales en su programa de control de sustancias narcóticas: usar el alcance de la diplomacia de EE.UU. para persuadir a los gobiernos extranjeros sobre la importancia del control de las

⁸ En inglés, *Department of State's Bureau of International Matters*.

drogas en las relaciones bilaterales y multilaterales para que cooperen con EE.UU.; y emplear los programas en proceso para ayudar a detener el flujo de drogas ilegales a territorio norteamericano (Gerber y Jensen, 2001: 161).

Cuando el Presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas convocó a los embajadores de Francia, Turquía y México, e hizo una petición formal para que los mismos guiaran a los países a los que representaban a tomar medidas más agresivas con respecto al tráfico internacional de drogas. Estados Unidos se comprometió a asistir financieramente a estos países con el fin de alcanzar sus propósitos de erradicación de las drogas. Por ejemplo, en el año de 1973, granjeros de Francia y Turquía fueron capaces de abandonar el cultivo de adormidera, que es la planta que sirve de base para la elaboración de opio y heroína, y dedicarse al cultivo de productos alternos, gracias a la ayuda norteamericana de 20 millones de dólares (Chepesiuk 1999: 160).

La interpelación prohibicionista de Estados Unidos atrajo la solidaridad de los países productores para resolver esta problemática con alcance internacional. El discurso norteamericano sirvió para legitimar la presencia de este país fuera de sus fronteras y para que su política sea respaldada por medidas domésticas. La lógica de Seguridad Nacional cumplió el papel de proteger y extender los intereses estadounidenses de libertad, supervivencia y desarrollo dentro del marco de valores de las sociedades extranjeras. No obstante, cabe señalar que estrictamente hablando, el combate al narcotráfico no responde a una amenaza real⁹ contra el estado-nación y se origina del propio patrón de conducta interno. Por ello, resulta controversial que en la guerra contra las drogas sea necesario intervención en el extranjero y la movilización de recursos militares (Bonilla, 1992: 40-42).

Para algunos académicos es importante el hecho de que EE.UU. como *hegemón* tenga un enemigo externo común de manera que pueda demostrar su carácter ante la comunidad internacional. Con este fin, la política exterior de EE.UU. estaba definida durante las décadas de los 70 y 80 en parte por la lucha contra el comunismo y en otra parte por la guerra contra las drogas (Thoumi, 2002: 44). Sin embargo, no se puede decir que ninguna haya sido

⁹ El comercio y el consumo de drogas no afecta directamente a intereses vitales en la supervivencia de un Estado, ya que constituyen una amenaza a la integridad territorial, tampoco es un acto premeditado por un actor externo para desestructurar una determinada sociedad, y si bien afecta a intereses individuales, no responde a una lógica de interacción de actores estatales (Bonilla, 1992: 42).

desplazada por la otra sino que al contrario las políticas fueron aplicadas de tal manera que en lugar de buscar resultados excluyentes, estas fueron complementarias para así perseguir los intereses económicos y políticos de los EE.UU. dentro de la agenda de relaciones exteriores con otros países (Bonilla, 2004: 43).

1.2.2. Las circunstancias y las perspectivas de los países Andinos.

La perspectiva de los países andinos sobre la problemática de las drogas es diferente a la de Estados Unidos, ya que responde a su construcción social basada en su historia, su cultura y sus valores. Por ejemplo, en países como Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia existen cultivos de plantas que contienen sustancias psicoactivas, las cuales han sido utilizadas por las comunidades indígenas incluso antes de la colonización española. En la tradición histórica de las culturas andinas las drogas de uso más frecuente han sido el alcohol y la coca. De entre la dos, la coca ha sido un mayor objeto de estudio y según los historiadores a esta le corresponde una gran importancia en la historia así como el oro y el tabaco (Rivera, 1998: 147).

La coca tiene una tradición larga en esta región ya que su uso siempre ha estado presente en las diferentes comunidades indígenas de América del Sur. El uso de la misma proporcionaba a los indígenas un mayor rendimiento laboral con una menor ingesta de alimentos, ya que ayudaba a tener más fuerza y a atenuar el hambre, e inclusive era considerada como un alimento nutritivo por su contenido de vitaminas (Rivera, 1998: 147). Los historiadores consideran que la coca ha estado presente en estas comunidades por más de miles de años, aunque no se pueda precisar la información con respecto al rol social que jugó antes de la llegada de los españoles. Se ha encontrado evidencia de que fue consumida por el Imperio Inca, que se extendía desde los territorios que ahora corresponden a Bolivia y al sur de Colombia, y también por la tribu muisca que se encontró en el territorio colombiano (Thoumi, 2002: 47).

Varios analistas Latinoamericanos han sostenido en sus críticas con respecto a las políticas sobre las drogas que Estados Unidos no ha dado la importancia necesaria a las ciencias sociales al momento de formular la respectiva legislación. No se tomaron en cuenta elementos sociológicos como: la influencia en la demanda de las drogas, la marginalidad y la exclusión social

en relación al consumo, el impacto en los elevados márgenes de ganancia y la violencia dentro de la industria. Las falencias causadas por la falta de estos estudios, ahora considerados como indispensables, se extendieron a las políticas que adoptarían los países de la región andina por la influencia norteamericana; este sería el caso de los intentos fallidos en la aplicación de políticas como: la sustitución de cultivos, los desarrollos alternativos, la extradición de traficantes y la prohibición en sí (Thoumi, 2002: 45).

Además, dado que en este caso no hubo un estudio científico previo, existen numerosos argumentos lógicos en contra de la legislación prohibicionista de EE.UU. Primero, que la decisión de consumir drogas es propia de cada individuo y que los gobiernos no deberían interceder. Segundo, que las políticas de interdicción no dieron los resultados esperados y fueron un despilfarro de recursos económicos, 1 trillón de dólares de 1970 al 2012. Tercero, es necesario concentrar los esfuerzos en controlar la demanda para así reducirla en lugar de enfocarse en la oferta, para evitar la sobrepoblación en las cárceles. Cuarto, que dado el gran porcentaje de personas pertenecientes a minorías encarceladas por delitos de drogas, existía 5 veces más personas de color encarceladas que blancas por motivos de drogas. Por último, la legalización de las drogas permitiría un ingreso aproximado de 45 billones de dólares (Branson, 2012: 1).

Estas políticas estadounidenses no han sido bien recibidas en algunos países de la Región Andina, especialmente bajo la teoría de dependencia. Este es el caso de Bolivia, en el cual el Estado considera a los agricultores de coca como las víctimas de este fenómeno, ya que componen el último eslabón de la pirámide capitalista en la que EE.UU. se queda con la mayor parte de las ganancias y de los beneficios. En este país se considera a las políticas de EE.UU. como una potencial amenaza a su soberanía. Asimismo, los analistas económicos sostienen que la economía boliviana fue alterada al momento que se le asignó la sustitución del cultivo de plantas ilegales por otro tipo de cultivos sin contar con el respaldo de los respectivos estudios económicos. Además, las autoridades se quejan de estas políticas prohibicionistas, ya que a causa de estas su país no recibe los réditos correspondientes de la industria ilegal de la droga (Thoumi, 2002: 54).

La problemática de las drogas no puede ser vista solamente desde la perspectiva de los EE.UU. y sus países aliados, sino que amerita observar diferentes realidades para poder aportar juicios de valor más completos. Así, en los países en vías de desarrollo de Latinoamérica no se puede considerar este tema solo a la luz del debate moral propuesto por EE.UU., sino que se debe tomar en cuenta variables como la defensa de los ingresos y la mejora de sus precarias condiciones de vida. Bajo esta visión se puede observar que siguiendo la lógica dictada por el capital y el mercado que mueve esta industria, la decisión de cultivar plantas ilegales responde a una oportunidad que brinda el mercado mundial a estas personas de escasos recursos que se vieron empujadas a la ilegalidad con la esperanza de satisfacer sus necesidades básicas biológicas y sociales (Thoumi, 2002: 54).

Dentro de Latinoamérica han existido opiniones divididas sobre el fenómeno de las drogas, ya que si bien algunos consideran necesaria la ayuda norteamericana para erradicar el problema de las drogas, otros la ven como una estrategia política para maximizar sus beneficios. Sin embargo, se debe tomar en consideración que parte de los opositores a la erradicación de los cultivos lo hacen porque tienen intereses propios dentro de esta industria. Por ejemplo, los narcotraficantes junto con la ayuda de alianzas políticas han argumentado en contra de la erradicación de los cultivos de coca indicando que son parte de la identidad cultural de la región. Dichas manifestaciones han sido ignoradas, ya que se las consideró como argumentos manipuladores y sin fundamentos que únicamente perseguían mantener la industria de procesamiento y distribución de cocaína (Barriga 1993: 35).

1.2.3. La ideología de EE.UU. y su influencia en su política externa.

El partido republicano en EE.UU. tenía una tendencia conservadora y consideraba a las drogas como una amenaza directa a la Seguridad Nacional y a la moral dentro de una sociedad mayoritariamente religiosa. Así, acciones como el consumo, la producción y el tráfico de estas sustancias ilícitas no puede ser toleradas, y deben ser penalizadas hasta que se logre suprimir este tipo de comportamientos de forma permanente. Esta perspectiva del problema propone que aquellos que no respeten las normas establecidas al respecto sean considerados como personas dañinas que deben ser detenidas y sancionadas; mientras que trasladando esta línea de pensamiento al espectro

global, se sugiere que los países productores de estas sustancias son la raíz del problema, ya que no se ven aptos para detener el accionar de estos delincuentes, cuyas operaciones amenazan directamente a la seguridad nacional de los EE.UU. (Thoumi, 2002: 38-39).

Dada la magnitud de la propaganda antidroga propuesta por el gobierno de EE.UU. en la guerra contra las drogas, las políticas fueron llevadas a la esfera internacional. Sin embargo, esto ha generado debate y malestar en los países donde la potencia del norte ha intercedido con el fin de erradicar la oferta de drogas, ya que esto denota el énfasis que se ha dado en reducir la oferta en lugar de concentrarse en eliminar la propia demanda interna. Los Estados Unidos no priorizaron garantizar el cumplimiento de la ley dentro de su propio territorio, sino que decidieron emplear sus recursos en cruzar las fronteras propias y ajenas, llevando consigo una guerra que en muchos países no tenían el contexto adecuado para llevarla a cabo (Zárate 2003: 24).

Las autoridades estadounidenses sostenían que no podían encargarse solos del comercio de drogas en su país, y que para tal efecto necesitarían la cooperación de la comunidad internacional, ya que la mayor parte del suministro de las drogas provenía del extranjero. A este fenómeno se lo describe con *la ley de Herodes*, ya que Estados Unidos no acepta su propia responsabilidad dentro del fenómeno del comercio ilícito de drogas, sino que se lava las manos y presiona a otros gobiernos de manera que acepten y acaten sus políticas para que peleen su lucha por ellos. Además, el enfoque aplicado no se concentró solo en ampliar el interés político de los países para que cumplan a cabalidad lo estipulado en sus propias leyes y en los tratados internacionales en los cuales son signatarios, sino fue crear convenios bilaterales y multilaterales que favorecían a los intereses económicos y políticos de EE.UU. (Zárate 2003: 18).

Estas alianzas favorecieron a la política y economía norteamericana ya que se consiguió que los gobiernos extranjeros les concedan el permiso para construir bases aéreas y militares dentro de su territorio, y además favoreció a la industria interna con la venta de armas y herbicidas (Thoumi 2002: 43). Sin embargo, lo más alarmante fue que en las operaciones de intervención no se respetó el discurso sobre promover el orden y la legalidad, sino que se ignoraban las leyes en estos países con acciones de dudosa moral, ya que

para los norteamericanos estas constituían delitos excepcionales que se justificaban en la lucha contra el narcotráfico. Históricamente, las agencias americanas encargadas de luchar contra el tráfico de drogas han priorizado los intereses geopolíticos, aliándose en múltiples ocasiones, por motivos de utilidad, con los mismos traficantes (Zárate 2003: 24).

Una de las principales críticas a las políticas prohibicionistas de las drogas es que el mayor porcentaje del valor agregado y las ganancias se quedan en los países de llegada o de consumo que normalmente son los más desarrollados. Las enormes ganancias generadas por el comercio de droga atrae la atención de las altas esferas sociales para que apoyen la aplicación de leyes represivas al comercio de drogas, ya que éstas lo vuelven aún más rentable (Thoumi, 2002: 57). Algunos analistas incluso sostienen que el gobierno de los EE.UU. exageró el discurso antidrogas (Merino, 2006: 1) al momento de afirmar que estas eran un peligro inminente para la estabilidad de una sociedad, con el fin de quedarse con los mayores réditos de la industria, reteniendo así en algunos casos hasta el 95% del total de utilidades en sus bancos (Thoumi, 2002: 57).

Por otro lado, resultaría impreciso considerar que en el funcionamiento del comercio internacional de drogas los países latinoamericanos son simplemente actores impotentes o víctimas, atrapados dentro de este negocio. Resultaría más completo tener en cuenta que dichos Estados están compuestos por individuos que tienen sus propias características e intereses y cuyas acciones colaboran en la estructuración de esta problemática. De esta manera, se puede decir que el interés de los habitantes de estas zonas, en las que existe el cultivo de plantas ilegales, está marcado por la ambición derivada de la previa existencia de la demanda de drogas por parte de la población norteamericana; la cual los incitó a consolidar una industria de producción, elaboración y distribución al por mayor con el fin de satisfacer al creciente número de consumidores (Thoumi, 2002: 57).

1.3. La consolidación de Colombia como principal exportador de cocaína y su mercado con EE.UU.

El hecho de que Colombia se consolidara como el principal exportador de cocaína en el mercado estadounidense es el resultado de la interacción

entre los dos países durante la década de los 70 (Wendt, 1992: 391). Las drogas no fueron un tema prioritario en la agenda política colombiana antes de los 60, cuando la influencia de la cultura norteamericana se extendió gracias a los medios y a los miembros de los cuerpos de paz que realizaban ahí sus labores. La guerra contra las drogas forzaría el traslado del cultivo de drogas en México y en países centroamericanos al territorio colombiano. Las severas políticas represivas contra las drogas alucinógenas y opiáceas inducirían al consumo de cocaína como producto sustituto. Asimismo, Colombia tendría una ventaja competitiva frente a sus competidores para suplir esta demanda, por su cercanía con los países productores que eran Perú y Bolivia, el fácil acceso al mercado norteamericano, la vasta selva amazónica y la idiosincrasia de su gente propensa a las actividades ilícitas (Gaviria y Mejía, 2009: 1).

Asimismo, la iniciativa de involucrarse en el negocio de las drogas nació de la interacción entre contrabandistas colombianos y estadounidenses (Henderson, 2015: 36). También, el perfeccionamiento en el procesamiento de clorhidrato de cocaína se daría gracias a la influencia de los miembros norteamericanos en los cuerpos de paz dentro de Colombia (Samper, 2013: 46). Demostrando así, que esta misma alianza de carácter político y económico provocó que este país se encontrara en la mitad de dos tendencias norteamericanas que tiraban en sentidos opuestos. Por una parte, la potencia del norte ejercía una influencia política de carácter prohibicionista, y por otra parte, este mismo país constituía el principal mercado mundial de consumo de cocaína, lo que provocaba una influencia económica que incitaba a los traficantes de drogas a abastecer tal demanda (Chica, 2004:1)

1.3.1. La cocaína y el aumento de su demanda en EE.UU.

La hoja de coca no se cultivó en Europa debido a que solo crece en valles húmedos, razón por la cual la historia de la misma empieza en el mundo occidental a partir del descubrimiento de América. La hoja de coca fue considerada en Europa y EE.UU. como una planta medicinal que ayudaba a aliviar las úlceras y los dolores de estómago, de cabeza y musculares, también la usaban para provocar lapsos de euforia que ayudaran a tratar la depresión. El alcaloide extraído de esta planta, denominado como cocaína fue descubierto por primera vez en el año de 1858. En 1884, Karl Koller empezó a utilizarla en el campo de la medicina como anestesia en remplazo de la morfina, y en 1885

Sigmund Freud la utilizaría como tratamiento para la depresión. No obstante, estos científicos no tardaron en darse cuenta la reacción tóxica y los peligros de la sobredosis que acarrearía el uso de esta sustancia (Barriga 1993: 37).

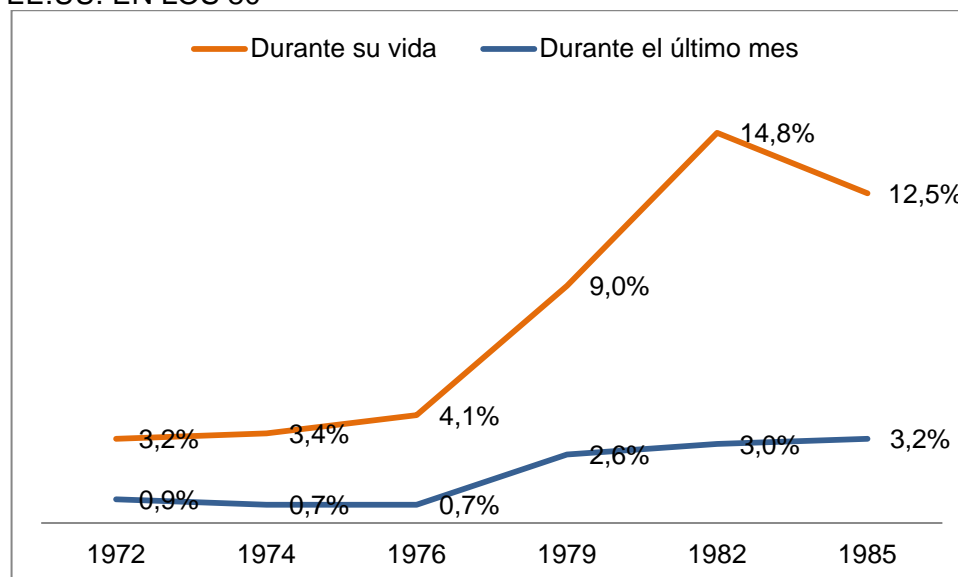
En Europa la cocaína empezó a afectar a la sociedad en las primeras décadas del siglo XX y dado que los laboratorios se encontraban en Alemania y la época coincidía con la Primera Guerra Mundial, se les acusó a los alemanes de utilizar la cocaína para desestabilizar al ejército francés. De igual manera, se extendería el consumo dentro de la sociedad especialmente en las esferas de la mafia, el crimen, la prostitución y el arte (Barriga 1993: 37). Por otro lado, el tráfico de drogas disminuyó durante las dos Guerras Mundiales, ya que el conflicto entorpecía el comercio de drogas, por lo que el consumo de drogas como la cocaína no sería percibido como un problema en el mundo occidental de la postguerra (Thoumi, 2002: 42).

La cocaína es la droga de uso más versátil ya que puede suministrarse de muchas formas diferentes, razón por la cual su uso es más frecuente que el de las demás. La coca se puede ingerir como líquido cuando se machaca las hojas y se las deja macerar en bebidas alcohólicas, que comúnmente son vinos. También la hoja seca se puede fumar como cigarrillo o puro. Asimismo, la cocaína ya procesada puede ser inyectada inmediatamente debajo de la piel, en el músculo o en la vena para maximizar el efecto de la misma. Igualmente se puede administrar por fricción al frotarla en la cavidad bucal o en las zonas íntimas como afrodisíaco. Sin embargo, la forma más común de consumo de la cocaína, con un 93% de preferencia por sus usuarios, es inhalar el alcaloide por vía nasal (Barriga, 1993: 38).

En sus inicios la guerra contra las drogas atacó las raíces del movimiento hippie y las consecuencias de la guerra de Vietnam, por lo que se enfocó principalmente en el consumo de marihuana y heroína. Las medidas aplicadas penalizaban de forma más severa el consumo de las drogas alucinógenas y opiáceas, por lo cual bajó la demanda de las mismas. Además, el tráfico ilegal de estas también disminuyó gracias a las primeras operaciones realizadas: en Francia y en Turquía con respecto al desmantelamiento de la red de tráfico de heroína conocida como "*French Connection*" y en México con la ejecución de operaciones para eliminar el paso y el cultivo de marihuana. Esto permitiría el surgimiento de la cocaína como producto sustituto, ya que su uso

tenía penalizaciones menos severas y era socialmente aceptado porque las celebridades de la época las consumían abiertamente (Gaviria y Mejía, 2009:1-2). Para el año de 1985, cerca de 22 millones de estadounidenses consumían cocaína, es decir más del doble que al inicio de aquella década¹⁰ (Manning, 2001: 1). Así, podemos ver que había aumentado el porcentaje tanto de individuos que la consumían regularmente, como de aquellos que la habían probado ocasionalmente.

GRÁFICO 1
TENDENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN LA POBLACIÓN ADULTA DE EE.UU. EN LOS 80



Fuente: Rouse (1991)

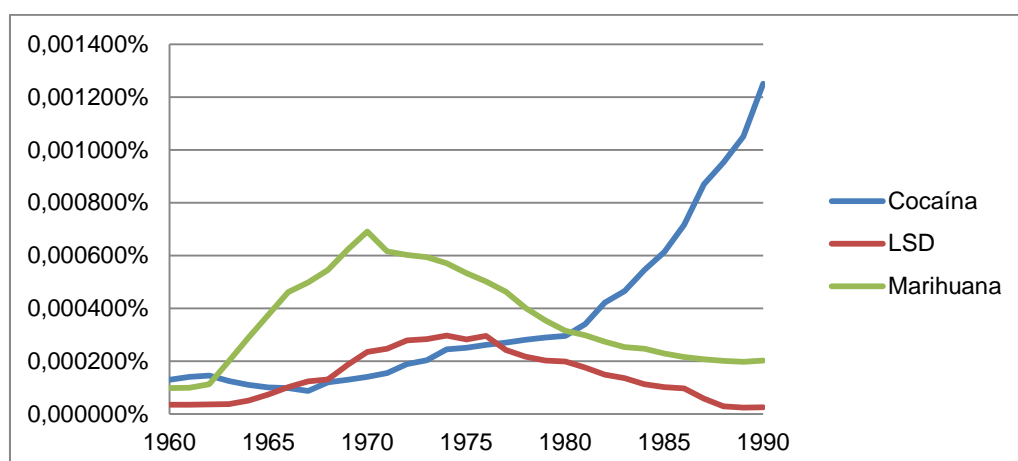
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

A mediados de la década de los 70 el consumo de cocaína aumentó entre las clases altas y medias de EE.UU., principalmente porque los profesionales jóvenes y las celebridades la usaban regularmente con fines recreativos siguiendo la tendencia de moda (Lee, 1988: 1). El hábito del consumo de cocaína se popularizaría en los medios y las publicaciones estadounidenses¹¹, como por ejemplo en las revistas *The New York Times*, *Newsweek*, y en el libro *Cocaine: Its History, Uses and Effects*, del periodista Richrad Aisley. En dichos textos se describía a la cocaína como una droga recreativa casi inocua para la salud y se vinculaba su consumo con los estratos sociales más altos (Narconon, 2015: 1).

¹⁰ Ver anexo 1

¹¹ Ver anexo 2

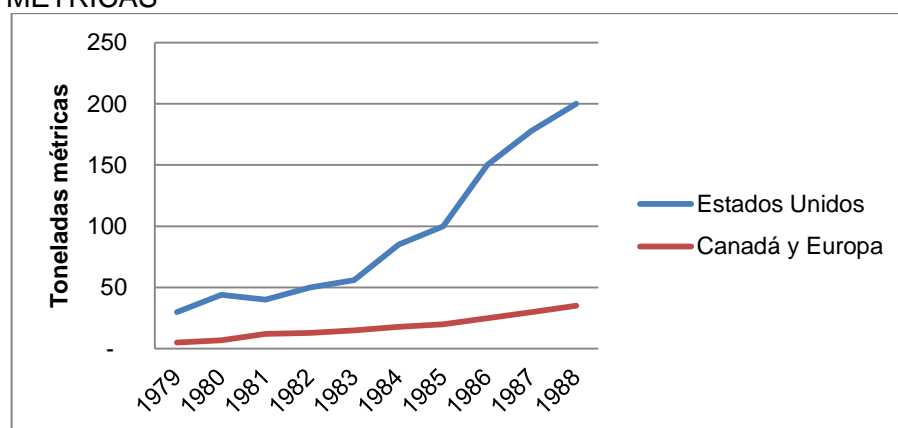
GRAFICO 2
PORCENTAJES DE FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS
EN PUBLICACIONES EN INGLÉS



Fuente: Gaviria y Mejía (2009)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Sin embargo, esta situación, cambió en la década de los 80 debido a las campañas de educación organizadas por el gobierno. Si bien el consumo de la droga disminuyó entre las clases más acomodadas, este siguió en aumento en los grupos de gente con bajos recursos y migrantes, además de que durante este periodo se empezó a comercializar base de coca o *crack* en las calles, lo cual posicionó a EE.UU. como el país con mayor demanda de cocaína en el mundo¹² (Thoumi, 2002: 43).

GRAFICO 3
IMPORTACIONES ESTIMADAS DE COCAÍNA ILÍCITA EN TONELADAS
MÉTRICAS



Fuente: Montagne (1991)
Elaborado por: Jonathan David morales Olalla

¹²Ver anexo 3

Esta situación reafirmó la necesidad de endurecer las políticas prohibicionistas y dio como resultado un número de encarcelamientos de aproximadamente 1'350.000 personas a finales de la década de los 80 (Thoumi, 2002: 43).

1.3.2. La oferta y la ventaja competitiva de Colombia.

En Colombia, al igual que en los demás países de la región andina, como Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador, y en algunos de Centroamérica, el cultivo de coca antecedió a la llegada de los españoles al continente en el siglo XV. La coca era cultivada por numerosas comunidades de tribus indígenas¹³ y según los historiadores ésta tuvo una gran importancia en la historia como el oro y el tabaco. Los españoles usaban la coca como medio de tributo en las encomiendas y de pago por mano de obra, ya que su utilización era común y frecuente en las comunidades, lo que facilitaba su redistribución. Además, el uso de la misma proporcionaba a los indígenas un mayor rendimiento laboral con una menor ingesta de alimentos (Rivera, 1998: 147). Estos cultivos disminuirían por la supresión de la corona española, que se efectuó porque muchos nativos morían por las extremadas condiciones cálidas en estos cultivos y por motivos religiosos (Hirschkind, 2008: 1).

A finales de la década de los 70 el narcotráfico se convirtió en un problema central de largo alcance para los países andinos. Los procesos económicos y las estructuras sociales y políticas se vieron alterados permanentemente por la dinámica de esta industria, debido a que gran parte de la base campesina de estos países estaba involucrada en la producción de hoja de coca y en la refinación de clorhidrato de cocaína. Si bien Perú y Bolivia se dedicaron en mayor medida a la producción de cultivos ilegales¹⁴, y Ecuador fue principalmente un país de paso (Hirschkind, 2008: 1); Colombia se especializó en el procesamiento y la comercialización de este alcaloide.

“Colombia emergió en los años setenta como el principal país refinador y en la mayor parte de los años ochenta controló aproximadamente un 75 por ciento de toda la cocaína refinada exportada de la región de los Andes a los Estados Unidos.” (Cruz, Revilla y Seminario, 1994: 55)

¹³ Los historiadores indican que la hoja de coca en Colombia era utilizada por los pueblos de lo que ahora es: Cali, Popayán, Antioquia, Caldas, Magdalena, Guajira, Bolívar, Meseta Cundiboyacense, Cauca, Huila y Nariño (Rivera, 1998: 148).

¹⁴ Ver anexo 4

Asimismo, en los casos de Colombia y Perú la violencia política, dada por las disputas dentro de su gobierno y los grupos insurgentes, facilitaron la expansión de esta industria ilegal por el marco de impunidad que derivó de la falta de control y presencia estatal. Esta situación incidiría en las relaciones políticas exteriores de los países de la región con Estados Unidos (Paéz, 1991: 2-4), ya que alrededor del 90% de clorhidrato de cocaína que se consumía en este país se producía en los países de la región andina, y era principalmente comercializado por Colombia, llegando así a exportar entre 100 y 200 toneladas métricas del alcaloide a finales de la década de los 80¹⁵ (Manning, 2001: 1).

Por otro lado, las circunstancias sociales e históricas de la época, con una violencia expandida por todo el país, pueden explicar la vulnerabilidad de Colombia en cuanto a su ingreso en el mercado de drogas ilegales (Ramírez, 2001: 16) al momento que la demanda de marihuana aumentó en la década de los 70, la cocaína en los 80 y la heroína en los 90 (Lee, 1988: 1). Antes de 1970, las drogas no constituían un tema prioritario en la agenda política, el tráfico de cocaína y heroína existía pero en pequeñas cantidades. La coca era cultivada en unas pocas áreas por indígenas campesinos que la masticaban. La demanda de esta planta aumentó especialmente en los países andinos, porque esta no se da en regiones de EE.UU. ni de Europa. La oferta de drogas empezaría en respuesta al crecimiento de la demanda estadounidense y se expandiría por la incapacidad y la corrupción estatal (Thoumi, 2011: 210-212).

En este país existen cultivos ilícitos de marihuana, amapola y coca, pero su principal producto en el mercado es la hoja de coca y la cocaína ya procesada. Asimismo, esta industria se creó simultáneamente con la declaración de la guerra contra las drogas en EE.UU., es decir a inicios de la década de los 70. La oferta surgió a partir de la alta demanda que había de parte de los consumidores en EE.UU., que brindó una oportunidad de generar ganancias a la población pobre de estas regiones de Colombia (Lee, 1988: 1). El rápido crecimiento del negocio del narcotráfico sorprendió a los campesinos de estas zonas, quienes mayoritariamente eran personas refugiadas por la violencia del interior del país que hasta ese momento vivían apenas por encima del nivel básico de subsistencia, dedicándose al cultivo de algunos productos

¹⁵ Ver anexo 5

agrícolas pero sin acceso a los mercados y sin ningún apoyo estatal (Chernick, 2008: 210).

Colombia empezaría a figurar en el mercado mundial de las drogas, cuando las fumigaciones de los operativos antidrogas estadounidenses forzaron al traslado de cultivos ubicados en México y Jamaica. Así, el parque de Sierra Nevada, en la región de Santa Marta que da al Mar Caribe se convertiría en la nueva sede para el cultivo de estos productos. Si bien algunas comunidades utilizaban la marihuana desde tiempos precolombinos, el consumo con fines no religiosos no se popularizaría hasta la llegada de los voluntarios estadounidenses en los Cuerpos de Paz¹⁶. A inicios de la década de los 70, cerca de 10.000 campesinos, asesorados por especialistas extranjeros, habían sembrado 28.000 hectáreas de *cannabis sativa*¹⁷, con el fin de abastecer la gran demanda del mercado en el sur de Estados Unidos, pues el consumo regular de esta sustancia narcótica era una de las consecuencias de la guerra de Vietnam (Samper, 2013: 46-47).

Las favorables condiciones sociales y geográficas de la Sierra Nevada como: una economía de subsistencia campesina, su ubicación frente al Mar Caribe y la vinculación de sus habitantes con actividades de contrabando; permitió a los nuevos colonos narcotraficantes reconquistar desde ahí su parte del mercado perdido por las fumigaciones en México y en otros países de Centroamérica. El cultivo de marihuana se popularizaría al observar que sus rendimientos excedían en un 250% al de otros cultivos legales de la zona, como café y tabaco. Esto provocó una fuerte represión gubernamental frente a los nuevos cultivos que desencadenó en un conflicto social interno que deterioraría las tierras de esta zona, obligando a los traficantes a trasladarse a otras regiones del país con características similares como el departamento de Chocó y la Serranía de la Macarena (Samper, 2013: 47).

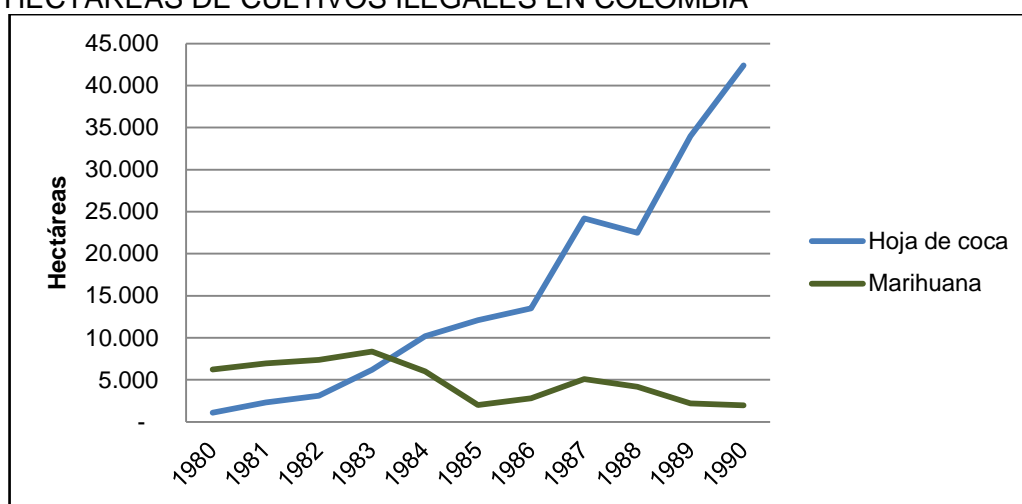
En estas zonas se empezó a combinar el cultivo de marihuana con la elaboración de clorhidrato de cocaína a partir de pasta de coca importada desde Bolivia y Perú. Dado que con el comercio de marihuana los traficantes ya se habían dado cuenta del potencial que había en este negocio, buscaron constantemente la forma de diversificar sus productos y abarcar una mayor

¹⁶ Este también fue el caso en el consumo de hongos alucinógenos (Thoumi, 2002: 108).

¹⁷ Es el nombre científico de la planta más común de marihuana (OND, 2012:1).

cantidad de mercado (Henderson, 2015: 36). Así, los traficantes colombianos decidieron dedicarse al negocio de la cocaína, ya que producía más réditos y era más fácil de transportar¹⁸. Así, eventualmente lograrían la integración vertical del negocio cuando empezaron a sembrar en sus tierras la planta de coca, englobando en su negocio las fases de cultivo, procesamiento y exportación del alcaloide (Samper, 2013: 47-48). Durante la década de los 80 la tendencia de la industria de la cocaína se mantuvo en crecimiento, mientras que la de la marihuana disminuyó¹⁹.

GRÁFICO 4
HECTÁREAS DE CULTIVOS ILEGALES EN COLOMBIA



Fuente: Belzher y Rodríguez (2004)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Colombia era el país con las condiciones más propicias para convertirse en el principal proveedor dentro de este negocio (Henderson, 2015: 37). El cultivo de la planta de coca resulta relativamente simple en el territorio de la Amazonía colombiana, la cual facilitaba el escondite de las plantaciones, los laboratorios y las bases operativas donde los traficantes ejecutaban el negocio. (Thoumi 2002: 112). También su ubicación geoestratégica era favorable, ya que este país se encontraba en el punto medio entre las zonas de cultivo de la materia prima y el principal mercado que era EE.UU. (Henderson, 2015: 36). Así, el comercio de cocaína se movilizaba desde la región amazónica donde se producía hacia el norte del país para ser exportada a Norteamérica.

¹⁸ A diferencia de la marihuana, que resultaba rentable pero difícil de contrabandear debido a que el valor de la misma era relativamente bajo en comparación con su relación de peso y volumen, la cocaína resultaba a la vez más rentable y fácil de contrabandear, ya que su presentación la daba una mayor densidad y facilidad de transporte (Thoumi, 2012: 112).

¹⁹ Ver anexo 6

GRÁFICO 5
MAPA DE LAS RUTAS DEL TRÁFICO DE COCAÍNA EN COLOMBIA



Fuente: Castillo (1996)
Elaborado por: Fabio Castillo

No obstante el desarrollo de esta industria no se hubiera logrado tan eficientemente de no haber sido por la colaboración de los miembros de los cuerpos de paz de EE.UU., quienes eran consumidores que habían sido influenciados por el auge del consumo de sustancias psicotrópicas en su país en los 60 y 70, instruyeron sobre los procesos químicos necesarios para extraer eficientemente de las hojas de coca la sustancia que conforma este alcaloide (Rivera, 1998: 147).

Al mismo tiempo, en Colombia la industria de las drogas contaría con una red de apoyo social que estaba compuesta por: empleados de instituciones estatales, militares, policías, políticos, guerrilleros, paramilitares, banqueros, y miembros afines dentro de la sociedad civil. Estos actores toleraron o dieron protección a los traficantes porque obtenían algún beneficio que correspondía a sus intereses (Henderson, 2015: 37). Esta red social que ayudó a mantener y a expandir este negocio permitió que el mismo penetre y corrompa las instituciones dentro del país, ya que sirvió como mecanismo para redistribuir

parte de las ganancias ilícitas hacia el resto de la población (Thoumi 2002: 125-126). Este apoyo de parte de las comunidades constituyó un elemento clave para que los carteles de drogas colombianos lograran obtener la supremacía del mercado norteamericano de cocaína, y por más de tres décadas se convirtieron en el principal proveedor del alcaloide (UNODC 2012: 1).

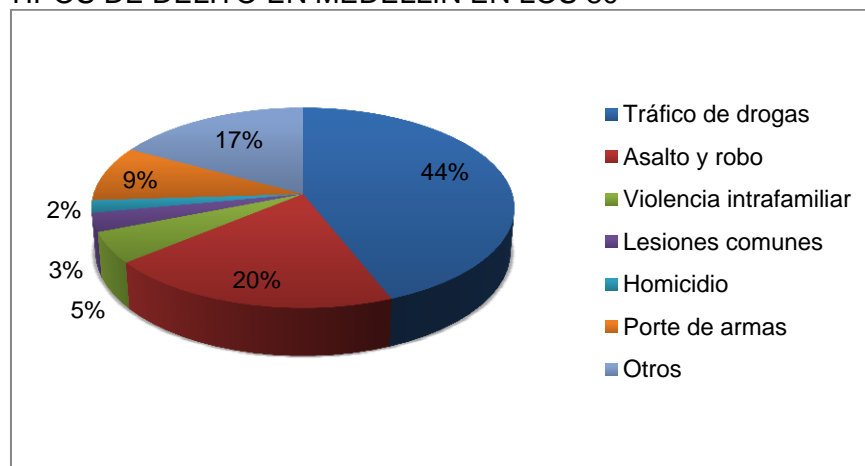
1.3.3. La diversificación y el desarrollo de la industria de la cocaína.

La industria de drogas es más grande y compleja en Colombia que en el resto de los países andinos y está compuesta por las tres principales drogas que se derivan de plantas: la marihuana, la heroína y la cocaína. De entre las tres, la industria de la cocaína sería la más importante y conllevaría a la formación de bandas violentas de narcotraficantes que permitan luchar contra la opresión policial (Samper, 2013: 48). Con este fin, los traficantes de las sustancias ilícitas cambiarían constantemente su ubicación, los procedimientos logísticos y las rutas de distribución. Conjuntamente, dentro de esta estructura se prefiere mantener el anonimato, en el que muchas veces los peones de más bajo rango no conocen a sus jefes o ni siquiera para quien trabajan. Además, por los altos ingresos, muchos funcionarios se involucrarían dentro del negocio, entorpeciendo la labor estatal (Thoumi 2002: 108). Todos estos elementos contribuyeron a entorpecer la búsqueda de soluciones efectivas ante este fenómeno.

Si bien la industria de las drogas dentro de Colombia inició con la industria de marihuana, esta no desarrolló las sofisticadas redes de distribución a nivel internacional que alcanzó la de cocaína. La expansión de esta industria se daría en la década de los setenta por el desempleo originado por el desplome de la industria textil en la región a causa del contrabando. Bajo el cristal constructivista, se puede observar que los intereses de los individuos en estas sociedades colombianas eran principalmente la acumulación de riquezas, lo cual derivaba en un comportamiento apático hacia las reglas de convivencia establecidas. Además, dado que en aquel entonces los contrabandistas estadounidenses solían confundir Colombia con Bolivia, estos empezaron a preguntar a los pasadores colombianos información sobre posibles proveedores de cocaína, lo cual les daría la idea de buscar maneras de surtirla ellos mismos (Henderson, 2015: 36).

La consolidación del mercado de drogas sería una consecuencia de la falta de capacidad de control que se dio por la casi nula presencia estatal en gran parte del territorio colombiano, la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales que era el resultado del sistema político clientelista de la época, la existencia de grupos insurgentes que recurrirían a acciones violentas y la disposición a usar la violencia por parte de los traficantes (Ramírez, 2001: 14-15). Esto sumado a la inestabilidad social existente, daría origen a una nueva actividad ilícita que afectaría todas las áreas y esferas de la sociedad colombiana basada en el narcotráfico de cocaína, creando así una nueva ola de violencia que rompería con todo lo ya establecido (Colombia Info, 2014: 1). La mayoría de crímenes perpetrados tendrían relación con el narcotráfico²⁰, de entre los cuales las principales operaciones desarrolladas fueron: el transporte, la comercialización, las técnicas de intimidación y soborno, y el lavado de dinero (Thoumi 2002: 108).

GRAFICO 6
TIPOS DE DELITO EN MEDELLÍN EN LOS 80



Fuente: Medina, Posso y tamayo (2011)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

El proceso de elaboración requiere de varios pasos que necesitan de recursos y un proceso ya definido. En primer lugar, es necesario cultivar la planta de coca, ya que esta constituye la materia prima que luego se procesará en tres fases principales. En la primera fase se producirá la pasta de coca a partir de las hojas de la planta, esto se lo realiza cerca de las plantaciones para evitar tener que transportar las plantas (Thoumi 2002: 122-123). La siguiente etapa consiste en pasar de la pasta a la base de cocaína (también referida como *crack*) y la tercera en transformar esta base en clorhidrato de cocaína

²⁰ Ver anexos 7 y 8.

que es la de mayor consumo en el mercado. Estos procedimientos son realizados en laboratorios, en este caso denominados como “cocinas” que deben estar equipados con maquinaria y sustancias químicas específicas²¹ (Rioja Salud 2014: 1).

TABLA 1
INSUMOS PARA PREPARAR 1 KG DE COCAÍNA EN 1980

Insumos	Cantidades (gramos)	Valor en USD
Hojas de coca	113.60	\$ 600.00
Ácido sulfúrico	5.00	\$ 5.33
Querosene	6.67	\$ 5.17
Lime	8.00	\$ 1.35
Carbonato de sodio	1.00	\$ 3.33
Agua	13000.00	\$ -
Total		\$ 615.18

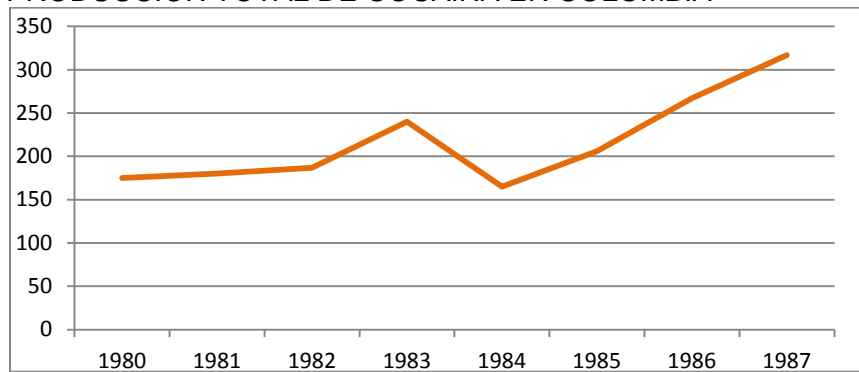
Fuente: Cruz, Revilla y Seminario (1994)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Dado que en un inicio la coca no se cultivaba en cuantiosas cantidades en el territorio colombiano y la idea de ofertar la misma se originó a partir del contacto con traficantes estadounidenses, el primer paso dentro de este negocio fue el contrabando ilegal a Estados Unidos de pasta de coca producida en Perú y Bolivia. Para lograr infiltrar estas sustancias al país, desde entonces hasta ahora, se ha enviado a personas con el alcaloide escondido en su equipaje o en su cuerpo, estos individuos vendrían ser denominados “mulas” por su connotación de cargar algo pesado y en este caso peligroso. Por otro lado, el éxito que tuvo la guerra de EE.UU. en la década de los 80 en reducir el cultivo de plantas ilícitas en Perú y Bolivia, provocaría la concentración de coca y cocaína en el territorio colombiano, cuya producción tuvo una tendencia positiva (Chernik, 2008: 209).

²¹ Lamentablemente, estos elementos son de fácil adquisición y sustitución, lo cual no permite un control en su comercio.

GRÁFICO 7
PRODUCCIÓN TOTAL DE COCAÍNA EN COLOMBIA



Fuente: Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz (1990)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Gracias a los altos ingresos obtenidos, estas operaciones escalaron en magnitud rápidamente y las personas que se dedicaban a este negocio conformaron “sindicatos” de exportadores, que se denominarían *carteles* (Henderson, 2015: 36). Mas estos grupos no constituían carteles en el estricto sentido económico, ya que no controlaban los recursos primarios que se necesitaba para la elaboración de cocaína, ni sus redes de comercialización podían influir directamente en el suministro de la materia prima ni en el precio del producto final. Estos supuestos carteles enfrentarán la competencia de otros productores y narcotraficantes. El objetivo principal de estos sindicatos fue el de minimizar los riesgos y garantizar las ganancias (Thoumi 2002: 124).

El discurso del Presidente Nixon creó una construcción social que vinculó definitivamente al consumo de drogas con el crimen. La securitización de las drogas, le permitió a los EE.UU. aplicar sus estrategias a nivel internacional para cumplir con los intereses en su agenda política. Esta cruzada por la interdicción de las drogas modificaría la demanda de los consumidores en EE.UU. y con esto los intereses y las identidades de las personas en las comunidades de los países exportadores, viéndose así alterado su comportamiento como anticipa el Constructivismo. En el caso de Colombia, este país contó con ciertas ventajas geográficas, técnicas y sociales, que le permitieron obtener la supremacía en la oferta de cocaína a nivel mundial. El Estado colombiano quedaría atrapado entre el discurso político moralista y la lógica capitalista del mercado. Esta nueva, estricta e incongruente política contra las drogas dio origen a la creación de una nueva necesidad y con ella los medios para satisfacerla, con esto se da cumplimiento al primer objetivo que

era: constatar la influencia de la Guerra contra las Drogas de EE.UU en la consolidación de Colombia como principal exportador mundial de cocaína.

CAPÍTULO II

LA NARCOTIZACIÓN DE LA RELACIÓN BILATERAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA

2.1. La inestabilidad y la violencia en Colombia.

A partir del año de 1946 Colombia sufriría una grave crisis social de origen político denominada como *La Violencia* y se extendería hasta el año de 1953, alterando definitivamente la dinámica de toda la sociedad colombiana (Gott, 1971: 212-213). Este conflicto tendría un inicio estrictamente interno pero se vería influenciado por elementos del contexto internacional, en especial de EE.UU. como el ataque a la comuna de Marquetilia y la Doctrina de Seguridad Nacional al momento de constitución de las FARC y los grupos paramilitares respectivamente (Nieto y García, 2008: 135). Los grupos sociales que se originaron durante este periodo de tiempo conformarían los grupos armados insurgentes que colaborarían a exacerbar el caos dentro del país. La escalada de este conflicto no solo provocaría el aumento de la agresividad y la crueldad entre los bandos no estatales, sino que influenciaría en la consecuente incursión del gobierno colombiano en técnicas de intimidación y represión social (Pizarro, 1992: 20-21).

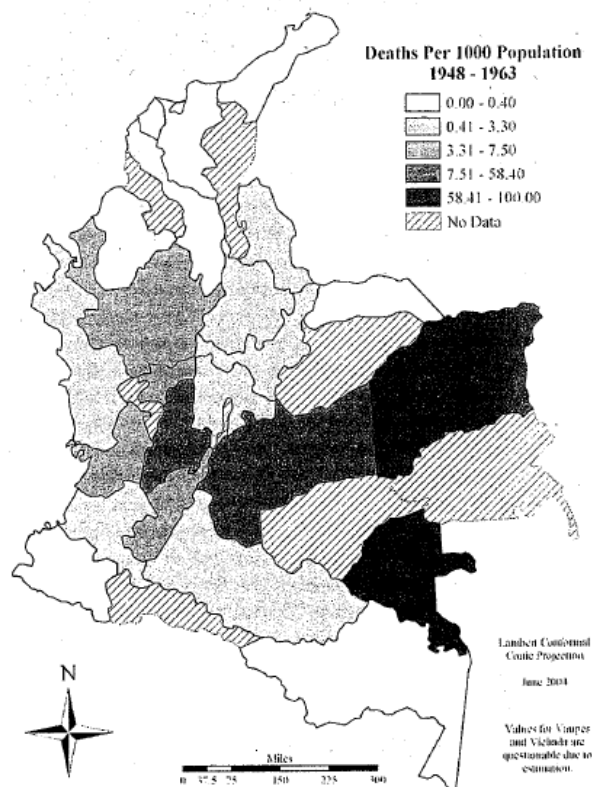
Tanto las guerrillas como los grupos paramilitares tienen en sus orígenes ideologías definidas que buscan promover el bienestar de las comunidades, sin embargo durante el proceso del conflicto estas buenas intenciones se verán tergiversadas. Las identidades de estas organizaciones sociales se modificarían radicalmente por el drástico cambio en sus intereses, ya que si bien al principio perseguirían buenas causas, con el tiempo solo buscarían su supervivencia dentro de la hostilidad del ambiente y su futura expansión (Nieto y García, 2008: 45). Los grupos traficantes de drogas jugarían un rol muy importante al momento de financiar las actividades y el crecimiento de estos grupos, mientras que los usaban en su propio beneficio. Asimismo, la influencia del dinero de las drogas daría lugar a casos de corrupción en las instituciones públicas, dando así más control sobre el país a los narcotraficantes (Thoumi, 2002: 2016-217).

2.1.1. La crisis política y la falta de presencia estatal.

El conflicto interno colombiano se daría a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente durante el periodo denominado como *La Violencia* que se comprendería entre 1946 a 1958²². Durante este lapso, en el país se darían múltiples casos de violencia rural, con actos que irían desde la simple agresión física hasta el homicidio con métodos que involucraban una crueldad brutal²³, llegando así a todas las esferas sociales del país, incluyendo la familia, la iglesia y la política. *La Violencia* estaría presente en todo el territorio colombiano, aunque variaba en su intensidad dependiendo de las regiones, provocando la muerte de lo que se estima una cifra aproximada de 300.000 personas (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 134) y la decadencia del comercio y la industria dentro de las comunidades; siendo el aspecto más trascendental durante este periodo el exceso de crueldad perpetrado en las víctimas (Gott, 1971: 212-213).

GRÁFICO 8

MAPA DE TASA DE MUERTE ENTRE 1000 PERSONAS DE 1948 A 1963



Fuente: Holmes, Amin y Curtin (2008).

Elaborado por: Holmes, Amin y Curtin (2008).

²² Algunos historiadores consideran que se extiende hasta mediados de la década de los 60.

²³ Entre las técnicas de muerte y tortura más atroces que se dieron estaban: mutilaciones y desmembraciones, crucifixiones, ahorcamientos, violación, extirpación de fetos, etc. (Gott, 1971: 214)

La Violencia originó una intensa disputa entre liberales y conservadores que nada tuvo que ver con la lucha de clases sociales, las ideologías extranjeras o cualquier asunto afuera de Colombia. Este fenómeno se dio ya que si bien la hegemonía liberal se había mantenido durante los años anteriores, en el año de 1946 se lanzaron dos candidatos por este mismo partido a la presidencia de la república, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, dividiendo así la opinión de los votantes liberales, y provocando consecuentemente la victoria del candidato por el partido conservador, Mariano Ospina Pérez. Antes de esto los conservadores habían sido relegados del campo político y habían sido víctimas de ataques violentos por parte de los partidarios liberales, a partir de dicha victoria electoral los conservadores empezarían una serie de acciones violentas en represalia (Kline, 2015a: 1).

Asimismo, el 9 de abril de 1948 el líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, fue asesinado en plena luz del día en el centro de Bogotá, lo cual ocasionó una serie de protestas y actos violentos alrededor del país con un aproximado de 570 millones de dólares en pérdidas materiales; este evento sería denominado como el *Bogotazo* (Kline, 2015a: 1). Dicho evento provocaría un levantamiento popular que duraría tres días y dejaría en ruinas a la ciudad capitalina por los saqueos, poniendo así en evidencia la emoción popular que se extendería como lucha armada en las zonas rurales. Resulta importante resaltar el hecho de que durante esta revuelta no hubo la determinación de derrocar al gobierno de Ospina Pérez, como acusarían las potencias de occidente tratando de culpar a los movimientos comunistas (Gott, 1971: 215). (Kline, 2015a: 1).

Durante el periodo de la violencia las instituciones públicas del país sufrirían una crisis de todo tipo de orden, este caos se extenderían desde los mandos altos hasta los puestos más bajos, permitiendo que la corrupción en el accionar de los empleador públicos vicié los propósitos de las entidades para las que trabajaban o a las que representaban. Este desorden involucró a los funcionarios públicos, a los partidos políticos, a la policía y al ejército intensificándose gradualmente sobretodo en la dictadura que controló el Estado desde 1953 (Guzmán, Fals y Umaña, 2005: 259-261), cuando Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder al derrocar al presidente Laureano Gómez, renunciando el 10 de mayo de 1957 por la presión de la clase política que exigió su renuncia. La sociedad civil resumiría el poder y restablecería el orden progresivamente

con la firma del pacto entre liberales y conservadores llamado “Frente Nacional” en 1958 (Kline, 2015a: 1).

El conflicto colombiano que se originó a partir de la segunda mitad del siglo XX por la lucha de grupos políticos y la persecución ejecutada por las fuerzas militares, obligó a los miembros del partido liberal a refugiarse en las zonas menos pobladas del país. Estas personas desplazadas, fuera de los ojos de la ley, formaron grupos insurgentes, como las guerrillas y los paramilitares, con ideologías definidas que en un inicio buscaban mejorar la situación nacional. Para asegurar su supervivencia y expansión estos grupos recurrirían a métodos violentos e ilegales como el secuestro, la extorsión, los sobornos y la vinculación a los sindicatos exportadores de drogas. Esta situación provocaría que eventualmente el mismo gobierno, en respuesta, sea responsable de cometer actos reprochables como: masacres a civiles, violación de derechos humanos, asesinato a sangre fría de líderes de las guerrillas y de políticos de partidos izquierdistas (Roppel, 2011: 78-79).

La pobreza, la inestabilidad y la falta de control estatal provocaron el surgimiento de grupos insurgentes que aplicaron medidas violentas para enviar sus mensajes y perseguir sus intereses. La insurgencia campesina resultado de un comportamiento histórico de violencia en las comunidades rurales se convertiría en una guerrilla armada, la cual usó estrategias terroristas para causar malestar dentro de la población y así presionar al Estado y a los organismos de poder. Este conflicto que en un inicio afectaría solo a los habitantes de las zonas rurales, gradualmente se iría extendiendo hasta las poblaciones urbanas y colándose en las instituciones estatales, desestabilizando cada rincón de la sociedad colombiana. La violencia cometida por la guerrilla generaría casos de desplazamiento forzoso de la población y atentados políticos (Chomsky 2004: 13-19).

Por otro lado, mientras finalizaba la era del “Frente Nacional”, el problema de las sustancias narcóticas empezaba a cobrar importancia dentro de Colombia. El país empezó a ganar mercado dentro de esta industria ilegal, debido al traslado de los cultivos de marihuana en México por los programas de erradicación en ese país en 1975, lo que eventualmente derivaría en la diversificación de los traficantes al comercio de cocaína, conformando mafias o carteles que se dedicarían a este lucrativo negocio. En la esfera política, la

transición se daría de una manera tranquila, y el poder pasaría a Alfonso López Michelsen que pertenecía al partido liberal, y después a Julio César Turbay. No obstante, las tasas de participación en las votaciones se mantuvieron bajas, manteniendo vivo el miedo de que algún partido recurra a medidas militares para hacerse con el poder en lugar de las elecciones democráticas (Kline, 2015b:1).

Adicionalmente, en el caso colombiano hubo tres factores principales que contribuirían a la vinculación del comercio de las drogas con la corrupción política. Primero, que los ingresos que se obtenían de este negocio eran significativamente superiores a los que los funcionarios públicos podían esperar obtener de sus salarios. Segundo, mientras que los narcotraficantes solo necesitaron del permiso y el apoyo local para la producción y manufactura de las drogas, al momento de lavar el dinero obtenido necesitaban el consentimiento y la ayuda de altas autoridades gubernamentales, ya que la economía del país no era lo suficientemente grande para absorber y ocultar los fondos ilegales. Finalmente, la organización ordenada y los medios violentos de los grupos traficantes les permitieron tener suficiente poder para influenciar en las políticas nacionales y locales (Thoumi, 2002: 2016-217).

2.1.2. Las guerrillas izquierdistas.

La problemática de las guerrillas comunistas está directamente relacionada al periodo específico en la historia colombiana del siglo XX conocido como *La Violencia*, cuando el país estuvo controlado por dictaduras conservadoras y regímenes militares. Las guerrillas comunistas se derivan de la resistencia campesina contra los abusos y la violencia oficialistas (Pizarro, 1992: 20-21). Asimismo, los revolucionarios se verían impulsados a destruir mediante la fuerza el sistema que imperaba en esa época denunciando la falta de democracia debida a la poca concurrencia pública en los procesos electorales y la casi nula diferenciación entre los dos únicos partidos políticos. Esto inspiraría a la formación de varios grupos guerrilleros con diferentes ideologías políticas como: el Movimiento 19 de abril o M-19, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el más importante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Gott, 1971: 212-125)

Las guerrillas izquierdistas tendrían su origen a mediados de la década de los 50 por la influencia del Partido Comunista Colombiano (PPC) el cual fue el principal organismo del cual emergieron las demás organizaciones con esta ideología dentro del país. En el año de 1949 se crearían los primeros grupos de autodefensa campesina con el fin de oponerse a la violencia efectuada por parte de las instituciones oficiales de la dictadura conservadora (Kline, 2015a: 1). Durante los primeros dos años de esta década la guerrilla se ubicó principalmente al sur del Tolima y en la región del Sumapaz, esta era mayoritariamente de tendencia liberal y con apenas unos pocos núcleos con ideología comunista. Estos grupos se disolverían paulatinamente debido a las operaciones de paz implementadas por el gobierno en 1953. Sin embargo, se reactivarían dos años después, pero en esta caso mayoritariamente lideradas por insurgentes comunistas (Pizarro, 1992: 15-19).

La tradición de resistencia armada dentro de estas comunidades constituye un elemento importante, ya que en la década de los años 30 el uso de violencia por parte de los movimientos de izquierda no respondían a la estructura de una guerrilla, sino que fueron actos insurreccionales copiados de la experiencia soviética para impulsar su ideología revolucionaria. Asimismo, las acciones guerrilleras eran características de grupos democráticos nacionalistas o anti dictatoriales, mas no constituían una costumbre inherente de la ideología de izquierda marxista. La subsiguiente consolidación de grupos guerrilleros en Colombia se vería influenciada por la tendencia expansiva de los movimientos de liberación nacional o nacionalistas alrededor del mundo en la época de la posguerra, por lo que este país tuvo una experiencia temprana con esta modalidad política (Pizarro, 1992: 19-20).

La guerrilla colombiana a diferencia del resto de movimientos guerrilleros que surgieron en diferentes países de América del Sur, fue constituida aproximadamente 10 años antes de que ocurriera la Revolución Cubana en 1959. Esta revolución que marcó la caída del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero, Fidel Castro, fue vista como un símbolo revolucionario en los países de Latinoamérica por ser una de las primeras y más exitosas de las revoluciones izquierdistas que se dieron en esa época. De esta manera, se difundiría el mito guerrillero en la década de los 60, encontrando cabida en el territorio colombiano donde las comunidades aceptaban el uso de la fuerza y tenían una tradición de lucha,

influenciando así la consolidación de grupos sociales insurreccionales (Pizarro, 1992: 19-20).

El proceso de construcción de la guerrilla colombiana se dividiría en tres periodos principales. El primero iría desde 1949 a 1953 y estaría caracterizado por la supremacía de una ideología liberal; en el segundo que va desde 1955 a 1958 se constituiría la guerrilla comunista; mientras que en el tercero que va desde el año 1962 a 1991 se evidenciaría la presencia de grupos de varias ideologías que fueron inspirados por la Revolución Cubana. Así, se puede observar que las características de los grupos que se originaron por el ejemplo cubano tenían una visión voluntarista y estaban conformados principalmente por individuos pertenecientes a la clase media que habitaba en las zonas urbanas, como el caso del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación (Pizarro, 1992: 20).

Si bien el conflicto político interno se redujo progresivamente a partir del pacto “Frente Nacional”, las guerrillas empezarían a surgir como tal a partir de los años 60 durante la presidencia de Guillermo León Valencia. Apareciendo en primer lugar el Ejército de Liberación Nacional en 1964, que fue creado por un grupo de estudiantes colombianos que buscaban copiar el modelo cubano y las estrategias aplicadas por el Che Guevara. En el mismo año, se crea otra guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la cual estaba principalmente conectada con movimientos comunistas influenciados por las ideologías de la Unión Soviética. El movimiento de las FARC se originó a partir de los comités de resistencia que aparecieron en Colombia durante la época de *La Violencia*, desencadenado por el ataque a los campesinos armados en Marquetilia con la asistencia de EE.UU. (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 135). El M-19 se creó en 1970 en respuesta a un fraude electoral que le daría la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla (Kline, 2015a: 1).

Desde el año de 1964, Colombia quedó permanentemente atrapada en un círculo de violencia, amnistía y rehabilitación. La política del Partido Comunista influyó dentro de esta dinámica porque estimulaba la modalidad aplicada dentro de la acción armada de la guerrilla, siendo a veces de confrontación abierta, de tregua pactada o de resistencia pasiva, de acuerdo a la coyuntura política que se estuviera viviendo; se le acusó a este partido de no adaptarse al medio político e incidir de forma negativa porque solo se

concentró en denunciar mas no en comprender. El PPC perdería su influencia debido a la renovación ideológica que se dio a finales de la década de los 80 por las políticas de *perestroika* y *glasnost* aplicadas por la URSS. No obstante, cabe señalar que uno de los principales rasgos definitorios de la lucha armada de izquierda fue su capacidad de seguir operando independientemente de los cambios en el escenario político del partido oficialista (Pizarro, 1992: 21-24).

2.1.3. El paramilitarismo y las autodefensas.

El movimiento paramilitar ha sido construido y definido a partir de las circunstancias sociales e ideológicas que se vivían en Colombia y en el continente americano. Este fenómeno se aprovechó del Estado, de sus instituciones, de las necesidades y de la idiosincrasia del pueblo para lograr explotar las contradicciones y falencias de la sociedad en su propio beneficio. Los grupos paramilitares se compusieron principalmente gracias a tres grupos de actores: los terratenientes y campesinos, que buscaban garantizar su seguridad y la de sus propiedades; los narcotraficantes, que robustecieron económicamente el crecimiento de este fenómeno; y las fuerzas armadas que reclutaron a estos grupos para contrarrestar la fuerza de las guerrillas a cualquier costo y con cualquier medio (Velásquez, 2007: 1). *“El paramilitarismo pacificó zonas en las que la violencia guerrillera había desangrado a la población, pero a costa de usar una nueva barbarie.”* (Nieto y García, 2008: 51)

Al origen del paramilitarismo en Colombia también se lo puede ubicar en la época de *La Violencia*, periodo acontecido a mediados del siglo XX en el que los círculos sociales y políticos se fragmentaron en dos partes, ocasionando una ola de violencia que se extendería por toda la geografía colombiana para al final arraigarse en la periferia campesina del país²⁴ (Velásquez, 2007: 1). Sin embargo, la formación oficial de estas organizaciones de autodefensa ocurrió entre 1965 y 1968. El Decreto 2298 y la Ley 48, fueron los textos jurídicos que sentaron las bases legales para que se permita la formación de estos grupos armados (Nieto y García, 2008: 1-2). Estos decretos consagraban la Doctrina de Seguridad Nacional de EE.UU. en el derecho colombiano lo que permitía al gobierno movilizar a la población civil en operaciones de combate para protegerse de las acciones de las guerrillas y restaurar el orden público (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 135).

²⁴ Ver anexo 9

Estos decretos presidenciales se fundamentaban en la Doctrina de Seguridad Nacional que se aplicó en la época de posguerra con el fin de contener la expansión del comunismo. Dentro de esta doctrina se buscaba combinar elementos militares, políticos, sociológicos, económicos y paramilitares para combatir en contra de las ideas izquierdistas que constituían una amenaza al *status quo* dentro del país. El método aplicado en los países de Latinoamérica era una adaptación guiada por autoridades de EE.UU., del que había sido anteriormente aplicado en la guerra de Argelia por el ejército francés en los 60 (Nieto y García, 2008: 2). Los decretos eran una respuesta del gobierno ante la constitución de las FARC y del ELN, que permitían la creación de ejércitos privados por las Fuerzas Armadas con la financiación proveniente de empresarios, terratenientes y dirigentes políticos (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 135).

Por otro lado, el movimiento paramilitar en Colombia no se asemejaba a la tendencia anglosajona de *vigilantismo* que también se presentó en otros países de Latinoamérica. El *vigilantismo* se fundamenta en la organización espontánea de las comunidades que se toman la justicia por sus propios miedos para suplir la incapacidad por parte de las instituciones oficiales, como en el caso de los llamados linchamientos contras los criminales comunes. Sin embargo, este fenómeno fue diferente en Colombia por las doctrinas políticas que precedieron a la constitución del mismo. Los grupos paramilitares ejercerían en Colombia actos de violencia para intentar mantener un orden socio-político conservador. Además, tuvieron desde sus inicios estructuras fuertes y bien organizadas que les permitió expandirse como actores armados por todo el país (Nieto y García, 2008: 2).

Si bien estas formas de defensa resultaban ser legítimas en un inicio, con el paso del tiempo y la escalada del conflicto tergiversaron sus objetivos y sus métodos hacia la ilegalidad. La contrainsurgencia, que se basó en los principios comunitarios de las zonas rurales y que logró su eficacia en el marco de la sociedad tradicional, derivaría eventualmente en paramilitarismo ofensivo; es decir, que en lugar de ser organizaciones con carácter reactivo, que solo respondían en casos de emergencia o de provocación, empezarían a aplicar políticas preventivas con el fin de atacar primero e ir ganando terreno a sus rivales (Nieto y García, 2008: 2). Las técnicas de guerra aplicadas por estos

grupos paramilitares se asimilarían a las de las guerrillas, lo que ocasionó una confrontación interna que no haría más que agravarse con el tiempo.

En los años 80 se consolidarían otros grupos paramilitares aparte de las autodefensas, siendo los principales los de las mafias de esmeraldas y el narcotráfico. El movimiento paramilitar estaría influenciado significativamente por la ideología impartida desde las fuerzas armadas que justificaban de utilizar medidas no ortodoxas al momento de enfrentarse a las guerrillas, con el pasar del tiempo aprovecharían estos mismos métodos para alcanzar sus propios fines a costa del bienestar de la población general (Velásquez, 2007: 1). Durante estos años tratarían de mantener su imagen y su discurso como grupos de legítima defensa que buscaban restaurar el orden en sus comunidades. Sin embargo, estos grupos empezarían a financiarse gracias a los jefes del narcotráfico que los utilizarían en múltiples ocasiones como simples mercenarios (Nieto y García, 2008: 3).

La primera reunión, en la que los ciudadanos colombianos ejercieron su derecho para defender sus tierras en colaboración con las Fuerzas Armadas, tuvo lugar en el año de 1982, en la que nació la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGA) (Velásquez, 2007: 1). De esta manera, una década más tarde se evidenciaría como se degradó el fenómeno del paramilitarismo debido a la ambición y egoísmo de sus líderes. Mientras que en la década de los 70 estos movimientos contribuyeron a solucionar los problemas causados por las guerrillas en las propiedades agrarias y ganaderas, en la década de los 80 se convertiría en uno de los pilares del conflicto, los movimientos paramilitares ya no se enfocarían en la protección de la propiedad privada y de la vida de sus ciudadanos, sino únicamente en defender los intereses privados de los grandes terratenientes, de sectores específicos en las fuerzas militares y sobretodo de los narcotraficantes (Nieto y García, 2008: 2-3).

2.2. El tráfico de drogas colombiano y la comunidad internacional.

La comunidad internacional se preocuparía por el conflicto colombiano a raíz de los eventos ocurridos durante *El Bogotazo* en 1948 e incluso lo atribuyeron a movimientos comunistas. Sin embargo, no existiría un interés activo sino hasta la década de los 80 cuando se evidenciaba la escalada del

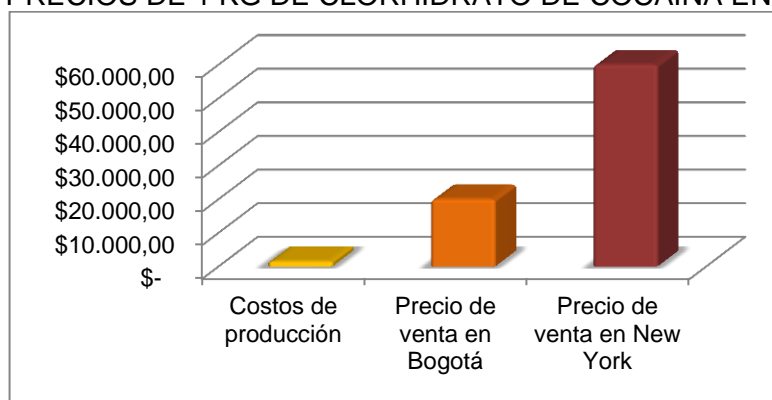
conflicto a raíz de la vinculación entre los grupos insurgentes y los grupos traficantes de drogas (Gott, 1971: 217-218). Los carteles de drogas habían formado imperios multinacionales a través de sus métodos violentos y a la vez habían buscado la aceptación de la gente por medio de la realización de obra social con las ganancias obtenidas (PBS, 2015: 1). El narcotráfico cambió permanentemente la dinámica dentro de Colombia, en los aspectos social, político y económico, poniendo en evidencia la incapacidad del Estado y desprestigiando al país (Gaviria y Mejía, 2009: 4).

La consolidación del narcotráfico en Colombia y los problemas políticos, económicos y sociales que este conllevó, modificó la estructura interna del país y la imagen del mismo (Carvajal, 2009: 206-207). La economía formal se desplomaría a causa del crimen y la falta de confianza en el sistema colombiano. El comportamiento social se volvería más egoísta y materialista en el cual todos buscaban enriquecerse rápidamente por cualquier medio. Además, el tráfico ilegal de cocaína permitiría la expansión de actores no estatales como las guerrillas, los grupos paramilitares e incluso se infiltraría en las altas esferas económicas y políticas de la sociedad, entorpeciendo el funcionamiento del Estado (Thoumi, 2002: 207). Este hecho ocasionaría que Colombia acepte dócilmente las políticas que EE.UU. sugería con el fin de contrarrestar la idea de Estado fallido y de paso afirmar su alianza con la potencia del norte (Thoumi, 2008:163)

2.2.1. La expansión del narcotráfico y los carteles de drogas.

A partir de la década de 1970, Colombia se volvió el hogar de algunas de las más violentas y sofisticadas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo. Lo que empezó como un pequeño negocio de contrabando de cocaína se convirtió en un imperio multinacional. A inicios de los 70, los traficantes de marihuana empezaron a exportar pequeñas cantidades de cocaína, escondida en maletas o en el equipaje, a los Estados Unidos. En la década de los 80, en las selvas de Colombia, el costo de producción un kilo de clorhidrato de cocaína con un 90% de pureza era de aproximadamente 1,500 dólares el kilo (PBS, 2015: 1), mientras que el mismo podía ser vendido en 20,000 dólares en Bogotá y hasta en 60,000 dólares en las calles norteamericanas, es decir que tenía un potencial margen de ganancia superior al 4000% (Manning, 2001: 1).

GRAFICO 9
PRECIOS DE 1 KG DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN 1981



Fuente: Manning (2011) y PBS (2015)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Además, comúnmente este alcaloide era adulterado para aumentar su rentabilidad, agregándole lactosa para aumentar el volumen y anfetaminas para intensificar el efecto narcótico. Así, la cocaína que se comercializaba en las calles de Estados Unidos tenía apenas un 12% de pureza, lo que significaba que el kilo original podía generar hasta 500,000 dólares²⁵ (Manning, 2001: 1).

Para suplir la demanda, decidieron expandir el negocio, para ello los productores y traficantes formaron sindicatos de exportación que eran organizaciones armadas que se dedicaban únicamente al narcotráfico. Con el aumento de la demanda los carteles se expandirían para ganar fuerza contra el Estado llegando a cometer actos de violencia contra la población civil y entre ellos para obtener más territorio. Los grandes carteles de drogas empezarían a conformarse a partir del año 1974, siendo entre los principales: el cartel de Medellín, el de Cali, el del Norte del Valle, el de Armenia, el Costa Caribe y el de Leticia. Sin embargo, se considera que los más importantes fueron el de Medellín y el de Cali, ya que controlaban alrededor de 70% de la cocaína que era enviada a Estados Unidos (Páez, 2013: 6).

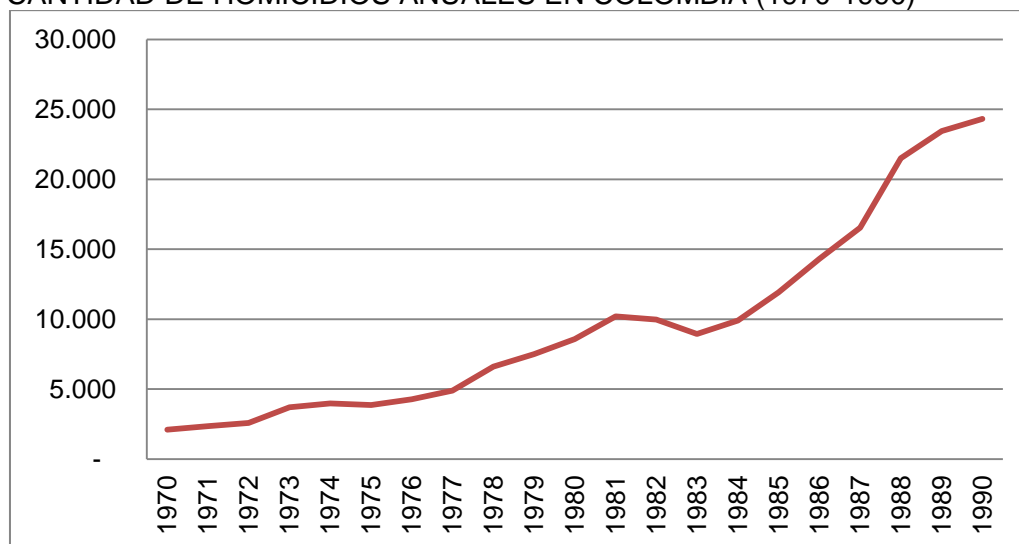
El cartel de Medellín, como fue denominada esta organización de narcotraficantes por la DEA, estaba conformado principalmente por su líder Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, José Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Lehder. Esta empresa criminal empezaría en 1976 con el procesamiento de base de cocaína traída desde Ecuador y Perú y con el tiempo transportarían clorhidrato de cocaína en pequeños aviones directamente a Estados Unidos para así evitar la necesidad de tener que realizar varios viajes llevando el

²⁵ Ver anexo 10

alcaloide en el equipaje. La gran demanda norteamericana de cocaína les permitió obtener grandes ganancias, las cuales reinvertirían para tener laboratorios más sofisticados, mejores aviones e incluso adquirieron una isla en el Caribe en la cual los aeroplanos pudieran reabastecerse de combustible (PBS, 2015: 1).

El cartel usaría medios violentos para sustentar y expandir su poder en el mercado dentro de Colombia. El lema aplicado por el cartel sería el de *plata o plomo*, lo que significaba que los individuos que no estaban dispuestos a aceptar los sobornos y hacer lo que el cartel les pedía serían persuadidos mediante la violencia física o directamente asesinados (PBS, 2015: 1), provocando así que aumente paulatinamente la cantidad de homicidios en todo el país²⁶.

GRAFICO 10
CANTIDAD DE HOMICIDIOS ANUALES EN COLOMBIA (1970-1990)



Fuente: Chernick (2008) y Revista Colombiana de Psiquiatría (2003)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Por otro lado, las magníficas ganancias obtenidas por el cartel también eran usadas por Pablo Escobar en la construcción de obra social, especialmente en la ciudad de Medellín, se crearon urbanizaciones, canchas deportivas, escenarios públicos, entre otras, con el fin de obtener la aceptación y el cariño del pueblo, lo cual le daría resultados positivos y le llevarían a ser elegido diputado de remplazo en 1982 (Mizrahi, 2013: 1).

²⁶ Ver anexo 11

El líder del cartel de Medellín sería expulsado del congreso cuando los miembros rivales, liderados por Rodrigo Lara Bonilla, denunciaron el origen de los ingresos y la riqueza de Pablo Escobar (Thoumi, 2002: 245). De igual forma, el éxito obtenido se vería opacado por el exceso de violencia que el mismo implementó al manejar el cartel. Esto llevaría a una disputa entre el cartel y el gobierno colombiano (PBS, 2015: 1). Se acusa a este cartel como responsable de utilizar sicarios en motocicleta, y se los culpa de los asesinatos del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984 y del comandante de Policía de Antioquía, Valdemar Franklin Quintero en 1989 (Mizrahi, 2013: 1). El cartel empezó su proceso autodestructivo con el aumento del poder y la violencia y eventualmente sus líderes acabarían asesinados por las autoridades o presos²⁷ (PBS, 2015: 1).

Se cree que una de las principales razones para la caída del cartel de Medellín fue el cartel de Cali, liderado principalmente por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, y José Santacruz Londoño. Este cartel fue más sutil en su accionar y trató de no llamar la atención, invirtiendo las ganancias obtenidas en el negocio del contrabando en negocios legales. El cartel de Cali atacaría directamente al cartel de Medellín, cuando la competencia entre ambos se intensificó al momento de querer controlar el mercado de clorhidrato de cocaína en EE.UU. (Thoumi, 2002: 245). Para estos fines se concentraron en Pablo Escobar, en sus propiedades, en sus negocios y en sus subordinados; incluso proporcionarían información a la policía y a la DEA sobre las acciones del capo de Medellín (PBS, 2015: 1), y financiarían 50 millones de dólares para la persecución de Pablo Escobar, que acabaría con la muerte del mismo en 1993 (Calvo, 2008: 219).

Los líderes empresarios del cartel de Cali buscaron manejar el negocio de cocaína como si se tratara de un negocio formal, implementando estructuras organizadas y técnicas innovadoras. Implementaron la técnica de los grupos terroristas de separar a sus trabajadores en células, con cada célula al tanto de una cantidad específica y mínima de información. También contrataron abogados internacionalmente renombrados con el fin de que estudiaran los movimientos de la DEA y de los fiscales norteamericanos (PBS, 2015: 1).

²⁷ Rodríguez Gacha fue disparado por la policía colombiana, los hermanos Ochoa se entregaron a las autoridades para negociar un trato de no ser extraditados y Pablo Escobar fue cazado y asesinado por la policía (PBS, 2015: 1).

Además, dieron gran importancia al uso de la tecnología en su negocio, contratando y entrenando a ingenieros de alto nivel que diseñaron equipos de comunicación que no pudieran ser intervenidos por las autoridades de control. Sin embargo, eventualmente sus líderes serían atrapados y obligados a cumplir condenas de 10 a 15 años (Guerrero, 2014: 1).

Las organizaciones criminales de Colombia se verían involucradas en casi todos los aspectos del comercio de drogas, desde el financiamiento para el cultivo y la construcción de laboratorios en Colombia y en los países vecinos, las respectivas operaciones de contrabando, hasta la creación de redes de distribución para todos los niveles de demanda en Estados Unidos, Canadá y en países de Europa. Considerando todo el espectro de las exportaciones de las drogas, se calcula que aproximadamente 3 mil millones de dólares serían repatriados al país anualmente durante la década de los 80, convirtiendo a esta industria en la principal dentro de la canasta de exportación, superando a la de café que era de 2,5 mil millones. Por ejemplo, el cartel de Medellín tenía ingresos a veces de hasta 4 mil millones de dólares, rivalizando con las compañías más grandes a nivel mundial (Bagley, 1988: 1).

2.2.2. El tráfico de drogas y las consecuencias en la sociedad.

En los países andinos han existido dos perspectivas diferentes sobre las consecuencias de la producción y comercialización de drogas. Por un lado, están quienes sostienen que esta industria tuvo un efecto positivo, impidiendo el colapso económico de Colombia y Perú ya que aportó un aumento en las divisas y en las tasas de empleo de dichos países. Por otro lado, otros analistas consideran que generó un desbalance en la economía, causando mayoritariamente periodos de depresión; también, se le atribuye a este negocio el aumento de la criminalidad, la violencia, la corrupción y con ello el detrimento de la economía formal y las tasas de crecimiento económico. Además, el comercio de estas sustancias ilícitas alteraría permanentemente las expectativas y los intereses de los individuos, provocando así un cambio en su comportamiento que resultaría en inestabilidad social y política (Thoumi, 2011: 199).

La industria de las drogas influenciaría negativamente en la esfera política, ya que por su naturaleza ilegal se vincularía con el crimen y la

corrupción. El comportamiento social se volvería más consumista y materialista, dado que la mentalidad de las personas se degradaría paulatinamente al tratar obtener dinero de maneras más rápidas, sin que les importe cómo sus acciones afectan a sus semejantes, con el fin de exhibir su riqueza y escalar en la pirámide social. Dentro de estos medios aplicados sin consideración, la violencia se volvería una herramienta más frecuente para perseguir los intereses individuales y para resolver conflictos. Además, la corrupción aumentaría ostensiblemente en los sectores privados y públicos, lo cual contribuiría a debilitar al Estado y su capacidad de control (Thoumi, 2002: 207).

Con el fin de precisar el uso del término corrupción, se usará la definición dada por el Banco Mundial, según el cual “la corrupción es el uso del servicio público para el lucro privado”, y se considerará a las acciones de ser corruptas cuando rompan las leyes o simplemente vulneren el bienestar social. En la historia de América Latina ha existido una tradición de abuso de poder por parte de sus líderes, especialmente en los regímenes patrimoniales y clientelistas; sin embargo, esto no se consideraba como corrupción ya que era el tipo de comportamiento que se esperaba, la corrupción existe dentro del marco político de la democracia. Así, se puede decir que en las décadas de los 70 y 80 la relación entre el negocio de drogas ilícitas y la corrupción dentro de un estado conforma un círculo vicioso, ya que el desarrollo de una de las variables a su vez motivará el desarrollo de su parte complementaria (Labrousse, 1993: 18).

La industria de la droga penetraría completamente en la sociedad colombiana acelerando el proceso de descomposición que se estaba llevando a cabo. La escalada de este problema no fue de ninguna manera accidental, sino que es el resultado del proceso histórico y cultural, así como de la inestabilidad en las estructuras estatales. El aumento de la corrupción derivaría en una incapacidad de control y por ende un incremento en las tasas de criminalidad dentro del país (Labrousse, 1993: 18). De igual manera, este tipo de comportamientos modificarían paulatinamente la mentalidad de las personas, quienes con el tiempo se volverían más tolerantes hacia los comportamientos criminales. Asimismo, la industria ilegal financiera y contribuiría al desarrollo de los grupos armados insurgentes, mientras dificultaba aún más las negociaciones de paz entre estos y el gobierno colombiano.

Por otro lado, los países andinos intentaron poner restricciones al uso de la riqueza obtenida de forma ilegal, esto ocasionaría que la economía colombiana fuera más vulnerable a los capitales ilícitos por la dificultad que se presentaba al momento de lavar este dinero. De manera que los traficantes de drogas no intentaron esconder el origen ilícito de sus ingresos, sino que por el contrario lo gastaban de manera abierta, invirtiendo de manera directa en el mantenimiento y expansión de sus negocios ilegales (Thoumi, 2002: 197, 227). Esto influyó en los precios de los terrenos rurales, ya que los traficantes se dedicaron al negocio de la acumulación de tierra, convirtiéndose en *landholders* y forzando a los campesinos a migrar a las zonas fronterizas donde se producían los cultivos ilegales²⁸ (Camacho, 2005: 22-23).

Las organizaciones que exportaban más de 50 toneladas²⁹ de cocaína al año tenían igual o más dinero que los conglomerados privados más grandes del país, ya que en la década de los 80 estos ganaban un aproximado de 2,000 millones de dólares al año, esto pone en evidencia el poder de influencia que la industria de las drogas tenía dentro de la estructura económica colombiana (Thoumi, 2002: 231).

TABLA 2
INGRESOS NETOS DEL NARCOTRÁFICO (USD MILLONES)

Año	Cocaína	Marihuana	Total
1980	\$ 1,386.00	\$ 102.00	\$ 1,488.00
1981	\$ 1,933.00	\$ 137.00	\$ 2,070.00
1982	\$ 1,819.00	\$ 65.00	\$ 1,884.00
1983	\$ 1,868.00	\$ 79.00	\$ 1,947.00
1984	\$ 4,093.00	\$ 79.00	\$ 4,172.00
1985	\$ 2,933.00	\$ 20.00	\$ 2,953.00
1986	\$ 939.00	\$ 34.00	\$ 973.00
1987	\$ 1,311.00	\$ 152.00	\$ 1,463.00
1988	\$ 1,395.00	\$ 290.00	\$ 1,685.00
1989	\$ 2,485.00	\$ 94.00	\$ 2,579.00
1990	\$ 2,341.00	\$ 48.00	\$ 2,389.00

Fuente: Castillo (1996)

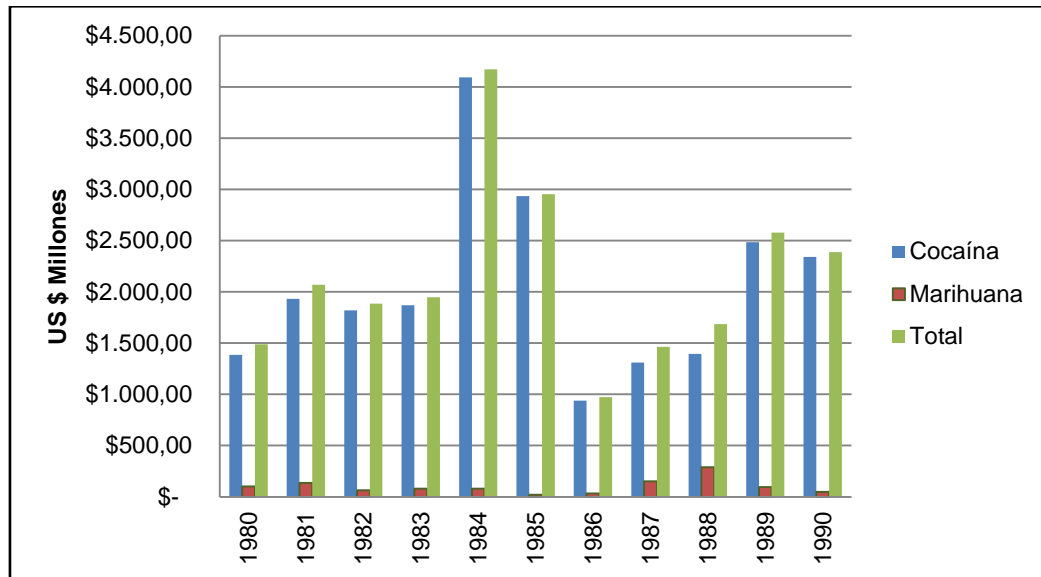
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

En el caso de la industria de las drogas en Colombia es evidente que la mayor cantidad de los ingresos provenía específicamente del comercio de clorhidrato de cocaína.

²⁸ Ver Anexos 12 y 13

²⁹ El precio de la tonelada de clorhidrato de cocaína estaba alrededor de los 60 millones de dólares.

GRÁFICO 11
INGRESOS NETOS DEL NARCOTRÁFICO



Fuente: Castillo (1996)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Este negocio penetraría en muchas actividades del país entorpeciendo definitivamente el desempeño de la economía nacional. Por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita disminuiría de 5,5% a 3,2% cuando se dio el boom de la cocaína en los años 80, ya que la industria ilegal contribuyó al aumento de la violencia y la impunidad, dando como resultado un aumento en el costo de las transacciones, la fuga de capitales legítimos, y el incremento en los gastos de seguridad (Thoumi, 2002: 231).

Por otra parte, existe la creencia de que la economía colombiana se vio beneficiada de los grandes ingresos que se obtuvieron del tráfico ilegal; sin embargo, este solo producía beneficios al corto plazo porque inyectaba dinero en la economía pero al largo plazo ocasionaba más perjuicios dando así un balance final negativo. El estancamiento de Colombia se daría por la pérdida de legitimidad del Estado y que las altas expectativas de acumular riqueza rápidamente aumentaron las inversiones especulativas produciendo así mayor número de negocios quebrados y desfalcos. Se estima que el costo del crimen excedía el 2% anual con respecto al crecimiento perdido y tuvo efectos permanentes en la formación de capital y el factor de productividad (Thoumi, 2002: 231).

Además, los ingresos del narcotráfico no solo ingresaban al sector ilegal, entorpeciendo la economía formal de Colombia y la tasa de cambio³⁰, sino que la mayor parte de estos se quedaban en los países de consumo, en este caso principalmente en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Así, se estima que apenas el 18% de los réditos obtenidos de este comercio se quedaba dentro de los países productores, mientras que los que se veían verdaderamente beneficiados de este negocio eran los bancos de los países de destino. La Agencia Federal de Control de Drogas de Rusia considera que el sistema bancario internacional depende del narco-dinero como una fuente crítica de liquidez. Esta situación contribuiría a que los grandes grupos de poder de EE.UU. busquen entorpecer la lucha contra el comercio de drogas con el fin de mantener el flujo de sus ingresos (La Redacción, 2013: 1).

2.2.3. El conflicto colombiano y la comunidad internacional.

Después del Bogotazo en 1948 la sociedad colombiana quedaría sumida en la violencia y la anarquía provocando la reacción de las autoridades de todo el mundo. De esta manera, el Secretario de Estado de EE.UU., George Marshall³¹, y el embajador británico en Colombia, Gilbert Mackereth, acusaron al comunismo internacional de ser el causante de dicha insurrección. La describirían como el primer intento prominente desde que se había terminado la Segunda Guerra Mundial y lo vincularon con otros acontecimientos que habían provocado huelgas en Francia e Italia durante esa época. Asimismo, sostuvieron que las medidas y acciones que se tomen al respecto eran de interés internacional, ya que este problema no afectaba solo al país o a la región sino al mundo entero. Por otra parte, los líderes comunistas negaron cualquier vínculo, argumentando que de haberse involucrado habrían realizado un golpe de Estado (Gott, 1971: 217-218).

Sin embargo, el conflicto interno de Colombia no sería percibido como un problema prioritario en la agenda política del país, ni en la de la comunidad internacional, sino hasta la década de los 80. En los años anteriores se tenía la idea de que este problema solo afectaba a las zonas periféricas del país y que no constituía una amenaza real a los centros urbanos y a los ejes de poder. Este fenómeno solo figuraría de forma marginal dentro de la relación bilateral

³⁰ Ver anexo 14

³¹ Fue quien propuso el Plan Marshall que se aplicaría para aumentar la hegemonía norteamericana.

entre Colombia y EE.UU. con respecto a los temas de contención del comunismo y contrainsurgencia. No obstante, este problema atraería la atención de las autoridades nacionales e internacionales, cuando a finales de los 70, el movimiento guerrillero M-19 atacó dentro de las ciudades del país, lo que incentivó los proyectos de reconocimiento y de paz durante la administración de Belisario Betancur en los años de 1982 a 1986 (Restrepo, 2001: 9-10).

Además, la dinámica del conflicto cambiaría drásticamente cuando el tráfico ilícito de drogas se involucraría, aumentando así la preocupación por parte de la comunidad internacional. La inestabilidad dentro del país y la violencia se extendería a través de las fronteras con los países vecinos, dando así una connotación internacional a este conflicto (Restrepo, 2001: 13). Además, el tráfico de drogas usaba a otros países como puntos de tránsito en su trayectoria hacia los EE.UU.

TABLA 3
PRINCIPALES PAÍSES DE TRÁNSITO DE HOJA DE COCA Y COCAÍNA A EE.UU.

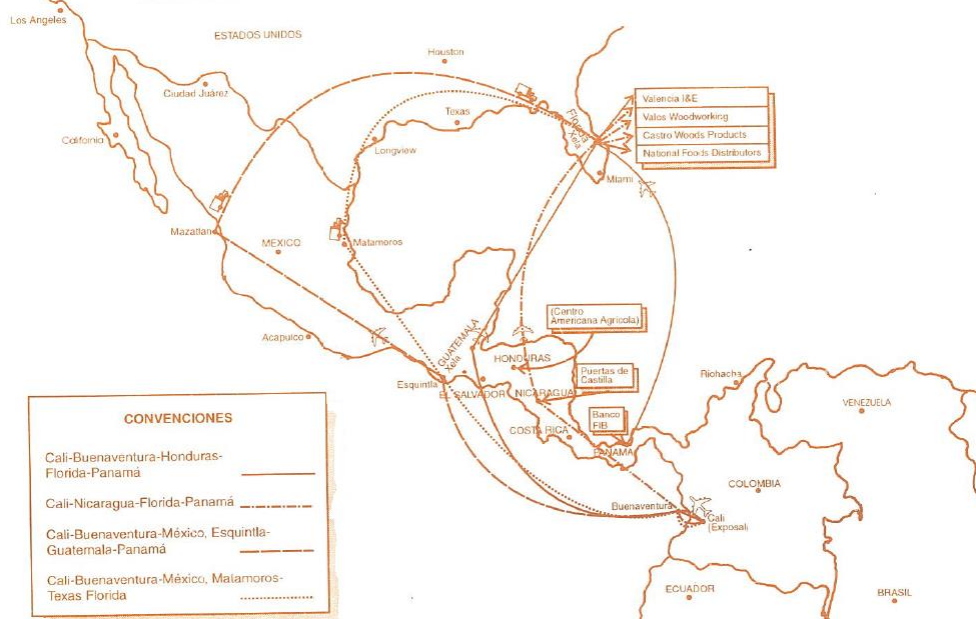
1950-1969	1970-1979	1980-1985	1985-1990
Colombia Chile Ecuador Paraguay	Colombia Panamá Ecuador Chile Costa Rica Cuba Hawái (EE.UU.) Guaján (EE.UU.) Tahití	Colombia Panamá Ecuador Costa Rica Cuba Hawái (EE.UU.) Bahamas Nicaragua Cuba Trinidad y Tobago Venezuela México	Colombia Panamá Bahamas Haití México Belice Guatemala Ecuador Venezuela Perú Jamaica República Dominicana

Fuente: Montagne (1991)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Los carteles colombianos usaban puertos y pistas de aterrizaje localizados en la región del Caribe y después introducían las drogas vía terrestre desde México.

GRAFICO 12 MAPA DE RUTAS PARA EL TRÁFICO DE COCAÍNA DESCUBIERTAS AL CARTEL DE CALI



Fuente: Castillo (1996)

Elaborado por: Fabio Castillo

Por lo tanto, la incapacidad del gobierno colombiano para controlar el tráfico ilegal de narcóticos y su vinculación entre los grupos armados insurgentes, que se financiaban del dinero de la droga, le causaría un desprestigio tanto interno como externo³². Por lo tanto, debido a la crisis gubernamental y el malestar social que se vivía, numerosos sectores de Colombia exigían, y países como Estados Unidos presionaban, para que el país acepte la ayuda y la intervención extranjera (Restrepo, 2001: 13-15).

Asimismo, para la Organización de Naciones Unidas, la relación en Colombia entre los grupos armados y los cultivos ilícitos hicieron de esta problemática una de las más complejas en el mundo entero. Dado que los ingresos del tráfico de drogas representan una oportunidad de financiamiento para que los carteles puedan abastecerse de armas del mercado internacional, incentivaban el cultivo de estas plantas dentro de sus territorios, mientras que los grupos insurgentes se peleaban entre sí por obtener el control sobre estos recursos pecuniarios. Según un reporte de la ONU junto con el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, presentado en la vigésima Sesión Especial sobre el control internacional de las drogas, que se efectuó en junio 1998 en la ciudad de Viena, se estimaba que entre el 60% y 70% de los

³² Esta relación de los carteles con las guerrillas insurgentes y los grupos paramilitares se revisa en la primera parte del tercer capítulo de la presente disertación.

recursos financieros de las FARC y de las Autodefensas Unidas de Colombia provenían del negocio de las drogas (Calvani, 2005: 21-22).

De igual manera, la ONU resaltaría la importancia de la perspectiva social dentro de este conflicto, ya que las plantas que sirven de materia prima no crecen espontáneamente por sí solas, sino que serían cuidadosamente cultivadas por campesinos, quienes debieron lidiar con el aislamiento y la falta de oportunidades para comercializar sus productos. Las autoridades de esta organización internacional sostenían que no se podía solucionar el problema de los cultivos ilegales simplemente con la erradicación de los mismos, y que el método más efectivo sería trabajar directamente con las personas involucradas o con quienes son más vulnerables ante este problema. La ONU incentivaba los proyectos por la sustitución de cultivos legales, como café y tabaco, que fomentaran un desarrollo alternativo, basado en la adaptación de las infraestructuras locales, la unificación de la comunidad, la creación de canales de comercialización, la capacitación y la transferencia de tecnología (Calvani, 2005: 21-25).

2.3. La política exterior y las medidas de cooperación.

Estados Unidos usó la Guerra contra las Drogas como una herramienta para influir dentro de los países productores y exportar sus políticas a través del discurso y la presión política. Hasta la década de los 80 las relaciones entre ambos países habían sido cordiales y libres de sospechas, sin embargo esta situación cambia con la *narcotización* de la agenda política, ya que el tema de las drogas empieza a influir en los asuntos económicos, de derechos humanos y en los procesos de paz con los movimientos guerrilleros. La política manejada no fue estática, sino que dependía de si el gobierno en Washington consideraba que el gobierno colombiano estaba actuando apropiadamente o no (Crandall, 2002: 2). Así, la intervención norteamericana se aprovechaba de los programas de cooperación, los cuales obligatoriamente debían responder a los intereses estadounidenses, para satisfacer los puntos en su agenda política a costa de las preferencias y necesidades del pueblo colombiano (Restrepo, 2001: 15).

El país del norte no se limitó a los métodos del discurso y la propaganda en el campo internacional, sino que aplicaron medidas más directas. Durante el

gobierno de Reagan se aplicaron políticas que presentaban a la amenaza de las drogas como algo urgente, se vinculó la lucha contra las drogas con los programas de cooperación para el desarrollo y se aplicó una dinámica basada en el castigo y la recompensa dependiendo del comportamiento de los gobiernos de los demás países (Chomsky 2004: 11-12). De esta manera, en Colombia se instalaron bases militares estadounidenses y se firmó un tratado de extradición para que los traficantes colombianos sean juzgados en EE.UU. Si bien Colombia aceptaría estas medidas de forma cooperativa por su relación y compromiso con el país del norte (Carvajal, 2009: 213), también se vio presionada por la dependencia económica (U.S. Library of Congress, 2011: 1) y la incapacidad estatal para resolver el conflicto.

2.3.1. La política exterior de EE.UU. y las críticas a sus contradicciones.

Estados Unidos y Rusia fueron las dos superpotencias mundiales durante la época de la Guerra Fría e influían directamente en el comportamiento de los demás países que aceptaban sus respectivas ideologías. De esta manera, Rusia representaba al mundo del lado este con su modelo económico comunista y su política de estilo dictatorial; mientras que los Estados Unidos de Norteamérica era el país líder del mundo occidental y buscaba expandir sus doctrinas de democracia y libertad a través de su modelo económico capitalista. Ambos países tenían como propósito propagar sus ideologías de manera que tuvieran más poder e influencia en el mundo (Heffer, 1992: 25-26). Por otro lado, Chomsky³³ (2004: 11) considera a la opinión mundial como una tercera superpotencia que determinaría el comportamiento de los Estados. Los EE.UU. tratarían de exportar sus políticas para aumentar su hegemonía y garantizar el cumplimiento de su agenda internacional pero a la vez buscando mantener la opinión del resto del mundo a su favor.

EE.UU. como aspirante al poder mundial aplicó doctrinas y programas para aumentar su hegemonía alrededor del mundo. Esto generó desconfianza en ciertos países, ya que los líderes norteamericanos se habían mostrado dispuestos a recurrir a la manipulación y a la violencia para conseguir sus objetivos (Ramos 1991: 640-641); si bien la retórica de la política estadounidense promulgaba la priorización de los derechos humanos y la democracia, las acciones de la misma ponían en evidencia un irrespeto total

³³ Noah Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense.

por las estructuras democráticas dentro de los gobiernos extranjeros y una falta de compromiso con respecto al cumplimiento de los derechos y de la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos. El gobierno norteamericano trasladaría a nivel internacional su estrategia pública de controlar al pueblo dentro de los límites considerados como correctos (Chomsky 2004: 11-12).

Los métodos aplicados para controlar al público varían entre cada tipo diferente de sociedad, sin embargo el más usado dentro de los países en el mundo moderno se encuentra el control de opiniones y actitudes por medio del discurso y las campañas intensas de propaganda que este conlleva. Por otro lado, si bien este también es el método más aplicado por la administración de Washington dentro del país, en territorio internacional también recurren a otros medios más directos (Ramos 1991: 640). Por ejemplo, durante la presidencia de Ronald Reagan en los años 80 se aumentaría el uso de la fuerza y la violencia para preservar los intereses estadounidenses. Las políticas aplicadas desde 1981 buscaban devolver el control sobre los países que se habían rebelado contra el poder estadounidense. Estas medidas afligirían directamente a Nicaragua y a varios países de Centroamérica y se extendería a otros rincones del mundo (Chomsky 2004: 13-19).

Con respecto a las políticas contra las drogas, no bastaba con que Estados Unidos declarara una política oficial para que esta se copiara en el resto de países, sino que se debía recurrir a la firma de tratados y convenios dentro del campo de la diplomacia y el derecho internacional, con otros países. Además, era necesario que despertaran el entusiasmo del público para que estén dispuestos a aceptar esta nueva estrategia de guerra. Dentro de la política de cooperación militar e intervención norteamericana se distinguen tres características principales para que pueda llevarse a cabo en un determinado país. Primero, el Estado al que se le va a brindar apoyo debe ser virtualmente incapaz de conseguir los objetivos buscados por sí mismo; segundo, dicho objetivo debe ser importante y atraer el interés de ambos Estados para justificar el esfuerzo cooperativo; y tercero, el problema o mal a erradicar debe ser presentado como una amenaza inminente al bienestar internacional (Chomsky 2004: 13-19).

Estos tres elementos fueron evidentes al momento de expandir la guerra contra las drogas en Latinoamérica. A los países productores se les consideraba como actores débiles que no tenían las estructuras estatales necesarias para frenar el crecimiento de la industria del narcotráfico, por lo que necesitaban la ayuda de los EE.UU. Además, con la difusión a nivel mundial del discurso sobre la vinculación entre el crimen y la droga, se había presentado a esta industria como una amenaza que atentaba contra el desarrollo y la estabilidad de los países, por lo que era una prioridad urgente tomar medidas correctivas. De esta manera, EE.UU. lograría aplicar eficientemente sus políticas en varios países latinoamericanos, convirtiendo así en realidad la frase del filósofo y político griego, Tucídides de *“los países grandes hacen lo que quieren hacer y los pequeños aceptan lo que tienen que aceptar”* (Chomsky 2004: 13-19).

Estados Unidos ha expresado explícitamente su intención de preservar su hegemonía mediante el uso de la fuerza, y en esta específica ocasión aplicó la lección aprendida durante el siglo XX de que la guerra y la coerción son maneras eficaces al momento de obtener lo que se busca. Por esta razón, las políticas de EE.UU. no solo deben ser del interés de los ciudadanos de ese país, sino que por la influencia y poderío de este país sobre el resto del mundo, las mismas debían ser una de las preocupaciones fundamentales de los habitantes en todo el mundo. Así también, la llamada tercera superpotencia, constituida por la opinión pública mundial (Chomsky 2004: 79), no manifestó su oposición a los métodos aplicados por los EE.UU. sino que simplemente consintió la forma en que manejaban la situación, ya que este país se constituyó en esa época como el líder de los países desarrollados que tenían la capacidad y la autoridad moral para intervenir.

Las políticas represivas aplicadas contra las drogas por el gobierno de EE.UU. buscaban persuadir a los demás países para que colaboraran en su misión de eliminar la oferta de drogas (Chomsky 2004: 79). Con este propósito, durante la década de los 80, EE.UU. aplicaría un enfoque político denominado *el garrote y la zanahoria*, que era un método basado en el castigo y la recompensa para persuadir a los gobiernos extranjeros en la negociación de los acuerdos bilaterales; en este caso, no se recurrió a los acuerdos multilaterales porque les resultaba más eficiente presionar a los países de forma individual. Asimismo, vincularon los esfuerzos para controlar las drogas

con la ayuda para el desarrollo brindada por EE.UU., de manera que los países recibían solo la mitad del monto asignado para la asistencia en octubre³⁴ y dependiendo de si obtenían o no la respectiva certificación³⁵, la otra mitad en marzo (Fryer, 1993: 1).

Según la lógica de los políticos estadounidenses la forma más barata y segura de erradicar las sustancias narcóticas era destruyéndolas en su punto de origen, por esta razón el congreso de este país asignó aproximadamente 70% de los fondos de los programas antidrogas en proyectos diseñados para solucionar el lado de la oferta. Esto pondría en evidencia que las autoridades de EE.UU. sopesaban los costos desde su perspectiva, sin tomar en cuenta la carga y el alto precio que deberían asumir los países productores (Fryer, 1993: 1). Así también, cabe destacar que dentro de las políticas que plantea EE.UU. no figuran políticas que permitan el desarrollo de las zonas rurales colombianas como planteaba la ONU. Por el contrario, se efectuaron principalmente programas de erradicación de cultivos que no solo despojaban a los individuos de estas zonas de sus pocos recursos de subsistencia, sino que era dañino para el medioambiente (Youngers y Walsh, 1989: 350).

Por otro lado, la política exterior de los países latinoamericanos estaba definida por la Doctrina de Seguridad propuesta por Washington en la década de los 60 en la que se etiquetaba al comunismo como un mal que se debía combatir. Dicha doctrina permitió que se estructuren alianzas militares dentro del continente para enfrentar esta supuesta amenaza. Asimismo, esta cohesión militar tuvo un nuevo impulso cuando en 1982 el entonces presidente de EE.UU., Ronald Reagan, declaró en su discurso de “guerra contra las drogas” a estas sustancias como una amenaza a la “seguridad nacional” de su país y del mundo. El problema de las drogas tuvo implicaciones directas en las políticas de salud, de seguridad y en la legislación con respecto a los narcóticos en los países de la región (Paladines, 2012: 32-33).

El discurso antidroga no respondía al esquema realista, ya que el fenómeno del narcotráfico no corresponde a una amenaza a la supervivencia bajo los preceptos de esta teoría. El narcotráfico no constituye un riesgo a la

³⁴ El 1 de octubre por ser el inicio del año fiscal (Fryer, 1993: 1).

³⁵ Esta certificación dependía de la cooperación de los gobiernos extranjeros con los esfuerzos de control de las drogas de EE.UU. (Fryer, 1993: 1).

integridad territorial, no es un fenómeno diseñado específicamente para desestructurar la sociedad norteamericana, no tiene solución inmediata porque se basa en un patrón de conducta nacional y no obedece a una interacción con unidades políticas estatales. Por lo tanto, se establece que los intereses que encierra este discurso no son de sobrevivencia ni vitales. Sin embargo, esta guerra contra las drogas es planteada como un asunto urgente que requiere la intervención de las agencias militares y de inteligencia norteamericanas en otros países; produciendo así, que el discurso se siga expandiendo a favor de la estrategia de EE.UU. (Bonilla, 2004:42).

El análisis realista falla en la descripción del problema y también en la de los actores. Por ejemplo, cuando los gobiernos republicanos de EE.UU. en la década de los 80 declaran una mayor crisis con la región de América Latina, se observa que los enemigos son actores no estatales, difíciles de identificar y de definir. Conjuntamente en 1982, el presidente Reagan declararía la guerra contra las drogas en Latinoamérica, autorizando al Departamento de Defensa a involucrarse en operaciones antidroga (Bonilla, 2004: 43-43). Así, la internacionalización unilateral de la problemática por parte de la potencia del norte y los diferentes medios de presión aplicados para conseguir que los países adopten y apliquen sus estrategias, resultó en que para la mayoría de países andinos la lucha contra la oferta de drogas fue *norteamericanizada* (Chomsky 2004: 79).

2.3.2. La política exterior colombiana y su reajuste.

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos durante el siglo XX ha sido cordial y amistosa, sin embargo, ha sufrido algunos cambios de acuerdo a las circunstancias. En las primeras décadas se aumentó la tensión entre los países debido al involucramiento del Presidente Theodore Roosevelt en el conflicto de Panamá³⁶; a pesar de esta animosidad diplomática los lazos económicos con EE.UU. se debían proteger, ya que este país era el principal comprador de café, el principal producto en el mercado de exportación de Colombia (U.S. Library of Congress, 2011: 1). Asimismo, en la década de 1920 el Presidente colombiano Marco Fidel Suárez³⁷ adoptaría la doctrina política

³⁶ En noviembre de 1903, Panamá se independizó de Colombia por diferencias en las negociaciones con EE.UU. con respecto a la construcción del canal de Panamá.

³⁷ La administración de Marco Fidel Suárez va desde 1918 a 1921.

*Respice Polum*³⁸, que vinculó el destino de Colombia al de EE.UU. en términos de geografía, comercio y democracia (Carvajal, 2009: 213).

Esta doctrina que buscaba imitar y seguir a EE.UU. se mantendría por las siguientes décadas, incluso el presidente liberal Enrique Olaya³⁹ aceptó la *Política de Buen Vecino*⁴⁰ propuesta por Franklin D. Roosevelt. Conjuntamente, la relación con Estados Unidos se fortalecería durante la Segunda Guerra Mundial con un tratado bilateral de comercio firmado entre los dos países. Así, EE.UU. proveería entrenamiento militar y acuerdos de comercio favorable, mientras que Colombia concedería derechos de uso sobre su territorio, estratégicamente ubicado cerca del Caribe y del canal de Panamá, para apoyar la victoria de los países Aliados. Sin embargo, las relaciones entre ambos países se complicarían en los años 50 con el inicio de la época de *La Violencia*, ya que los miembros del gobierno conservador eran católicos acérrimos y persiguieron a quienes pertenecían al partido protestante liberal, lo cual constituyó una amenaza para los residentes norteamericanos en el país (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

Colombia se convertiría en uno de los principales receptores de ayuda norteamericana en Latinoamérica durante las décadas de 1960 y 1970, incluyéndose así en el programa creado por el presidente John F. Kennedy llamado *Alianza para el progreso*. Los puntos principales de esta ayuda fueron asistir a Colombia a ajustar su balanza exterior de pagos, y también a incrementar su desarrollo económico a través de procesos de industrialización y la implementación de reformas agrícolas y sociales. No obstante, dichas políticas no darían los resultados prometidos y a mediados de la década de los 70, los políticos encargados de generar la política internacional del país se mostrarían descontentos y empezarían a contradecir y desafiar al gobierno de EE.UU. (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

En 1975 el presidente colombiano Alfonso López Michelsen aplicaría una nueva doctrina política, *Respice Similia*⁴¹, la cual insistía que el gobierno imite la política exterior en países con circunstancias parecidas. De esta

³⁸ Significa "Mirar hacia el norte".

³⁹ La administración de Enrique Olaya va desde 1930-1934.

⁴⁰ Esta política fue el inicio del panamericanismo que buscaba la integración, la asociación y la cooperación entre los países del continente americano.

⁴¹ Significa "Mirar a tus semejantes".

manera, el presidente de Colombia tomaría acciones dentro de la comunidad internacional que no estaban acordes a la política y a la ideología de EE.UU., como renovar las relaciones diplomáticas con Cuba, reconocer al régimen Marxista en Angola y apoyar a Panamá en la renegociación del tratado por el Canal con EE.UU. Asimismo, se negó a recibir más ayuda económica de parte de EE.UU. y dio por terminado el programa de la principal agencia para el desarrollo, la USAID⁴², en su país, argumentando que el malestar en la economía nacional del país se debía a la dependencia originada de la ayuda internacional (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

El presidente Julio César Turbay⁴³ mantuvo durante los dos primeros años de su mandato el carácter no alineado de las políticas con respecto a la potencia del norte. Así, demostró en el año de 1979 la independencia de la nación en su política exterior, cuando junto con otros países andinos, reconocieron a la guerrilla sandinista nicaragüense como una fuerza beligerante. Sin embargo, la administración de Turbay dejaría de aplicar esta tendencia dentro de su política exterior al darse cuenta de la amenaza que constituía la dirección ideológica que se aplicaba en países como Cuba y Nicaragua, ya que el primero apoyaba a la guerrilla colombiana M-19 y el segundo reclamaba la pertenencia de ciertas islas en el Caribe que le pertenecían a Colombia (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

De esta manera, el presidente Turbay restablecería una relación cercana con los EE.UU., convirtiéndose en el principal portavoz latinoamericano de la idea del presidente Ronald Reagan de que Cuba y Nicaragua con su ideología comunista eran la principal causa de subversión e inestabilidad en Latinoamérica (Cámara de Representantes de Colombia, 2011: 1). El gobierno de Bogotá rompería definitivamente lazos con el gobierno de Fidel Castro, después de que admitiesen que de hecho apoyaban las actividades guerrilleras del M-19; también criticó al movimiento rebelde en El Salvador, apoyando al gobierno provisional de José Napoleón Duarte; y en el caso de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvinas

⁴² Por sus siglas en inglés, United States Agency for International Development.

⁴³ La administración de Julio César Turbay va desde 1978-1982.

Colombia, igual que EE.UU., se abstuvieron de votar con respecto a la intervención de la OEA⁴⁴ (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

Después vino el gobierno del presidente Belisario Betancur⁴⁵, quien durante su campaña no dio indicios de que se propusiera cambiar la tendencia de la política exterior, empero, en la práctica pondría a Colombia en una postura no alineada a las políticas de la administración de Reagan. Betancur revertiría la política de Turbay de no ayudar a Argentina y apoyaría la creación de proyectos de cooperación entre países latinoamericanos y del tercer mundo. Así, en el año de 1983 Colombia, con el apoyo de Cuba y Panamá, se unió al *Movimiento No Alineado*⁴⁶ que lideraba Fidel Castro. Asimismo, Betancur se oponía a la intervención extranjera en territorio centroamericano porque consideraba que esta agravaba más los conflictos existentes (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

Asimismo, Betancur acusó a los Estados Unidos de entorpecer el proceso de paz en la región con sus políticas para Cuba y Nicaragua. Además, criticó el creciente proteccionismo que estaban aplicando en sus políticas comerciales, su desinterés por aumentar sus contribuciones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Inter-americano de Desarrollo (BID) y sobre todo el fracaso en sus esfuerzos para reducir la demanda de drogas en su país. Sin embargo, en el año de 1985 debido a los problemas financieros, se vio obligado a abandonar su retórica nacionalista con respecto a los temas de la deuda y de las drogas, adoptando así estrictas medidas de austeridad y cooperando de una manera más cercana con las campañas estadounidenses contra el narcotráfico. Como resultado, los EE.UU. apoyaron la renegociación de la deuda colombiana con el FMI y el Banco Mundial (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

Virgilio Barco⁴⁷ adoptó un enfoque más pragmático en las relaciones internacionales de Colombia, buscando así darle un perfil más bajo al país dentro de la política mundial. Colombia fue el cuarto entre 100 países miembros del *Movimiento No Alineado* en votar de acuerdo a la posición de

⁴⁴ La Organización de Estados Americanos podía aplicar el Tratado Inter-americano de asistencia recíproca (tratado de Río.)

⁴⁵ La administración de Belisario Betancur va desde 1982-1986.

⁴⁶ Este movimiento planteaba que los países no deberían aliarse a ningún bando durante el conflicto geopolítico de la Guerra Fría.

⁴⁷ La administración de Virgilio Barco va desde 1986-1990.

Estados Unidos en los foros internacionales. A finales de la década de 1980, la relación bilateral entre ambos países fue catalogada de ser excelente, con menores diferencias que se enfocaban principalmente en estos puntos: el apoyo brindado al Acuerdo de Paz Centroamericano en 1987, las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales sobre las industrias cafetera y textil, la negativa de condenar a Cuba por violación a los derechos humanos y la supuesta falta de esfuerzos para controlar el tráfico de drogas (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

Estados Unidos buscó la intervención en Colombia en temas sociales y políticos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los temas principales en su agenda política internacional: la promoción de la democracia y el modo de producción capitalista, la protección de los derechos humanos y la lucha contra el tráfico de drogas. De esta manera, la problemática de las guerrillas armadas no constituía solo un problema de carácter nacional, sino una pieza fundamental para la estrategia internacional de contención del comunismo. Para la administración en Washington, el Estado colombiano pasó de ser un país modelo, por sus políticas afines a la lucha contra el comunismo y la búsqueda del desarrollo y el bienestar, a ser un *país problema*, cuya inestabilidad representaba una amenaza a la región (Restrepo, 2001: 15).

Cuando el conflicto interno se agravó en Colombia por la presencia del narcotráfico, Estados Unidos apostó por la internacionalización del conflicto con el fin de combatirlo. Si bien por un lado, el gobierno de Washington presionó a diferentes países latinoamericanos a aplicar las medidas de carácter restrictivo para erradicar la oferta de sustancias ilícitas, este no fue el caso de Colombia, ya que este país pidió la colaboración de los demás países que estaban involucrados en el negocio del tráfico ilegal. El gobierno buscó dar una respuesta multilateral al problema en aumento de las drogas. Así, la intervención en las políticas y en el territorio colombiano no sería vista como una imposición por parte de la potencia del norte, sino como una medida de responsabilidad compartida con un país aliado (Restrepo, 2001: 16-17).

2.3.3. Las políticas prohibicionistas y las medidas aplicadas.

En las décadas de 1970 y 1980, dado que Colombia se consolidó como la mayor fuente ilegal de cocaína y marihuana que se exportaba a Estados

Unidos se complicó la relación entre ambos países. El Tratado de Extradición entre ambos países, firmado en 1979, y la ayuda económica de 26 millones de dólares, conformaron lo que el gobierno en Washington consideraba como el modelo de los programas antinarcóuticos (U.S. Library of Congress, 2011: 1). Los programas implementados por EE.UU. dentro de Colombia incluían principalmente esfuerzos en conjunto para erradicar la producción e drogas a través de la destrucción de los cultivos y de los laboratorios y la aprensión de los criminales (Fryer, 1993: 1). Además, las autoridades de EE.UU. hicieron un compromiso de que la asistencia antinarcóuticos solo se usaría para actividades relacionadas a la drogas, con el fin de no intervenir en los asuntos internos del país (WOLA, 1991: 53).

Las relaciones cercanas y la afinidad política entre ambos países, hizo que Colombia busque alinear sus políticas antidrogas a la de EE.UU. De esta manera, si bien Colombia durante la primera mitad del siglo XX tuvo una tendencia a elaborar políticas prohibicionistas, éstas no se volvieron efectivas por las presiones sociales, con bases económicas, que buscaban mantener el cultivo de las plantas de marihuana y coca. Sin embargo, esta situación cambia súbitamente en la década de los 70, cuando en 1974 se inscribe el decreto 1188, en el que se regulan nuevas medidas penales y restrictivas, otorgándole el control al Estado, mediante el “Estatuto Nacional de Estupefacientes”, con respecto a la elaboración, distribución y almacenamiento de cualquier droga (Cámara de Representantes de Colombia, 2011: 1).

Colombia permitió así que los EE.UU. influyeran en sus políticas nacionales, y la intervención militar en su territorio (Carvajal, 2009: 213 – 214). De esta manera en la década de los 80, bajo la excusa de la guerra contra las drogas y aprovechando la afinidad en la relación bilateral que se venía manejando, se crearon los *Forward Operating Bases*, que eran bases aéreas, controladas por el Departamento de Defensa de EE.UU. (DOD) que funcionaban como puntos logísticos para la lucha contra el narcotráfico. En estas bases se conservaban los helicópteros y aeronaves que serían utilizadas para destruir los cultivos ilícitos, los laboratorios y las bases enemigas con el fin de contener el transporte y con el tiempo erradicar los cultivos (Roncken, 2004: 14).

Por otro lado, los Estados Unidos enfatizarían la importancia de los tratados de extradición dentro de su estrategia de control de las drogas, ya que bajo su perspectiva los narcotraficantes no podían ser adecuadamente condenados por sus acciones en sistemas judiciales que se regían bajo una estructura corrupta. Esto llevaría a que las autoridades norteamericanas concentren sus esfuerzos en llevar a los traficantes de drogas extranjeros ante las cortes de justicia de EE.UU. La presión ejercida sobre Colombia con el fin de poner en vigor este tratado tensionaría la relación entre los dos países y alteraría el orden social dentro del país, ya que los traficantes empezarían una ola de violencia, de carácter terrorista, como símbolo de protesta (Fryer, 1993: 1).

En el caso colombiano el presidente Belisario Betancur se negó a extraditar a los ciudadanos colombianos por un conflicto de principios (Thoumi, 2002: 245), terminaría cambiando su postura al alarmarse sobre las implicaciones que el tráfico ilegal tendría sobre la política y la sociedad colombiana, especialmente sobre el abuso de drogas y el involucramiento en el negocio de la población joven y el asesinato del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por el Cartel de Medellín (U.S. Library of Congress, 2011: 1), lo que además le llevaría a restablecer el estado de sitio⁴⁸ en el país (Calvo, 2008: 160). En respuesta a la medida tomada, la industria ilegal tomaría represalias en forma de actos de narcoterrorismo como la detonación de dispositivos explosivos en lugares públicos y el asesinato de políticos, militares, policías y demás miembros de las instituciones estatales (Thoumi, 2002: 245).

En mayo de 1984, después de la muerte del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el presidente Betancur declararía una guerra sin descanso contra el cartel de Medellín y empezaría a extraditar a los traficantes de drogas a Estados Unidos. Desde noviembre de 1984 a junio de 1987, Colombia extraditó a trece presos nacionales, incluyendo al capo del cartel Carlos Lehder Rivas⁴⁹, y a tres presos extranjeros a EE.UU. Sin embargo, en junio de 1987 ocurriría un retroceso en los esfuerzos antidroga, cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió no ratificar el tratado de extradición

⁴⁸ El estado de sitio no se levantaría hasta 1991 (Calvo, 2008:160).

⁴⁹ Un jurado de EE.UU. lo sentenció en mayo de 1988 por tráfico masivo de drogas.

calificándolo de ser inconstitucional⁵⁰. A este tiempo las autoridades norteamericanas tenían más de setenta casos de extradición pendientes, incluyendo las órdenes de captura para tres de los principales miembros del cartel de Medellín que seguían en libertad: Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gonzalo Rodríguez (U.S. Library of Congress, 2011: 1).

El fracaso del tratado de extradición entre ambos países se debería a la incapacidad del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que a pesar de la voluntad de renovar el tratado, esto no fue posible debido al ambiente político lleno de amenazas y sobornos (U.S. Library of Congress, 2011: 1). Cuando en diciembre de 1987, el líder narcotraficante, Jorge Luis Ochoa, fue liberado de prisión, del ministro de Justicia Enrique Low sugirió que las decisiones de extradición sean tomadas directamente por el gobierno, sin tener que pasar a través de la Corte, basándose en tratados anteriores (Thoumi, 2002: 246). Sin embargo, dicho tratado se había invalidado por el nuevo convenio de 1979, suspendiendo así todos los procesos judiciales relacionados con la extradición de narcotraficantes, incluyendo el de Pablo Escobar (U.S. Library of Congress, 2011: 1). Con el fracaso permanente de la reinstauración de este tratado, las tácticas violentas de los carteles también se moderaría (Fryer, 1993: 1).

Existen numerosas críticas al conflicto armado en Colombia por cuanto se instauraba como un conflicto interno entre los grupos armados de las guerrillas, los paramilitares y las instituciones de defensa del Estado, los cuales cometieron actos de violencia entre ellos y contra la población civil del país. Los militares estadounidenses aprovechando la inestabilidad y el caos también cometieron graves delitos dentro del territorio de este país, mas no fueron juzgados allí debido a los tratados suscritos en 1962 y 1974 entre los dos países, los cuales garantizaban inmunidad diplomática a todos los ciudadanos norteamericanos que hayan llegado como miembros de un plan de cooperación. Mientras, que el gobierno en Washington exigía la extradición de ciudadanos colombianos, incluso policías y militares, por actos cometidos dentro del territorio de este país (Roppel, 2011: 79).

⁵⁰ La figura de la extradición se restableció el 16 de septiembre de 1997, bajo la presidencia de Ernesto Samper, luego de una serie de atentados ejecutados por los grupos narcotraficantes y múltiples amenazas comerciales por parte de EE.UU. En la actualidad se encuentra vigente; sin embargo, existen críticas de que es usado principalmente como método para alcanzar fines políticos, especialmente durante el gobierno de Álvaro Uribe (Ramírez, 2013: 1).

Colombia sería uno de los principales países receptores de ayuda militar de Estados Unidos. El apoyo buscaba contrarrestar los efectos de la militarización que se dio en el conflicto interno colombiano, para lo cual la potencia del norte asistía económicamente con miles de millones de dólares.

TABLA 4
ASISTENCIA ESTADOUNIDENSE ANTINARCÓTICA A COLOMBIA EN MILLONES DE DÓLARES

Año	Monto
1978	\$ 2.49
1983	\$ 3.49
1987	\$ 11.55
1989	\$ 75.01*
1990	\$ 11.63

*Este monto incluye la ayuda emergente antinarcótica entregada en agosto de 1989 tras el asesinato de Luis Carlos Galán.

Fuente: Crandall (2002)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Sin embargo, estas políticas no se enfocaron en subsanar el malestar social, sino que dieron incluso más espacio para que se cometan atrocidades contra la población. Así, mientras que los medios estadounidenses buscaban justificar su presencia y sus acciones dentro del territorio colombiano describiendo su supuesta labor altruista para restaurar el orden y la libertad, la desconfianza crecía dentro de las comunidades que no veían en las políticas aplicadas un posible retorno a un estado de bienestar. La administración de Washington pudo haber ayudado a aliviar el sufrimiento y a encontrar una solución a estos problemas sociales arraigados tan profundamente solo con no haber formado parte de la escalada del conflicto (Chomsky 2004: 79-80).

Para el análisis constructivista de estos hechos es importante tener en cuenta el proceso y el contexto histórico que se llevó a cabo, ya que fueron el aumento del narcotráfico en Colombia y los problemas políticos, económicos y sociales que este conllevó, los que modificaron la estructura interna del país y la imagen del mismo frente a la comunidad internacional. Además, permitiría la expansión de actores no estatales como las guerrillas, los grupos paramilitares e incluso se infiltraría en las altas esferas económicas y políticas de la sociedad, creando así nuevos intereses y rompiendo permanentemente el prototipo de unión y racionalidad en el Estado colombiano. La narcotización de la relación bilateral entre Colombia y EE.UU. tiene su origen en el cambio de

prioridades que se dio en la interacción entre ambos países, según se argumenta en el constructivismo, dando cumplimiento así al segundo objetivo de esta disertación el cual era: identificar los problemas causados en Colombia por el aumento del tráfico ilegal de cocaína y las políticas aplicadas para contrarrestarlos. Asimismo, para explicar el reajuste de políticas de Colombia no bastaría un resultado negativo en un análisis de costo-beneficio, sino que existe una participación activa para consolidar su alianza con EE.UU., y mostrarse como país amigo ante la comunidad internacional.

CAPITULO III

LA INTERVENCIÓN DE EE.UU. EN TERRITORIO COLOMBIANO Y LAS NARCO-GUERRILLAS.

3.1. Las relaciones entre los grupos irregulares y los carteles de drogas.

En la segunda mitad del siglo XX en Colombia, aprovechando el desprestigio y la incapacidad del Estado para proveer orden y servicios básicos en las comunidades campesinas, las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes incrementaron la inestabilidad dentro del país por sus actividades de carácter violento (Mujica y Thoumi, 1996: 1). Sin embargo, la evidencia presentada muestra que durante las décadas de los 70 y 80 no fueron las guerrillas, sino los grupos militares y paramilitares quienes estaban realmente aliados con el tráfico de drogas. El gobierno y las instituciones de defensa colombianas fueron corrompidos por la severa influencia económica que venía de la industria de narcóticos, dando paso a una estructura nacional de represión social, abuso a los derechos civiles e impunidad judicial.

Bajo la perspectiva constructivista, al momento de referirse a la interacción entre los diferentes grupos involucrados, es importante tomar en consideración los intereses de los mismos, ya que estos influirán en la construcción de su identidad. En este caso no bastaba el paradigma realista para proponer una política antidroga, ya que uno de los pilares del realismo radica en la idea de que los estados-nación son siempre los actores principales dentro de la política internacional. Consecuentemente, la iniciativa de las guerras antidrogas no podía ocultar el hecho de que el Estado, junto con otros actores subnacionales y transnacionales como la oligarquía, las mafias narcotraficantes, las guerrillas y los paramilitares, permitieron y perpetuaron la violencia dentro del territorio colombiano; descartando definitivamente la idea de la presencia de un Estado unificado, racional y democrático que se ajuste a las necesidades de su pueblo (Alai, 1989b: 9).

3.1.1. Las FARC y los traficantes de drogas.

El éxito del negocio del narcotráfico tuvo un efecto directo sobre las FARC, ya que la producción de coca empezó a expandirse rápidamente hacia los territorios controlados por la guerrilla, especialmente en el sur del país en los departamentos de: Caquetá, Putumayo y Guaviare. De esta manera, si bien

las FARC se habían fundado antes de que iniciara el fenómeno del tráfico ilegal y habían creado su propio sistema de subsistencia y de organización, ahora tenían un acceso directo a nuevos recursos de financiación y para crear bases de apoyo en sus relaciones con los campesinos y los jornaleros itinerantes que trabajaban en las respectivas plantaciones. La mayoría de las actividades relacionadas con el narcotráfico se concentraban en zonas con una presencia estatal casi nula y donde las FARC ejercían el papel de autoridad descuidado por el Estado (Chernik, 2008: 209-210).

Al inicio de la década de los 80, los miembros de las FARC empezaron a cobrar un impuesto dentro de sus territorios a los individuos que estaban involucrados en el cultivo de la planta de coca (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 136). Se le denominó como *impuesto revolucionario* o *vacuna* y lo cobraban a los cultivadores de coca y a los traficantes que ingresaban a comprar pasta de coca para procesarla en clorhidrato de cocaína; la guerrilla cobraba usualmente entre un monto entre el 10% o 15%, también llamado *gramaje*, de las transacciones realizadas, y cuotas por el uso de los narcotraficantes de pistas clandestinas, ubicadas dentro de sus zonas de influencia. La guerrilla se veía cada vez más involucrada con el tráfico ilegal de drogas y con el tiempo estos ingresos llegarían a representar entre el 50% y 60% de su presupuesto total (Chernik, 2008: 209-211).

Las investigaciones realizadas sugerían que las guerrillas financiaban sus actividades revolucionarias al poner impuestos al tráfico de drogas en su territorio. A cambio de este pago las guerrillas protegían a los traficantes, a sus plantaciones, laboratorios y pistas de aterrizaje contra las redadas ejecutadas por el gobierno. Por estas razones, bajo la administración de Ronald Reagan, el gobierno de EE.UU. promovió la noción de esta “*alianza impía*” entre las drogas y la insurgencia. De esta manera, la teoría sobre esta alianza buscaba enmarcar los temas de las interacciones Norte-Sur en el marco del conflicto entre oriente y occidente y la lucha contra el comunismo, así como para hacer propaganda sobre las amenazas del tráfico de drogas a los gobiernos latinoamericanos (Lee, 1998: 155-156).

Los estudios sobre la relación entre la guerrilla y los narcotraficantes sostienen que el incremento en la producción de coca tomó por sorpresa a los guerrilleros y a los campesinos que no sabían cómo responder ante esta

inesperada oportunidad como medio de financiación. En el caso específico del departamento de Caquetá, las FARC funcionaban como principal autoridad, y en el inicio del periodo de bonanza de la coca y la cocaína, intentaron prohibir el cultivo de esta planta, sin embargo, los campesinos se resistieron ante tal exigencia. Así, la guerrilla se vio obligada a elegir entre perder el apoyo de las comunidades o cambiar su política con respecto a la producción de la coca. Al final decidirían explotar esta nueva oportunidad de crecimiento económico que se le ofrecía a esta zona denominada como *frontera agrícola* (Chernick, 2008: 211).

Desde la perspectiva de la estrategia política para las FARC la decisión de aceptar el comercio de la droga tenía beneficios pero también altos costos. Por una parte, el hecho de involucrarse dentro de esta industria le permitió establecer mejores bases sociales dentro de las comunidades y legitimar su autoridad dentro de esta zona del país. Por otra parte, mientras su compromiso con los narcotraficantes se volvía más fuerte, este afectaba sus relaciones con otros actores como: intelectuales, estudiantes, obreros y partidos políticos de tendencia izquierdista. El apoyo a la guerrilla decaería en las zonas urbanas y con el tiempo en todo el país, ya que la relación entre estos grupos no haría más que aumentar el caos y la violencia dentro de las comunidades, como fue el caso en la creación de autodefensas campesinas de la guerrilla para proteger el negocio del tráfico ilícito (Chernick, 2008: 2011).

Con respecto a esta supuesta alianza, en los años 80 los traficantes de cocaína negaron rotundamente cualquier conexión con la revolución de izquierda, incluso Pablo Escobar, el máximo exponente de estos grupos aceptaba su participación en el narcotráfico pero se mostraba indignado de que lo vinculen con las guerrillas. Mientras que el líder de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), Manuel Marulanda recalcó las diferencias entre ambos y dijo que no tenían nada que ver el uno con el otro. Conjuntamente, Jacobo Arenas, el secretario político de las FARC manifestó que la teoría de la narco-guerrilla que promulgaba la CIA era *“una campaña mundial contra el movimiento revolucionario, contra la democracia, contra el progreso social de los pueblos.”* (Lee, 1998: 156) Al mismo tiempo, esta conexión fue aceptada por los altos mandos políticos, y con el tiempo terminó creando dilemas inmanejables para el gobierno, ya que dificultaban los procesos de paz y

cuestionaban el punto permisible de intervencionismo extranjero (Lee, 1998: 156-157).

El conflicto interno y la *guerra sucia*⁵¹ en Colombia se complicarían a raíz de la relación que se estableció entre los grupos guerrilleros y los productores de coca. Las guerrillas se articulaban con los productores locales para obtener más poder contra los grupos paramilitares, pero durante esta época no se puede hablar de un involucramiento real en la industria narcótica. En la década de los 80, se trató de convencer al público de que las FARC se habían convertido en el tercer cartel más importante al momento de exportar cocaína, después de los de Cali y Medellín. No obstante, la evidencia presentada no era sólida y la idea simplemente se veía como una especulación basada en la premisa de que en Colombia se vivía dentro de una *narcocultura* que afectaba todas las esferas de la sociedad, asociando todo tipo de actividad delictiva con la industria de las drogas (Camacho, 1989: 194-195).

Asimismo, en este análisis se debe tener en cuenta los intereses de los actores, ya que eso será lo que determine su comportamiento, los cuales en este caso en particular no serían solo contradictorios, sino también mutuamente excluyentes, disminuyendo así la probabilidad de una relación fructífera y sustentable entre ambos grupos. Si bien los propósitos de las guerrillas y de los grupos traficantes de drogas eran contrarios a los del gobierno de Estado colombiano y buscaban debilitarlo, sus razones para hacerlo eran totalmente diferentes. El fin máximo de las guerrillas era llegar al socialismo y así obtener la tan anhelada justicia social; por el contrario, el crimen organizado simplemente buscaba obtener mejores retribuciones económicas e influencia política con la venta de drogas para poder estar más arriba en la pirámide capitalista (Mujica y Thoumi, 1996: 1).

Sin embargo, la evidencia presentada sugirió que de hecho hubo vínculos entre la industria de la cocaína y las organizaciones revolucionarias, mas no llegaban a conformar una alianza *per se* (Lee, 1998: 157). Las relaciones entre ambos bandos han sido inestables e incluso violentas, y no ocurriría hasta la década de los 70 es decir 10 años después de la consolidación de las guerrillas campesinas. Las guerrillas reconocieron haberse

⁵¹ Este término hace referencia al conflicto interno de un país en el que se involucran partes disidentes que pueden ser fuerzas armadas, paramilitares y terroristas.

aliado en ocasiones con los carteles de droga para favorecer al colapso del sistema de gobierno colombiano, atacar al imperialismo estadounidense por medio de las drogas y crear redes de apoyo campesino (Mujica y Thoumi, 1996: 1). Aprovechando esta vinculación, Estados Unidos rompería su compromiso de no intervenir en temas no relacionados con las drogas, e incluso las guerrillas serían atacadas por la DEA en una guerra simulada contra las drogas, que infiltraron fuerzas especiales para que cometan atrocidades que luego serían atribuidas a la insurgencia; mientras que los carteles de drogas y sus aliados en la milicia se veían fortalecidos (Pilger, 1999: 1).

3.1.2. Corrupción y manipulación dentro del Estado colombiano.

La inestabilidad generada por el conflicto social en Colombia causó que el gobierno promulgue en 1978 el Estatuto de Seguridad Nacional, el cual se dictó bajo el amparo del estado de sitio y permitía la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional de EE.UU. para que las Fuerzas Armadas del país combatan al enemigo interno (El Tiempo, 2010: 1). Durante la década de los 70, las Fuerzas Armadas tomaron el control sobre el país con la aprobación de las administraciones de Luis Alfonso Michelsen y Julio César Turbay, empezando así una era de violencia y represión estatal. De otra manera, el presidente Belisario Betancur propuso medidas de paz y de diálogo, decretando una amnistía que liberó a casi 500 guerrilleros; sin embargo, la *guerra sucia* ya había empezado y gran parte del aparato político ya se encontraba corrompido (Calvo, 2008: 125, 143-145).

Mientras que los carteles colombianos consolidaban su supremacía en el mercado mundial de miles de millones de dólares, también buscaban obtener poder e influencia política, ya sea de forma legal o ilegal, recurriendo consuetudinariamente al uso de violencia. Por esta razón, las autoridades colombianas perseguían a dichos carteles y le impedían el libre ingreso de sus miembros al gobierno. Así, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien fue designado por el presidente Betancur en 1983, lideraría un enorme operativo el 10 de marzo de 1984, junto con la DEA, en el cual el gobierno colombiano logró incautar 10 toneladas métricas de cocaína y demolió 101 laboratorios de procesamiento. Un mes y medio después, Lara Bonilla, quien también había contribuido a expulsar a Pablo Escobar de su cargo de político

suplente en el Congreso, fue asesinado por orden de los narcotraficantes pertenecientes al cartel de Medellín (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 137).

El restablecimiento del estado de sitio por parte del presidente Betancur, después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, le permitió al primer mandatario dictar nuevas medidas represivas que sospechosamente no llegaron a afectar a los capos, y a estos la prensa los seguía ubicando en eventos públicos como eventos de caridad, recepciones y banquetes. Las autoridades del ejército colombiano aceptaron que durante los años de 1984 y 1985, si bien todos estaban al tanto de la industria ilegal de cocaína y del dinero que Pablo Escobar y los demás miembros del Cartel de Medellín gastaban libremente, no existía realmente la voluntad política para detener esta situación y los esfuerzos de la Fuerzas Armadas estaban enfocados principalmente en la lucha contra la guerrilla (Calvo, 2008: 160-161).

De igual manera, a pesar de los esfuerzos realizados, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mostró evidencia de que los narcotraficantes se habían infiltrado en el Consejo de Ministros con el fin de influir en las decisiones. Así, las autoridades colombianas consintieron la formación de pequeños ejércitos, en formas de empresas de seguridad con la autorización para portar armas, que trabajaban en beneficio de los carteles (Alai, 1989b: 9). Por ejemplo, el Ministerio de Defensa consintió que los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Calí, tuvieran la empresa *La Nacional de Seguridad* en la ciudad de Bogotá; mientras que Pablo Escobar tenía también la autorización de la misma institución para el funcionamiento de su empresa *Seguridad Nutibara* ubicada en Medellín (Calvo, 2008: 161).

Mientras el gobierno colombiano mantenía su discurso, en el que se priorizaba la paz y el diálogo, la *guerra sucia* continuaba en el territorio colombiano. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1984, fue asesinado en Bogotá el dirigente y negociador ante el gobierno del EPL, William Calvo. Las autoridades culparían del crimen a "*fuerzas oscuras enemigas de la paz*", pero en 1991 el suboficial de Inteligencia Militar, Alfonso Garzón, puso en evidencia la culpabilidad de varios agentes que pertenecían a las fuerzas especiales. Además, dos semanas después se vincularía a agentes de la policía secreta con el asesinato del primer sacerdote indígena de Colombia, al cumplir las amenazas hechas por militares y terratenientes en respuesta a su lucha por la

defensa de los derechos humanos de las personas de su comunidad (Calvo, 2008: 162-163).

Al mismo tiempo, a inicios de la década de los 80 el gobierno colombiano se había aliado con los carteles narcotraficantes en su guerra contra la insurgencia dando así origen al grupo Muerte a Secuestradores, abreviado como MAS. De igual forma, se encuentra en los informes del DAS registros sobre la formación de grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio, ubicada en el centro del país, los cuales eran entrenados por las milicias colombiana y estadounidense, y trabajan como sicarios. También, según el testimonio de un ex agente de la DIJIN o policía secreta, de nombre Ricardo Gómez Mazuera, los grupos policiales y militares de Colombia eran designados en misiones secretas que estaban al margen de la ley y violentaban los derechos civiles de los ciudadanos (Alai, 1989b: 9).

Durante esta época, Colombia presentó una de las más altas cifras de casos de desapariciones forzadas en el mundo (Alai, 1989b: 9). Según el Comité Permanente para los Derechos Humanos el número de asesinatos políticos provocados por las fuerzas del orden fueron de 96 en 1978 a 594 en 1983, e incluso se duplicó entre 1985 y 1986 de 630 a 1.387 cuando Virgilio Barco fue designado presidente. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas responsabilizaba al gobierno por 351 casos ocurridos entre 1979 y 1986. Según el informe de Amnistía Internacional, la situación era peor y existían más de 600 casos de desapariciones forzadas entre 1977 y 1987, siendo 200 solo del último año que correspondía a la administración de Barco. El gobierno rechazaría cualquier tipo de responsabilidad, y asignaría la autoría y motivación de estos crímenes al tráfico de drogas y los grupos subversivos (Calvo, 2008: 164).

3.1.3. La vinculación entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares y los carteles.

El 28 de marzo de 1984 se firmó un compromiso de tregua y diálogo entre el gobierno del presidente Betancur, las FARC, el EPL, el M-19 y el movimiento de Autodefensa Obrera. Dentro de este pacto, si bien cada actor tenía sus propios intereses se buscó priorizar las necesidades en común, como: apertura política para la oposición, que no se repriman las luchas populares, investigar sobre el paramilitarismo, sancionar a los culpables y que

se respeten los derechos humanos. Sin embargo, la realidad era diferente y el ex presidente había delegado el seguimiento de este proyecto a los ministros de Gobierno y de Defensa, quienes luego estarían vinculados con los traficantes. En octubre de ese mismo año varias organizaciones sociales condenaban las reiteradas violaciones al acuerdo de cese al fuego por parte de las Fuerzas Armadas y la proliferación y violencia de los grupos paramilitares (Calvo, 2008 162-163).

Durante esta época se vincularía al Ejército Nacional y a sus grupos paramilitares con el movimiento Muerte a Secuestradores (MAS). En diciembre de 1981, se arrojaron volantes desde un avión sobre la población de Calí, en los que se informaban que 223 jefes de las mafias narcotraficantes se habían unido para crear un escuadrón que ejecutaría públicamente a las personas responsables de los secuestros a sus miembros o allegados. Este grupo fue creado con el fin de vengarse de los militantes del M-19, quienes habían secuestrado a la hija de un narcotraficante de Medellín, Martha Nieves Ochoa, y sentar un precedente amenazador. El MAS golpeó las estructuras urbanas del M-19 y parte de sus miembros aparecieron asesinados, colgados en árboles, flotando en ríos y amarrados en postes (Calvo, 2008: 144-145).

Lo que más llamaría la atención con respecto al MAS era la forma en la que se desarrollaban sus operaciones, ya que primero llegaban los militares a los lugares donde se escondían los presuntos culpables guerrilleros, y subsiguientemente los miembros del MAS para llevárselos. Además, del hecho que este método seguiría siendo aplicado aun cuando Martha Nieves fue devuelta en febrero de 1982, y los individuos capturados o asesinados ya no eran únicamente pertenecientes al M-19, sino también miembros de organizaciones guerrilleras, sociales o políticas de oposición. En 1982, el MAS fue responsable de la desaparición de 12 universitarios en Bogotá, culpables del secuestro de los hijos de un mafioso traficante; y las investigaciones correspondientes concluirían que los perpetradores del crimen fueron efectivos de la policía secreta que estaban financiados por el narcotraficante (Calvo, 2008: 145).

Estas sospechas llevó a que en febrero de 1983 el presidente Betancur encargara la investigación a la Procuraduría General de la Nación, la cual vinculó al MAS con 240 desapariciones y asesinatos a lo largo del país. Según

el reporte dicho movimiento contaba con 163 miembros, de los cuales 59 eran militares activos. Si bien el movimiento en sus inicios no fue creado para ser algo estructurado ni permanente, sino simplemente para rescatar a Nieves Ochoa y enviar un mensaje, este serviría para afianzar la relación entre las Fuerzas Armadas colombianas y el narcotráfico. Empero, el gobierno continuaba negando cualquier tipo de relación y destacaba únicamente la existencia de una alianza entre la mafia y la guerrilla (Camacho, 1989: 193-195).

Conjuntamente, en 1984 se armó un escándalo a nivel nacional e internacional, cuando en noviembre del año anterior, el comandante de brigada, el general Luis Eduardo Roca Maichel, dispuso una compañía entera de fuerzas especiales contrainsurgentes para dismantelar un laboratorio de procesamiento de cocaína y reubicarlo en la frontera con Brasil. La operación, denominada como *Misión Rompedor 83*, tomó alrededor de dos meses y ocupó a 6 oficiales y 43 suboficiales, entre otros miembros de las fuerzas de élite, por lo que resultaba inverosímil que los demás comandantes, generales y el ministro de defensa no estuvieran al tanto. Sin embargo, cuando esto salió a la luz solo se suspendió a tres de los seis oficiales implicados, mientras que al general Roca Maichel se le permitió continuar ejerciendo en su cargo libremente (Calvo, 2008: 161).

Al mismo tiempo, los grupos paramilitares fueron formados por las Fuerzas Armadas de Colombia gracias a los fondos aportados por empresarios y ganaderos que estaban interesados en contener las acciones de las guerrillas. Sin embargo, este dinero no era suficiente para desafiar el control de las FARC sobre los territorios y el mercado de cocaína (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 136), y dado que las sumas requeridas eran de varios millones de dólares, resultaba inviable obtenerlas de los fondos del Estado debido la naturaleza criminal del propósito. Así, las Fuerzas Armadas decidieron buscar el dinero en los narcotraficantes, quienes venían realizando inmensas inversiones dentro de aquellos territorios (Camacho, 1989: 192-193). El contacto con el narcotráfico empezaría entre 1983 y 1984, cuando se iniciaron conversaciones con Pablo Escobar quien también tenía interés en deshacerse de la guerrilla (Calvo, 2008: 156-157). Así, los ingresos de este mercado ilícito que llegaría a constituir entre el 40% y 70% de sus recursos (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 136).

La relación entre los militares y los traficantes fue evidente en la región del Magdalena Medio, especialmente en el Puerto Boyacá. En esta comunidad se desarrolló un proyecto contrainsurgente de forma metódica y coordinada en el que las únicas autoridades eran los jefes paramilitares y los del ejército, con el apoyo de los grupos civiles de poder en el gobierno bogotano. En esta alianza los miembros del ejército protegían las actividades y los laboratorios del narcotráfico, y el financiamiento correspondiente que provenía de esta industria era canalizado a través de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), mediante la cual los paramilitares también adquirieron centros médicos, donde atender a sus heridos y una emisora de radio dentro de la comunidad, para poder influir directamente en la opinión pública (Calvo, 2008: 149-150).

De la misma forma, el Estado reconocería al movimiento político, Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), que conformaron los principales líderes del MAS localizados en la región de Magdalena Medio, y que tenía como objetivo buscar la expansión de la experiencia paramilitar como ideología política. Con este fin, de acuerdo al testimonio de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, uno de los principales dirigentes del partido y también paramilitar y narcotraficante, los sacerdotes eran parte crucial al momento de persuadir a las comunidades, ya que al ser una mayoría de personas religiosas, los curas pregonaban el temor marxista, vinculando a la guerrilla con el ateísmo e incluso de estar aliados con el diablo (Calvo, 2008: 150). Esta situación ponía a la luz el hecho de que no se perseguía un fin que priorice el bien común, sino que simplemente cada quien buscaba defender sus intereses por medio de un discurso manipulador y la violencia si era necesario.

Esta reforma anticomunista, en la que participaron políticos, militares, narcotraficantes y empresarios, sirvió para que los mismos se apoderen de las tierras; mientras que el gobierno no se oponía directamente a los grupos paramilitares, ya que ellos mismos habían sido los creadores de las autodefensas. (Alai, 1989b: 9). Estos grupos despoblaron al campesinado, expropiándole de sus tierras por ser presuntos guerrilleros u obligándoles a vender sus tierras a precios irrisorios, bajo a la amenaza de: *"Firma hoy o mañana negociamos con la viuda."* (Calvo, 2008: 150-151). Esta política se aprovechó de la ambigüedad en la definición de la figura terrorismo, aplicando

una estrategia de opresión y exterminio que se extendió desde los campesinos a dirigentes populares, a líderes estudiantiles y a activistas campesinos y sindicales (Alai, 1989b: 9).

3.2. La teoría de las *narcoguerrillas* como estrategia de EE.UU.

La creación del concepto de las *narcoguerrillas* permitió a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos distraer la atención del público de sus propios errores. Igualmente, EE.UU. la propuso con el fin de unificar su lucha antinarcóticos y de contención al comunismo. Dado, que el discurso dentro de la securitización debe seguir una estructura específica en su retórica, que derivará del concepto de guerra y sus connotaciones históricas de urgencia, amenaza, supervivencia y defensa, (Van Munster, 2012:1), las autoridades securitizadoras aprovecharon el conflicto social y la violencia que se daba dentro y fuera del país por el fenómeno del narcotráfico para difundir la idea basada en sus percepciones dentro de la opinión popular, aun cuando la evidencia presentada no tenía concordancia con lo que se planteaba (Cueva, 2010: 29).

En esta situación en particular se debe tomar en consideración, no solo la situación en Colombia, sino también los intereses y el estilo de la política norteamericana durante la presidencia de Ronald Reagan, aplicando los preceptos del constructivismo que busca explicar la construcción de la realidad social a través de la observación y en este caso la aplicación del concepto de Seguridad Nacional (Guzzini, 2000: 1). El análisis discursivo de la teoría de las *narcoguerrillas* cobra sentido cuando se lo pone en el contexto de Colombia como Estado colapsado y receptor, y a EE.UU. como Estado emisor con propósitos intervencionistas (Bonilla, 2004: 36). Además, con respecto a esto último la evidencia presentada es indiscutible de que Reagan convertiría a su país en una potencia neocolonialista agresiva, represora de los movimientos democráticos y de liberación y aliada de los regímenes dictatoriales y genocidas (Medina, 1984: 48).

3.2.1. Antecedentes y formulación de la teoría.

La guerra contra las drogas que había empezado en Colombia a partir de los años 70, cuando los programas de erradicación en México trasladarían

el cultivo de marihuana, siguió su proceso de escalada respondiendo al del conflicto interno que había generado. En el gobierno de Jimmy Carter (1976-1980), los Estados Unidos presionaría a las autoridades colombianas para que eliminaran los cultivos de plantas ilegales y que se les permitiera extraditar a los traficantes colombianos para procesarlos en EE.UU. Así, durante la presidencia de Julio César Turbay (1978-1982) se desarrolló la primera campaña de erradicación de cultivos, durante la cual se fumigaron varios kilómetros de marihuana con el herbicida químico paraquat⁵². Igualmente, se procedió a la firma del tratado de extradición en 1979, el cual entró en vigencia 3 años más tarde (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 136).

La crisis estructural causada por la presión de los grupos armados e insurgentes, llevaría eventualmente a una crisis democrática dentro del gobierno que daría como resultado un Estado colapsado (Cueva, 2010: 57). En este caso, la política exterior de EE.UU. influyó directamente sobre la situación dentro de Colombia, ya que el gobierno colombiano recurrió al país del norte por ayuda económica y militar para tratar de subsanar sus problemas internos. A pesar de la naturaleza política del conflicto, EE.UU. lo tomó desde el punto de vista de mantener la seguridad nacional, priorizando su intervención en las fuerzas militares y policiales del país. Con este propósito durante la década de los 80 canalizó mayores recursos de asistencia antidrogas para combatir a los carteles de Cali y Medellín (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 134).

Sin embargo, a pesar que desde la década de los 70, el Estado colombiano se concentraría en encontrar posibles respuestas al conflicto que se había originado a causa del narcotráfico y de los grupos insurgentes, este no buscaba soluciones a los problemas estructurales que constituían el origen de estos fenómenos. Por ejemplo, no se presentaron proyectos de reformas agrarias que permitan el desarrollo rural de los pequeños agricultores para que no tengan que recurrir al cultivo de coca para asegurar su subsistencia (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 132). El conflicto interno y el cultivo de plantas ilícitas derivarían en crisis humanitaria, desplazamiento forzado, violencia criminal y narcotráfico, que con el tiempo trascendería las fronteras de Colombia hacia los países vecinos (Cueva, 2010: 57), provocando que la

⁵² Este químico fue usado por EE.UU. para la erradicación de cultivos de marihuana en la década de los 70, sin embargo se suspendería su uso porque resultó ser altamente tóxico para las personas que se encuentran en contacto con el mismo (Medline Plus, 2015:1).

comunidad internacional presione para que se acepte la intervención norteamericana.

Además, durante esta época no existía un sistema político y judicial capaz de mantener el orden y castigar los delitos dentro del territorio colombiano, permitiendo la total impunidad no solo en el marco de los delitos comunes, sino además en el de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se cometieron durante el transcurso del conflicto. Las mismas Fuerzas Armadas fueron culpables de múltiples violaciones a los derechos humanos como: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y masacres; al mismo tiempo que toleraban estos mismos tipos de abusos de parte de las fuerzas paramilitares (Ramírez, Stanton y Walsh, 2005: 133). Esta situación llevó a que los gobiernos busquen un chivo expiatorio para extenderle sus propias culpas y seguir actuando en la impunidad.

Por otro lado, el narcotráfico generaría olas de violencia dentro de las comunidades, que sumado a los proyectos de fumigación desencadenaron un proceso de migración forzosa, ya que los habitantes de estas regiones perdieron sus alternativas económicas de subsistencia (Cueva, 2010: 61, 64). Así, bajo la perspectiva de la comunidad internacional, las personas desplazadas desde Colombia también eran consideradas como una amenaza por los países vecinos, ya que se los había estigmatizado de ser traficantes de drogas, guerrilleros o simplemente criminales. Este fenómeno de desplazamiento pasó a ser considerado como una *amenaza recurrente* que exigía respuestas de parte de las instituciones gubernamentales nacionales y extranjeras al ser considerado como una amenaza dentro del contexto de Seguridad Nacional (Cueva, 2010: 38-30).

Así también, dentro del marco de las relaciones entre EE.UU. y Colombia se daría una mayor importancia al concepto de seguridad nacional, el cual se enfatizaría a través del discurso. En este caso se utilizaría el concepto convencional de seguridad nacional, que se refiere al bienestar, a la protección y a la supervivencia de un Estado. En el caso de la guerra contra las drogas en Colombia el discurso puede ser percibido en tres niveles diferentes. El primer nivel describe el conjunto de imágenes y valores que conforman la estrategia antidroga y como esta industria representa una amenaza para la seguridad

nacional de los EE.UU. El segundo nivel alude a las políticas concretas de prohibición y militarización que se formularon. Mientras, que el tercer nivel se relaciona con la ejecución de esas políticas y la conformación de nuevas realidades (Bonilla, 2004: 37-38).

En este caso, para vincular el discurso antidrogas estadounidense con su intención de preservar la hegemonía de los EE.UU. en la región Latinoamérica y el Caribe, se debe relacionar los intereses globales que este país desea representar con las necesidades que las políticas de sus gobiernos buscan satisfacer. Los intereses estatales se construyeron a partir de valores concretos y fines políticos contingentes, que se definen en un código denominado como *discurso legitimador* (Bonilla, 2004: 37-38). Con este fin, el discurso de los EE.UU. crearía la teoría de las *narcoguerrilla* como amenaza a la seguridad, lo cual le permitiría perseguir dos de sus más importantes objetivos al mismo tiempo. Así, el discurso político expuesto por los EE.UU. no solo crearía un nuevo concepto, sino que de este se derivarían las respectivas decisiones, acciones y consecuencias en las realidades de ambos países (Bonilla, 2004: 43).

3.2.2. La política exterior de Reagan con América Latina y el Caribe.

El Presidente Ronald Reagan, que estuvo desde 1981 a 1989 en el cargo, declaró la guerra contra el tráfico ilegal de drogas, al calificarla como el principal enemigo para la seguridad de su país (Calvo, 2008:158). De esta manera, el gobierno federal se encargaba del tema de la prohibición, la cual era entendida como el hecho de restringir el ingreso de drogas dentro del territorio norteamericano. Durante el periodo de 1982 a 1986, cerca del 90% del aumento total de fondos federales, se destinó a reducir las actividades de abastecimiento en el país, entre las que se encontraban el control de guardacostas y aduanas, y los arrestos de traficantes que efectuaban las agencias de seguridad, cuyo porcentaje aumentó en un 40%, pero aún así no contrarrestó significativamente el flujo de drogas hacia la nación (Maxwell, 1989: 229-330).

A diferencia de su antecesor, el demócrata James Carter, quien había revelado que la región del Caribe y Latinoamérica no eran zonas de interés vital para EE.UU., Ronald Reagan declarararía a la región vital para la estrategia

política y comercial del país. El presidente norteamericano expresó su angustia con respecto a lo que él consideraba como un ataque del poder soviético dentro del continente. Durante esta época, Latinoamérica, Japón y Europa Occidental constituían unos de los fundamentos del poder de Estados Unidos, por ello calificaba como una amenaza a las doctrinas socialistas que se expandían en Cuba, Nicaragua, Guyana y Granada. Reagan implementaría una serie de medidas y acciones contra los regímenes comunistas que amenazaban la unidad del continente, situación que para él exigía una intervención urgente y desapacible, ya que en sus palabras: *“el asilamiento era imposible... la distensión era la muerte”* (Núñez, 1984: 30-31).

La política exterior de la Administración de Reagan estaba definida por la plataforma del Partido Republicano al cual él pertenecía. Entre los principios fundamentales del partido se deben señalar tres principales. Primero que se debe priorizar el acceso a los recursos energéticos y de materias primas que sean necesarios para el desarrollo económico y tecnológico del país, por lo que es necesario eliminar cualquier tipo de subversión patrocinada por la URSS, y agrupaciones económicas que se opongan al libre comercio. Segundo, para negociar con la URSS solo se lo puede hacer desde una posición de principio y superioridad incuestionables (Medina, 1984: 35-36). Tercero, lograr la supremacía militar y tecnológica con respecto al resto de países del mundo, aplicando una estrategia de defensa basada en la sofisticación tecnológica conocida como estrategia *Star Wars* (Cueva, 2010: 92). Esta política se aplicó a nivel global con el fin de obtener los recursos y ganar poder e influencia en todos los rincones del mundo.

La política de Reagan sería considerada como extremista, agresiva y belicista, en la que le otorgó el rol dirigente de la nación al *complejo militar-industrial*, el cual priorizaba los intereses de los productores de armas y las más grandes corporaciones. De esta manera, EE.UU. durante esta administración tenía aproximadamente 2500 bases militares en 114 países, las cuales tenían ojivas nucleares apuntando al mundo socialista. Asimismo, multiplicó el uso de las fuerzas de despliegue rápido para sofocar movimientos de liberación alrededor del África, Asia y Latinoamérica. También aplicó medidas de extorsión a los países en desarrollo, en áreas del comercio al aplicar medidas proteccionistas y en el área financiera con la elevación de los tipos de intereses de la deuda externa a través del FMI (Medina, 1984: 38).

La política de la administración de Reagan para Latinoamérica estuvo diseñada a partir del documento del Comité de Santa Fe que fue elaborado en mayo de 1980. Así, entre los puntos principales dentro del Plan Reagan se encontraban los siguientes: los asuntos internacionales se regirían a través de la guerra y no de la paz, la doctrina Monroe⁵³ es la base fundamental de la política exterior, EE.UU. debe evitar ser desplazado por las fuerzas soviéticas, y que los grupos insurgentes izquierdistas de otros países no deben ser pensados como un peligro para las oligarquías de aquellos países, sino como una amenaza directa a los intereses de seguridad norteamericanos. Esto llevó a que la potencia del norte realice una intervención estólida dentro de los países de Latinoamérica y el Caribe (Medina, 1984: 40-41).

Así, durante esta época Estados Unidos intensificó el bloqueo económico contra Cuba y desató en ese país la guerra bacteriológica contra la población humana, animal y vegetal de este país. En Honduras el ejército estadounidense utilizó despóticamente su territorio para sus operaciones de guerra dentro de la región. La CIA convirtió a Guatemala en una nación llena de presidiarios, en la que proliferaron los asesinatos, las desapariciones y las torturas. También, apoyó a los regímenes dictatoriales y genocidas que había en el Salvador, Guatemala, Argentina y Chile. Colaboró militarmente con el Reino Unido para la recuperación de las Malvinas en la guerra contra Argentina y vetó la resolución de cese al fuego en el Consejo de Seguridad de la ONU para este mismo caso. Además, atacó económica y militarmente a la Junta Sandinista en Nicaragua, la cual había sido elegida democráticamente, a través de grupos mercenarios que eran financiados y armados por la CIA (Torriello, 1984: 89-90).

El presidente Reagan condujo su política internacional por los caminos de la provocación, la agresión, la intervención y el terrorismo, amenazando a la paz mundial. El Plan Reagan atacaba la *doctrina Roldós*⁵⁴, nombrada así por su autor el ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós, porque consideraba que el concepto de los derechos humanos era relativo cultural y políticamente, por lo

⁵³ La llamada doctrina Monroe de EE.UU., bajo el lema de América para los americanos, se oponía a que países que no pertenezcan al continente tengan control sobre el territorio americano, en este caso específico se refiere a detener la expansión del comunismo de la URSS (Núñez, 2015: 1).

⁵⁴ La *Doctrina Roldós* formaba parte de la Carta de Riobamba, que fue suscrita en 1980 por los presidentes de Colombia, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica y Ecuador, en la que se definía a los derechos humanos como una obligación internacional (Roldós, 2012: 5).

que entorpecía los procesos de seguridad y paz en la región. Conjuntamente, consideraba al gobierno de Omar Torrijos en Panamá como una dictadura de izquierda extremista y agresiva, debido a las dificultades en las negociaciones con respecto al canal de Panamá, el cual EE.UU. quería controlar completamente. Ambos, líderes fallecerían misteriosa y oportunamente para los intereses estadounidenses, en inexplicables accidentes aéreos (Medina, 1984: 45).

Conjuntamente, se aplicó una economía de guerra dentro de EE.UU., recortando los servicios sociales para financiar la militarización (Medina, 1984: 38). Los programas de salud y de educación diseñados para combatir el abuso de las drogas estaban a cargo de los gobiernos estatales, mientras que el gobierno federal se encargaba del apoyo y el financiamiento a estos proyectos, ocupándose principalmente de manejar el tema de la prohibición. Durante este periodo se trató de aumentar el presupuesto para salud y educación pero se veían reducidos frecuentemente. Para el año de 1986, se había planteado una meta de 232 millones de dólares, pero esta cifra fue reducida por el presidente Reagan, provocando que se interrumpan programas sociales de tratamientos en adictos que se estaban llevando a cabo (Maxwell, 1989: 330). Así, la administración de Reagan estaba en guerra contra el sistema socialista, los países rivales, los países en desarrollo, el mundo entero, e incluso contra su propio pueblo (Medina, 1984: 37).

3.2.3. La implementación de la teoría.

Una vez comprobado el éxito que había tenido la retórica de la Guerra Fría para lograr apoyo doméstico se buscó hacer lo mismo al grito de la guerra contra las drogas por medio de los discursos políticos y los medios de comunicación (Youngers y Walsh, 1989: 341-342). Así, la transnacionalización del conflicto tuvo un elemento político clave, el cual fue la vinculación del tema del narcotráfico con los de subversión y terrorismo; unificando definitivamente a estos dos asuntos a combatir dentro de Latinoamérica con armas similares y con razones ideológicas que permitieron lograr un consenso y legitimar las decisiones con respecto a la lucha contra la *narcoguerrilla*. Esta supuesta alianza entre izquierdistas y traficantes permitió a los EE.UU. enmarcar las decisiones, en cuanto a su política exterior con respecto a estos conflictos, en un solo objetivo (Cueva, 2010: 92-93)

A inicios de la década de los 80, el presidente Reagan anunció la expansión de los esfuerzos antidroga por parte de EE.UU. Para justificar esta expansión, el ex presidente presentó la teoría de las *narcoguerrillas*, la cual enfatizaba la aplicación del principio de seguridad nacional a través de vincular a Cuba, los carteles colombianos de drogas, las guerrillas izquierdistas y los sandinistas en Nicaragua (Amatangelo, 2005: 1). Así, en el año de 1986, Ronald Reagan expidió la Directiva de Seguridad Nacional N° 220 en la que se definía al narcotráfico como una amenaza para la seguridad nacional y una fuerza desestabilizadora tanto a nivel nacional como internacional, autorizando una serie de políticas y operaciones militares con el fin de combatirlo. Esto influiría directamente en las políticas antinarcóticos de los países del continente (Youngers y Walsh, 1989: 344).

La teoría se empezó a formular a partir del operativo antidrogas en conjunto entre el gobierno colombiano y el de EE.UU. del 10 de marzo de 1984, el cual sería considerado como el golpe más representativo contra los carteles de las drogas. Este suceso y los elementos que lo envolvieron dieron un nuevo significado al fenómeno del narcotráfico en Colombia. A partir de entonces, Estados Unidos insistiría en que la producción de cocaína no solo es una amenaza para la salud de los consumidores en su país, sino que es un problema que afecta directamente a la seguridad y al bienestar de la sociedad colombiana. Además, las autoridades norteamericanas resaltaban la conexión entre las mafias de las drogas y la esfera política, argumentando que el problema era más serio que el caso de uno o dos *capos* figurando dentro del parlamento (Camacho, 1988: 133).

En las actas del Senado de EE.UU. del 21 de marzo de 1984, dentro de la intervención de Jesie Helms, un senador ultraconservador de la época felicitaba la participación de la embajada y del gobierno colombiano en la captura de aproximadamente 1,2 mil millones de dólares en clorhidrato de cocaína, lo que equivalía a un cuarto del consumo anual en EE.UU. El senador Helms hizo hincapié en los esfuerzos del gobierno colombiano y destacaba como Colombia se había destacado del resto de países Suramericanos por tener elecciones democráticas, libertad de prensa y haber logrado avances en los procesos de negociación con las guerrillas comunistas; esto último era de gran interés para EE.UU. porque consideraban que las guerrillas buscaban

derrocar al gobierno interno y sabotearles directamente mediante el envío de drogas a su territorio (Camacho, 1988: 134).

Esta refinería, objeto del operativo, ubicada al sur del país se la conocía como *Tranquilandia* y fue descubierta mientras aún estaba en la mente del público el escándalo por la *Misión Rompedor 83*, en la que las fuerzas especiales habían colaborado con el traslado de un laboratorio de cocaína, por lo que los generales del ejército con el fin de evitar más indagaciones, adjudicaron la propiedad y el manejo de la misma a la guerrilla (Calvo, 2008: 161). Esta afirmación sería corroborada por el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, quien incluyó en su testimonio por primera vez el término *narcoguerrilla* (Youngers y Walsh, 1989: 343). No obstante, varios meses después la revista que había reportado la existencia de esta refinería desmintió estos hechos, y sostuvo que sus reporteros no habían encontrado nada en ese lugar que se pudiera vincular con los movimientos guerrilleros (Calvo, 2008: 162).

En la teorización de este fenómeno se hace ostensible la intención dentro de la misma para producir determinados efectos y proteger intereses particulares (Camacho, 1988: 133). Así, la relación entre algunos productores de drogas y algunos grupos insurgentes permitió a los EE.UU. recuperar su base moral para obtener apoyo con el fin de intervenir militarmente en el extranjero en su guerra contrainsurgente. Estas ideas movilizaron la opinión pública dentro de los países Latinoamericanos, mientras que distorsionaban la realidad de que eran diferentes grupos con intereses opuestos. Los carteles narcotraficantes buscaban mantener el *status quo* que les permitía lograr sus objetivos a través de la violencia, en tanto que los grupos guerrilleros buscaban acabarlo, de vez en cuando aliándose con cultivadores de coca de la región (Youngers y Walsh, 1989: 343-344).

Bajos los supuestos del Constructivismo se pueden analizar como en esta situación se construyó la percepción pública como tema de Seguridad Nacional para calificar al conflicto interno y al tráfico de drogas que se daba en Colombia. Dadas las circunstancias se consideró como parte de la amenaza a los actores estatales y no estatales dentro de la dinámica de este fenómeno; provocando que con esta expansión del concepto, problemas de diferente índole sean tomados en cuenta dentro de los asuntos de seguridad. De esta

manera, el conflicto interno se convirtió en una amenaza regional, resultado de las acciones y reacciones de los diferentes actores que configurarían el proceso de securitización. La legitimización del uso de la fuerza como respuesta a un asunto de seguridad, justificaría la intervención de los EE.UU. para enfrentar los efectos del conflicto (Cueva, 2010: 27-30).

3.3. La intervención inapropiada de EE.UU. en Colombia.

EE.UU. promovía una estrategia destinada al fracaso, en lugar de dirigirse directamente a la raíz del problema, que era la demanda interna en su país (Youngers y Walsh, 1989: 350); sin embargo, continuaban aplicando esta política, ya que le permitiría ganar mayor poder e influencia para cuidar sus intereses y perseguir sus objetivos. La guerra contra las drogas no era efectiva, y por el contrario contribuyó a construir la realidad social y política para que la intervención norteamericana pueda efectuarse. Además, la militarización dentro de las medidas aplicadas colaboró a aumentar el paradigma de resolución de conflictos por medio de la violencia, además de que los grupos narcotraficantes no hubieran llegado a adquirir el inmenso poder que obtuvieron de no haber sido por la forma que los gobiernos de Colombia y EE.UU. los trataron de aprovechar para ganar las guerras contrainsurgente y antisandinista, respectivamente (Calvo, 2008: 158).

La teoría de las *narcoguerrillas*, permitió a Estados Unidos romper su compromiso de no intervenir en asuntos no relacionados con el tráfico de drogas, siendo esta idónea para que la potencia del norte pueda atacar directamente a los grupos izquierdistas. Al igual que en toda configuración social, este fue el resultado de un proceso de interacción entre los Estados (Wendt, 1992: 391-393), ya que *“la estructura no tiene existencia independiente del proceso”*, (Carvajal, 2009: 205), y mientras que los gobiernos de Bogotá y EE.UU. promulgaban su discurso para el público general, a la vez que era repetido y aumentado por la prensa mundial, la realidad de la guerra contra las drogas era otra (Calvo, 2008: 159), se asemejaba más a una guerra sucia llena de engaños e hipocresía que a una cruzada de buena fe por el bienestar de los gobernados. Esto vinculaba definitivamente al país del norte con la represión de movimientos sociales y la violación de los derechos humanos en Colombia; además, de que EE.UU. se aprovechó de la situación en Colombia para

extender sus políticas intervencionistas hacia otros países de la región con el fin de proteger sus intereses políticos y económicos (Alai, 1989b: 11).

3.3.1. El fracaso de la guerra contra las drogas y la teoría de la narcoguerrilla.

Colombia decidió de manera autónoma aliarse a Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico y el comunismo debido a sus intereses nacionales y a buscaba proyectar una imagen de ser un Estado estable y aliado a EE.UU. a la comunidad internacional. Sin embargo, esto no quita el hecho de que el país del norte aplicó presión económica y política, e incluso creó el discurso de las *narcoguerrillas* bajo cargos ficticios⁵⁵ (Amatangelo, 2005 : 1), con el fin de aplicar medidas que correspondan a su agenda política; obligando a Colombia a hacer reformas con un amplio espectro de incidencia dentro del país como: cambiar del sistema penal, modificar la legislación financiera para evitar el lavado de dinero, mejorar las estructuras policiales y militares y permitir la concesión para la creación de bases militares estadounidenses dentro de Colombia (Cueva, 2010: 62-63).

La estrategia de detener el tráfico de narcóticos en la fuente no dio los resultados esperados, no se logró reducir la cantidad de hectáreas con cultivos de coca ni la cantidad de cocaína ingresada en los EE.UU, inclusive la producción se duplicó en América del Sur entre 1982 y 1987. Los criterios de efectividad que se trataron de aplicar como la cantidad de hectáreas erradicadas, de laboratorios de procesamiento destruidos y de pistas de aterrizaje inutilizadas, no eran más que indicadores superficiales que no medían problemas estructurales más profundos, bastaba medir la cantidad de drogas que ingresaban a los EE.UU. para declarar el fracaso de las políticas aplicadas. No obstante, la postura del gobierno norteamericano no fue la de cuestionarse la naturaleza de sus programas antidrogas, sino la de intensificar el conflicto provocando una escalada a una guerra real (Youngers y Walsh, 1989: 349-350).

Mientras que el Presidente Reagan declaró que la guerra contra el narcotráfico se llevaría a cabo a escala mundial, no se puede pasar por alto que la atención de la misma se centró en Colombia (Calvo, 2008: 158), lo cual

⁵⁵ La vinculación entre las guerrillas y los carteles de droga se agravó en la década de los 90, mientras que en la de los 80 no existe suficiente evidencia para confirmar la existencia de la misma, por lo menos no la manera que la plantea el gobierno norteamericano (Amatangelo, 2005: 1).

generó graves problemas dentro del país. Por ejemplo, aparte de los programas de erradicación manual, el gobierno auspició que se efectúen fumigaciones con herbicidas, las cuales causaban daños al medio ambiente dentro de estas regiones, matando las plantaciones de todo tipo de cultivos y contaminando el agua. Asimismo, estas operaciones eran realizadas con productos y con personal provenientes de EE.UU., lo que aumentaba la presencia y la influencia de este país dentro de las zonas afectadas (Youngers y Walsh, 1989: 350).

La manipulación política se vuelve evidente en la década de los 70, cuando el gobierno norteamericano redujo la ayuda brindada en esa época a las fuerzas policiales de América Latina, mientras que al mismo tiempo se incrementó en un monto semejante la ayuda con fines antinarcóticos. Así, las medidas aplicadas para vincular las guerrillas con el tráfico de drogas sirvió como estrategia de la élite militar estadounidense para contrarrestar el apoyo de ciertos grupos académicos y religiosos a la insurgencia izquierdista en Latinoamérica, al colocarlos en el lado equivocado de la cuestión moral. La teoría de la *narco-guerrilla* resultó ser la excusa perfecta para que Washington pueda a través de la guerra contra las drogas, atacar directamente a grupos insurgentes de tendencia izquierdista (Pilger, 1999: 1).

Asimismo, debido a la relación de conveniencia que existía entre miembros de la policía y de la milicia colombiana, los grupos paramilitares que estaban a su cargo y los carteles de droga, la asistencia norteamericana que se brindaba a las Fuerzas Armadas estaba auspiciando indirectamente el asesinato y la intimidación de líderes políticos de izquierda. Las autoridades norteamericanas estaban al tanto del uso indebido que se le estaba dando a los recursos; sin embargo, estaban a favor de que este proceso continúe ya que esta supuesta limpieza de elementos subversivos en áreas específicas del país correspondía a sus propios intereses políticos (Youngers y Walsh, 1989: 355-356). Los ataques no se limitaron a los guerrilleros, sino que se extendió a todo aquel que buscara promover reformas socioeconómicas o políticas. Así, la ola de violencia siguió creciendo con la aprobación y gracias al apoyo del gobierno en Washington (Alai, 1989: 9).

Tomando en consideración el conflicto colombiano y el estado de sitio, que se aplicaba desde hace 40 años, el hecho de insistir en la injerencia de las

fuerzas militares en asuntos sociales y políticos, no hacía más que fortalecer el paradigma del uso de la fuerza como método de resolución de conflictos. El apoyo militar y político de EE.UU. en esta estrategia violenta colaboraría a la escalada del conflicto. Así, debido a la influencia de EE.UU. en las tácticas militares, se aplicó una estrategia de exterminio contra la guerrilla, con un total de 565 guerrilleros muertos frente a solo 26 heridos en 1988 (Alai, 1989b: 9). Si las autoridades colombianas y estadounidenses hubieran querido verdaderamente restablecer la paz y el orden se hubieran enfocado en las causas sociales que provocaban la producción de cocaína en Colombia y el consumo de la misma en EE.UU. (Youngers y Walsh, 1989: 356, 359).

De modo similar, como se explicó previamente, el gobierno colombiano había firmado un tratado de extradición con EE.UU. para que los criminales que cometieran violaciones a la ley relacionadas con el narcotráfico sean procesados por el sistema judicial norteamericano, el cual se aplicaría principalmente con aquellos traficantes que tenían mayor poder e influencia mediática o política. Sin embargo, la mayoría de ciudadanos colombianos no estaba de acuerdo con este tratado y criticaban el hecho de que no pidiera extradición y se dejara vivir en la impunidad a actores fundamentales en el funcionamiento de esta industria. Refiriéndose específicamente al rol de los banqueros estadounidenses y europeos que lavaban los miles de millones de las ganancias, quedándose con hasta más del 90% de las mismas; o sino también al de los exportadores de los productos químicos que eran necesarios para el procesamiento de la coca en clorhidrato de cocaína (Calvo, 2008: 160).

Con la declaratoria de la guerra contra las drogas, por influencia, del gobierno norteamericano se pusieron en marcha ciertas medidas dentro del territorio colombiano, que con el tiempo y la experiencia se comprobó que no eran eficaces dentro de esta guerra y que tampoco se limitaban exclusivamente al tráfico de narcóticos (Alai, 1989: 9), dando así la impresión de que tenía otro fin ulterior. De la misma forma, ambos gobiernos dejarían operar libremente a los carteles durante esta época con el fin de aprovechar las ganancias que se obtenían de este negocio para satisfacer sus propios intereses. Estados Unidos contradecía completamente los fines que promulgaba en su discurso cuando permitía el libre envío de cocaína a su propio país para financiar su lucha en contra de la junta Sandinista en Nicaragua (Calvo, 2008: 158).

Esta llamada guerra contra las drogas, junto con la teoría de la *narcoguerrilla*, sirvió para legitimar el autoritarismo estatal y así, ocultar la responsabilidad del gobierno en los crímenes que violaban los derechos humanos. Además, justificó la intervención extranjera, que como se puede comprobar, no solo lesionó la soberanía nacional de este país, sino que formó parte activa en la escalada de su conflicto interno. Conjuntamente, se considera como un infortunio más, el hecho de que la comunidad internacional se conformó con aceptar la versión simplista de que el gobierno de Colombia se encontraba en una guerra con el narcotráfico y lo apoyaba incondicionalmente; cuando si hubieran actuado con honesto interés y preocupación debían solidarizarse con las luchas democráticas por los derechos del pueblo colombiano, el cual era el que soportaba el peso de aquella guerra sucia (Alai, 1989: 9-10).

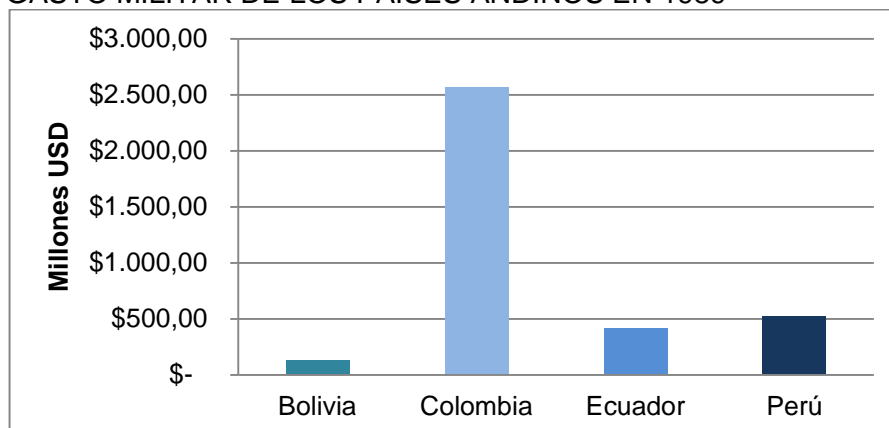
3.3.2. La intervención en otros países de la región.

De esa misma forma, la soberanía nacional de los países de América Latina y el Caribe fue amenazada por el gobierno en Washington bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Así, Florizelle O'Connors, Coordinadora del Consejo Jamaicano de Derechos Humanos y portavoz de la región, expresaba su preocupación en cuanto a que durante la administración de Reagan, los agentes de la DEA actuaban prepotentemente como si tuvieran mayor autoridad que los miembros de las instituciones nacionales de seguridad, y que los helicópteros fumigaban los cultivos de forma indiscriminada e insensata. Además, la coordinadora del Consejo destacó que por presión del gobierno de Estados Unidos, en varios países centroamericanos se terminó adoptando leyes draconianas no solo contra los convictos, sino también contra aquellos que estuvieran bajo sospecha (Alai, 1989b: 11).

Además, se culpa a EE.UU. de presionar a Perú y Bolivia para que copien el modelo de Colombia e involucren a las fuerzas militares en la lucha contra el tráfico de narcóticos, ya que en estos países esa tarea era exclusiva de las fuerzas policiales. Esto se puede constatar al ver que por la influencia

que ejercía EE.UU., Colombia al final de los 80 era el país con un significativo mayor gasto militar en la región⁵⁶.

GRAFICO 13
GASTO MILITAR DE LOS PAÍSES ANDINOS EN 1989

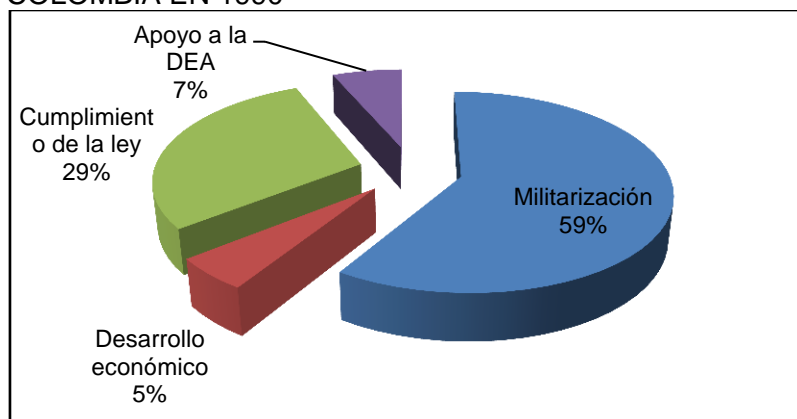


Fuente: Banco Mundial (2015)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

Este énfasis que se le daba a la participación de las Fuerzas Armadas dentro de las estrategias propuestas, sugería el interés del país del norte en aprovechar los programas antidrogas para incidir de forma directa en las actividades antsubversivas (Alai, 1989a:11), que estrictamente no eran de su competencia. La concentración de los recursos en la militarización se puede observar en la distribución de la asistencia financiera de EE.UU. a los países de la región Andina⁵⁷.

GRÁFICO 14
DISTRIBUCIÓN DE LA ASISTENCIA DE EE.UU. EN LA INICIATIVA ANDINA A COLOMBIA EN 1990



Fuente: Crandall (2002)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

⁵⁶ Ver anexo 15

⁵⁷ Ver anexo 16

Conjuntamente, el Senador estadounidense en Colombia, Thomas McNamara, aceptó que las autoridades de EE.UU. estaban complacidas con que la ayuda a los países para la guerra antidroga, se esté usando para otros fines como la lucha contra las guerrillas en la región (WOLA: 1991: 51-52).

Por otra parte, el gobierno de EE.UU. ha ignorado reiteradamente el tráfico ilegal de narcóticos cuando esta lucha entorpecía sus acciones dentro de otros temas de seguridad nacional que eran más urgentes en ese momento. Por ejemplo, la condena estadounidense sobre el rol que juegan las Bahamas como punto de paso en el narcotráfico internacional fue silenciada al momento de negociar la instalación de bases militares en las islas. También para promover sus intereses políticos en Centroamérica, mantuvieron relaciones con oficiales militares vinculados con el esta industria, como en el caso del general panameño Manuel Antonio Noriega, quien estaba en la nómina de la CIA a pesar de su vinculación cercana al cartel de Medellín. Sin embargo, el caso más importante y de mayor controversia es el involucramiento de la CIA en la financiación, por medio del narcotráfico, de la fuerza de los *Contra* en Nicaragua (Youngers y Walsh, 1989: 345).

La guerra contra el tráfico de drogas que fue mediatizada de forma masiva, ocultaba una verdadera guerra sucia y terrorista, que atentaba contra el orden dentro de Nicaragua a partir de la toma del poder por parte de la guerrilla sandinista en julio del año 1979. El grupo mercenario conocido como la *Contra* fue creado por el Consejo Nacional de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, y ante las restricciones que fueron impuestas por el Congreso, se la financió a través de la venta de marihuana y cocaína que traían desde Colombia. Así, con el fin de erradicar a la Revolución sandinista e impedir que Nicaragua siguiera el ejemplo de Cuba se utilizaron todos los medios disponibles, incluyendo la alianza de la CIA y otras agencias de seguridad estadounidenses con los carteles de Medellín y Cali a inicios de la década de los 80 (Calvo, 2008: 158).

De esta manera, los principales capos, especialmente Pablo Escobar Gaviria, le entregarían cocaína a la CIA, la cual era enviada en aviones camuflados de la Agencia hasta bases aéreas en Centroamérica, para en seguida ser remitida directamente a aeropuertos militares en EE.UU. Las

ganancias que se lograban de la venta de esta droga en las calles servirían para financiar a la *Contra* (Alai, 1989a:11), según un informe de Frederick Hitz, el inspector general de la CIA en esa época, la CIA orquestó el ingreso de 100 aviones que contenían cocaína entre 1984 y 1986. En el año de 1988, salió a la luz el hecho de que el gobierno de Reagan financiaban a la *Contra* de forma ilegal, provocando así un escándalo político (Calvo, 2008: 158-159).

En la investigación presentada por el senador John Kerry se puede ver que al momento de iniciarse este escándalo, lo primero que se dio a conocer fue que el dinero provenía de la venta de armamento a Irán, lo cual exponía el descaro del gobierno ya que el propio presidente lo había calificado de ser el *demonio* en virtud los conflictos políticos contra el régimen islamista que se posicionó a partir de la Revolución Iraní (Alai, 1989a:11). Semanas después saldrá la noticia que esta fuerza mercenaria también era financiada a través del tráfico de cocaína. Como respuesta, el vicepresidente y responsable del Consejo Nacional de Seguridad, George Bush, centraría toda la atención del escándalo en el *Irangate*, ya que la vinculación con el gobierno iraní era considerado menos delictivo y por ende perjudicaba en menor medida a la reputación del gobierno y sus funcionarios que la participación del gobierno en el comercio de narcóticos (Calvo, 2008: 159).

A partir de ese momento se rompería la alianza entre los mafiosos narcotraficantes y la CIA, en particular con Pablo Escobar quien además se había rebelado contra la esfera política de Colombia. Empero, los traficantes colombianos ya habían tenido por varios años la oportunidad de ingresar libremente sus cargamentos a Estados Unidos, de conseguir equipos y armamento sofisticados, y de contactar directamente con la banca norteamericana. Así, a pesar de lo que quieren transmitir tan insistentemente los medios de comunicación, la verborragia de los discursos políticos y las demostraciones de poder, los narcotraficantes no eran realmente perseguidos con todos los recursos disponibles porque no eran completamente enemigos, y quienes en verdad cargaban con las consecuencias de esta guerra contra las drogas eran los pueblos de Colombia y Nicaragua (Calvo, 2008: 159-160).

3.3.3. Protección de intereses económicos y políticos de EE.UU.

Estados Unidos consideraba a Latinoamérica como una región clave para mantener su poder hegemónico en el mundo, considerando al control sobre la misma como una estrategia indispensable para mantener la estabilidad política regional según sus intereses políticos y económicos. Con la declaración de la guerra contra las drogas la estrategia de EE.UU. en la región Andina se basaría principalmente en la erradicación de la producción de drogas en estos países y en disminuir el consumo nacional, dejando así en claro su capacidad para mantener el orden y su posición de liderazgo. El fenómeno de las drogas pasó de ser un asunto de seguridad pública a ser uno de seguridad nacional, lo cual implicaba la intervención militar dentro de los países donde se producían las sustancias ilegales (Cueva, 2010: 86-90).

La conexión entre ambos grupos permitiría a EE.UU. proponer la tesis de la *narcoguerrilla* que sirvió para varios propósitos políticos e institucionales, como: desacreditar a los movimientos de izquierda, quebrantar los intentos de paz entre el gobierno y la guerrilla, encubrir la conexión entre los traficantes de drogas con grupos regulares, como el ejército, y proveer mayor cantidad de ayuda internacional desde los EE.UU (Lee, 1998:156). Para los propósitos del Pentágono resultaba beneficiosa la intromisión de las agencias de seguridad de EE.UU. en los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, ya que esto les permitía establecer su presencia militar dentro de zonas determinadas, entrenar a las tropas según sus intereses y generar influencia y control sobre las instituciones de seguridad extranjeras (Youngers y Walsh, 1989: 352).

Si bien la adicción a las drogas y la violencia generada por las mismas provocó que existan millones de víctimas dentro del territorio estadounidense, la respuesta a esta crisis no se debía buscar en el territorio extranjero. Al momento de externalizar esta amenaza se evitó corregir las falencias económicas y sociales que determinaban las condiciones de pobreza, incitando a los individuos al consumo o comercio de drogas. La retórica de la guerra contra las drogas no planteó una introspección que permitiera diagnosticar las enfermedades y desatinos de la sociedad norteamericana. Por el contrario, fue una herramienta discursiva para que el gobierno pueda promover la base de apoyo popular a una política intervencionista y militarista dentro de los países

que eran considerados como proveedores de estas sustancias estupefacientes; ignorando deliberadamente que este tráfico ilegal estaba orientado por su propia demanda, que el procesamiento se realizaba con sus productos y legitimado por la ambiciosa banca de su país (Youngers y Walsh, 1989: 341-342).

EE.UU. siempre tuvo una amplia gama de intereses dentro de América Latina, los cuales definían la intensidad, el compromiso y las medidas en relación a la lucha contra el comercio de drogas. Entre los principales objetivos de su política oficial se deben destacar: la contención del comunismo, la implementación o estabilización de gobiernos democráticos y el desarrollo económico. El interés del país del norte en la región aumentaría con el crecimiento del narcotráfico, ya que le brindaría la oportunidad adecuada para desplegar su poder hegemónico, desde una posición realista, con el fin de mantener el orden mundial. De igual forma, el aumento de poder e influencia en los grupos narcotraficantes comprometía la integridad de las instituciones y la estabilidad política de algunos gobiernos latinoamericanos, lo que ponía en riesgo los intereses vitales de Estados Unidos dentro del continente (Cueva, 2010: 62, 88-89).

Las agresiones norteamericanas económicas, políticas y militares dentro de los países de Latinoamérica y el Caribe se justificaron bajo la lucha contra el comunismo y el narcotráfico, pero escondían la apetencia del país imperialista por las materias primas y los recursos que aquí se encontraban. Los principales materiales que le interesaban a EE.UU. eran: el petróleo, el aluminio, el níquel, el cobre, el plomo, el zinc la plata y el oro; materiales que abundaban en esta región (Medina, 1984: 41). Las medidas aplicadas por Estados Unidos indican que planeaban una intervención masiva en Colombia, incluso existe evidencia de mercenarios que trabajarían a la vez para el servicio de inteligencia norteamericano y para las mafias de drogas. Esto sugiere, que las actividades realizadas en este territorio no buscan eliminar el negocio, sino controlarlo, ya que lo que más teme la potencia del norte no son las drogas, sino perder el control de la crítica esquina al noreste de Sudamérica (Echazu, 2008: 1).

El Constructivismo permite entender la importancia de mantener la relación de *países aliados* entre Estados Unidos y Colombia, lo cual dio la

oportunidad al país del norte de influir directamente en las políticas y en la situación interna de la nación sudamericana. Igualmente, Colombia aceptaría esta cooperación ya que consideraba a este fenómeno como una responsabilidad conjunta y también deseaba proyectar su imagen de país comprometido con la causa. Sin embargo, la guerra contra las drogas fue mayoritariamente usada como una pantalla para ocultar las represiones civiles y las violaciones a los derechos humanos que se daban dentro del territorio colombiano, incluso por parte del Estado. La teoría de las *narcoguerrillas*, fue un discurso que creó una construcción social de una potencial amenaza, que sirvió para que EE.UU. pueda sin mayores evidencias o explicaciones, intervenir en temas no relacionados con el tema de las drogas, para perseguir sus propios fines económicos y políticos; con esto se da cumplimiento al tercer objetivo el cual era: examinar la injerencia en los asuntos internos de Colombia, que no tenían que ver con el tráfico ilícito de drogas; así, para proteger los intereses geopolíticos de EE.UU. se aprovecharía de las circunstancias y de esta teoría para actuar como potencia neocolonialista en la región.

VI. ANÁLISIS

En la presente investigación se tuvo como objetivo principal analizar la influencia de la guerra contra las drogas que el ex presidente norteamericano, Richard Nixon, empezó a inicios de la década de los 70, tuvo en la dinámica del consumo de drogas dentro y fuera del país. En este caso, el Constructivismo, es una teoría de las Relaciones Internacionales que permite dar una explicación alterna al desarrollo de este fenómeno, ya que a diferencia de las teorías clásicas, como el realismo y el liberalismo, rompe el modelo positivista que éstas habían adoptado y bajo el cual se habían realizado todos los estudios previos. Así, se verifica que las políticas antidrogas aplicadas a lo largo de estas dos décadas por los Estados Unidos tendrían una gran incidencia en la construcción de la realidad de ambos países con respecto al tema de la demanda y el tráfico de las sustancias narcóticas.

Asimismo, cuando esta política fue trasladada a la esfera internacional alteró la demanda y la oferta de este comercio ilícito a nivel mundial. La administración de Nixon se enfocó principalmente en la interdicción del consumo de drogas de tipo psicodélico, como la marihuana, la heroína y el LSD, las cuales estaban asociadas al movimiento hippie y al síndrome de Vietnam. Las severas medidas que se tomaron contra estas sustancias narcóticas, colaboraron a que se dé el *boom* mediático del uso de clorhidrato de cocaína o, como se le conoce comúnmente solo como cocaína, dentro de la población. Así, las medidas aplicadas por la guerra contra las drogas ayudaron a extender el mercado de consumo de este alcaloide y con ello aumentar la demanda que sería satisfecha por los países productores, los cuales vieron en esta una nueva oportunidad de generar mayores ingresos económicos.

El modelo moralista que aplicó los Estados Unidos fue impuesto de forma unilateral al resto de países, ya que esta nación se veía a sí misma como el líder mundial que tenía la obligación moral de intervenir. Durante esta época en el debate de que si las drogas eran un problema de salud o un crimen, la balanza se inclinó definitivamente al extremo de la criminalidad, empezando por que la administración de Nixon ignoró los problemas estructurales de fondo y se concentró únicamente en criminalizar el consumo. Así, se disminuyó el presupuesto federal designado para programas de prevención y tratamiento, mientras que este era reasignado a proyectos de interdicción a nivel nacional e

internacional. Por tanto, en el proceso de securitización de las drogas, al calificarlas como una amenaza al bienestar y al desarrollo de los países, se procedió a proponer medidas radicales que resultaron ser poco adecuadas y que causaron atropellos a los derechos civiles dentro de las sociedades de los países involucrados.

Además, al momento de analizar los discursos de Nixon y de Reagan, se puede ver el uso de lo que Merino define como estrategias semánticas de argumentación. Ambos ex presidentes norteamericanos afirman, asumen exageran y repiten la potencial amenaza que resulta de la problemática de las drogas, creando así con sus discursos construcciones sociales en la idiosincrasia de la población. Por ejemplo, el texto del discurso de Nixon en el contexto de una alta tasa de criminalidad y del síndrome de Vietnam, le permitió empezar la denominada guerra contra las drogas. La connotación de peligro para la seguridad encerrada en este concepto y el alcance mundial de esta problemática, definía implícitamente a los consumidores y a los países productores como enemigos públicos.

Conjuntamente, en el caso de Colombia, los cultivos de plantas de marihuana y coca, al igual que en el resto de países andinos, precedían a la llegada de los españoles. La demanda de drogas dentro de estos países, especialmente de marihuana, empezó a aumentar en la década de los 60 por influencia del movimiento hippie y el consumo de los miembros de los Cuerpos de Paz enviadas por EE.UU. para realizar proyectos de desarrollo. De igual forma, en el transcurso de la década de los 70, el aumento de la demanda de cocaína en EE.UU. llegó hasta los países productores de América del Sur, ya que la planta de coca no se daba en territorios de Norteamérica ni de Europa. Por lo tanto, estos países empezaron a dedicarse al cultivo y al procesamiento de sustancias narcóticas.

Bajo los principios constructivistas es ostensible que la consolidación de Colombia como el principal país exportador de cocaína al mercado de Estados Unidos, se dio a partir de la interacción con el mismo. En primer lugar, el tráfico de cocaína se trasladó al territorio colombiano en respuesta a las redadas efectuadas en México y en países de Centroamérica, como Jamaica, que obligaron a los narcotraficantes radicados en dichos países a buscar nuevas opciones de terreno en las que pudieran continuar su negocio. Segundo,

Colombia se ubicaba en una posición geográfica favorable y tenía la costumbre de mantener un comercio constante con el país del norte, por lo cual empezó a vender el clorhidrato de cocaína que obtenían de procesar las plantas de coca traídas desde Perú y Bolivia. Finalmente, fueron los individuos norteamericanos, que por una confusión inadvertida, en medio de operaciones de paso de contrabando en la región del Caribe, confundieron a los contrabandistas colombianos por bolivianos, solicitándoles cocaína y dándoles así la iniciativa de involucrarse en el negocio.

De igual forma para poder analizar adecuadamente la realidad colombiana en esta época es importante apelar a la historicidad, como se argumenta en el constructivismo, que dio lugar a determinadas circunstancias. Así, el proceso de ruptura del Estado colombiano, se daría a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando este país estaba sumido en una época de caos político y social, denominada como *La Violencia*. Durante este periodo de tiempo, entre 1946 y 1953, se provocó la muerte de aproximadamente 300.000 personas por los terribles actos de violencia que se propiciaban entre todos los bandos del conflicto. *La Violencia*, que tuvo un origen principalmente político dado por la rivalidad entre los dos partidos políticos liberal y conservador, acabaría convirtiéndose en un fenómeno que desestabilizaría todas las esferas de la sociedad colombiana. Esta situación provocó una serie de crisis internas en las instituciones públicas y de defensa del país, entorpeciendo la labor de las autoridades y los altos mandos del ejército y la policía para mantener el orden dentro de la nación e impedir la creación y expansión de los grupos insurgentes y paramilitares.

De esta manera, los ciudadanos colombianos se perfeccionarían paulatinamente en el negocio del tráfico ilegal de drogas. Si bien al principio se dedicarían exclusivamente al cultivo de marihuana, con el tiempo diversificarían su negocio hacia la cocaína para satisfacer la demanda del mercado internacional. El éxito de Colombia en esta industria se debería a varias razones, siendo entre estas las más importantes: la localización geoestratégica del país en su acceso a sus países vecinos productores de materia prima y a EE.UU. como principal comprador del producto final, la espesa selva amazónica que les servía de terreno de cultivo y escondite, la inestabilidad y la falta de control por parte de las autoridades. Además, desde el punto de vista constructivista, la idiosincrasia de la población colombiana, que se originaba en

sus intereses basados en la ambición económica, toleraba el uso de la violencia y las actividades ilícitas como medios para alcanzar sus objetivos personales, dando como resultado que esta identidad originada en el marco de la ilegalidad permitiera estructurar los canales de distribución. Colombia quedaría en el medio de dos fuerzas opuestas, la política prohibicionista y la demanda del mercado norteamericano, que fracturarían su sociedad y su Estado en construcción.

Las actividades dentro de esta industria incluían cultivo de las plantas, transporte, procesamiento, ventas y lavado de dinero, por lo cual los traficantes se vieron en la necesidad de formar sindicatos de exportación, que serían conocidos como carteles de drogas. Con un margen de ganancia superior al 3000% lo que empezó como un negocio de contrabando terminaría constituyéndose como un imperio multinacional de producción y tráfico de drogas, siendo de entre estos los principales, los carteles de Medellín y de Cali. La expansión del narcotráfico en Colombia aumentó las tasas de criminalidad, los actos violentos y la corrupción con el fin de mantener este negocio ilegal a pesar de los esfuerzos gubernamentales por impedirlo. Esto provocaría un deterioro en la economía formal y exacerbaría el ambiente de caos que devenía de la escalada del conflicto interno, alterando permanentemente la armoniosa relación bilateral que se había llevado entre ambos países por más de 70 años bajo los supuestos anárquicos y de asimetría de poder.

Esto ocasionó que Colombia ya no sea percibido como un Estado modelo, sino al contrario como una amenaza para el bienestar y el desarrollo de la región. Estados Unidos consideraría al fenómeno de las drogas como un motivo de conflicto entre ambos países y para solucionarlo condicionó los programas de asistencia al desarrollo a los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano en la lucha antidrogas, aplicando la política del garrote y la zanahoria también dentro de este país. Los diferentes gobiernos de Colombia no siempre estuvieron de acuerdo con la aplicación de ciertas medidas prohibicionistas de EE.UU., especialmente con aquellas relacionadas a la intervención militar y a la extradición de ciudadanos colombianos; sin embargo, la relación amistosa y la dependencia comercial con el país del norte hicieron que los mandatarios colombianos aceptaran las políticas de interdicción propuestas. En este caso se observa que la identidad colombiana se vio alterada por la interacción resultante de la comunidad internacional, pero

también por los esfuerzos internos que buscaban liberar al país del estigma del narcotráfico.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que si bien se dio esta *narcotización* dentro de la relación bilateral entre los dos países, Colombia tomó un rol activo en la construcción de su política internacional, mediante la interacción de conceptos, valores y normas que definían sus intereses y con ellos su identidad. Colombia había venido siendo un aliado político de EE.UU. en la lucha anticomunista, y así también decidió adherirse voluntaria y activamente a la lucha contra las drogas que lideraba EE.UU., ya que consideraba que la búsqueda de una solución para este fenómeno era una responsabilidad compartida por todos los actores involucrados. Así, se puede observar que los intereses de ambos países fueron el resultado de un proceso de interacción que se venía dando desde hace muchos años y de marcos de entendimiento definidos previamente, estos intereses se definieron a través de las diferentes circunstancias que se daban en dicha interacción. Bajo el análisis constructivista se puede decir que la realidad dinámica entre ambas naciones, cambió sus prácticas que constituían su relación, y con ello la identidad de las mismas.

Asimismo, el Constructivismo no solo observa el comportamiento, sino que retrocede en el camino analítico de los actores para descubrir cómo sus identidades definen sus intereses. Por lo que la presente investigación aborda la influencia que la intervención de los Estados Unidos en el territorio colombiano previa al fenómeno del narcotráfico también tuvo efectos trascendentales durante este periodo en la historia del país, y la importancia de los actores no estatales que definirían este proceso. Las guerrillas izquierdistas se crearon a partir de la resistencia campesina para contrarrestar la violencia y los abusos del poder oficial; de entre estas la guerrilla más importante en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se conformaron en 1964, por el ataque del ejército colombiano a la comunidad autónoma de Marquetilia bajo la recomendación y con el apoyo de los Estados Unidos. De la misma forma, los grupos guerrilleros también fueron un resultado de la influencia norteamericana, ya que la conformación de los mismos se basó en decretos de ley que consagraban la Doctrina de Seguridad Nacional de EE.UU. en la legislación colombiana, otorgando así el derecho al gobierno para

movilizar a la población civil en operaciones de combate que les permitieran defenderse de la guerrilla.

La comunidad internacional se interesaría más por la situación en Colombia a partir del *Bogotazo*, un evento que se dio en abril de 1948, por el asesinato del líder del partido liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en la ciudad de Bogotá. Esto provocó una serie de protestas sociales, que desencadenarían en tres actos de violencia y saqueos dentro de la ciudad, para finalmente trasladar aquella animosidad popular a las regiones periféricas del país, sirviendo como punto de origen para los grupos insurgentes. De otra manera, vale aclarar el hecho de que contrariamente a los que los líderes de las potencias de occidente querían convencer al público, estas revueltas no fueron organizadas por movimientos internacionales de ideología comunista, ya que si ese hubiera sido el caso en las revueltas se hubiera visto la determinación de derrocar al gobierno de Ospina Pérez, ya que ese era el *modus operandi* que estos grupos habían aplicado en los demás países. A partir de entonces, la situación dentro de Colombia sería considerada como un problema a nivel internacional.

Si bien al momento de coordinar las diferentes actividades de cooperación internacional con respecto a la lucha antidrogas, EE.UU. había hecho un compromiso de no intervenir en temas que no estuvieran relacionados con las sustancias narcóticas; sin embargo, tal compromiso sería irrespetado en la década de los 80 bajo la excusa que proporcionaba la teoría de las narcoguerrillas. El discurso de esta teoría derivó de la interacción entre ambos países al momento de realizar operaciones en conjunto para erradicar el tráfico de drogas. Así, después la redada en 1984 a la planta de procesamiento conocida como *Tranquilandia*, que era la más grande que se había descubierto, el embajador estadounidense en Colombia acuñó el término *narcoguerrilla*, asociando a esta planta de procesamiento con las guerrillas izquierdistas. No obstante, la evidencia presentada durante la época para tal afirmación era casi inexistente, y esta teoría se asemejó más una herramienta que derivó en un discurso legitimador para una mayor intervención militar por parte de EE.UU.

Aun cuando las autoridades quisieron convencer al público de que las guerrillas se habían constituido como el tercer cartel de drogas más fuerte del país, no existieron durante esta época suficientes pruebas para establecer una

relación definitiva entre ambos grupos. En este caso, basta analizar los intereses de cada bando para entender que sus objetivos eran mutuamente excluyentes, ya que los carteles buscaban mantener el *status quo* de corrupción y descontrol, mientras que los grupos insurgentes querían lograr un cambio que favorezca al estilo de vida del pueblo. Si bien los intereses de los segundos se verían tergiversados con el tiempo, y de hecho se verían forzados a tolerar la industria de las drogas como parte del proceso de adaptación en las comunidades, la relación que se mantuvo con los traficantes, en la que les imponían un impuesto en sus transacciones a cambio de protección, no llegaba a conformar una alianza *per se*, por lo menos no una como la que efectivamente existía entre las fuerzas armadas colombianas y los traficantes de droga.

La securitización de las drogas no permitió realizar un estudio adecuado que se ajuste a las necesidades de la población y brinde soluciones a los problemas estructurales que se daban en esa época. Así, se aplicó la retórica de la criminalización que buscaba la erradicación de los cultivos sin proponer opciones alternas, esta estrategia cerró múltiples programas de prevención y tratamiento, dedicándose a encarcelar adictos, también se emplearon políticas con categoría de urgentes que terminaron lesionando los derechos civiles y humanos de la población. De igual manera, al momento de analizar los intereses del Estado colombiano, se puede observar que se priorizó los intereses de las oligarquías del país, por lo que se consintió la alianza entre las fuerzas armadas y sus grupos paramilitares con los carteles narcotraficantes, con el fin de luchar contra los movimientos guerrilleros.

Asimismo, las políticas de la Administración de Reagan, que a pesar de declarar la guerra contra el tráfico de drogas como una prioridad para Estados Unidos, priorizaron los demás intereses en su agenda política contradiciendo completamente la retórica de su discurso. Las políticas antidrogas implementadas en Colombia no sirvieron para eliminar el narcotráfico, sino para controlarlo. La CIA permitió el libre tránsito de drogas por parte del cartel de Medellín a territorio estadounidense con el fin de obtener fondos para financiar a la rebelión que se oponía a la Junta Sandinista en Nicaragua. Además, se vinculó a los carteles de droga con los grupos insurgentes para que Estados Unidos pueda intervenir militarmente contra la insurgencia izquierdista, amenazando la soberanía de los países de la región Latinoamérica y el Caribe.

La influencia que se derivó de la interacción entre Estados Unidos y Colombia, marcan claramente el proceso en los intereses y la identidad de ambos países. La guerra contra las drogas obligó a instaurar medidas prohibicionistas contra un mercado que previamente había ayudado a crear, externalizó la culpa de EE.UU. por su demanda interna y permitió que paradójicamente ambos países se vieran involucrados con los grupos narcotraficantes para conseguir sus propios objetivos. La securitización de las drogas constituyeron un ejemplo clásico de la técnica *problema-reacción-solución* como estrategia política, con las drogas (problema) conduciendo a la respuesta de "hay que hacer algo" (reacción), lo cual permitió la violación de los principios fundamentales de las Relaciones Internacionales, de las libertades fundamentales, de los derechos, y con ello el lanzamiento de la falsa 'guerra contra las drogas' (solución). Un proceso de cambio con respecto a la formulación de estas políticas es lento pero a la vez inevitable, y se debe aspirar a un futuro en el que las medidas aplicadas estén enmarcadas en una visión humanista y sustentadas en estudios científicos, en lugar de en una mera histeria política.

VII. CONCLUSIONES

Después de haber analizado la información presentada en la presente investigación se concluye que la hipótesis planteada, la cual era que *“el aumento del narcotráfico de cocaína desde Colombia por las inadecuadas políticas estadounidenses de La Guerra contra las Drogas, influiría en el desprestigio de la imagen de Colombia obligándola a aplicar políticas complacientes EE.UU., lo que permitiría la intervención de EE.UU. en asuntos colombianos con la excusa de la vinculación de los grupos insurgentes y el narcotráfico”*, se cumple totalmente. De hecho las acciones y decisiones ejecutadas por Estados Unidos en su política colaboraron al aumento del tráfico ilegal de cocaína desde Colombia. Esta expansión del narcotráfico en territorio colombiano exacerbó el conflicto interno que se vivía en esa época, desestabilizando aún más las instituciones gubernamentales e imposibilitando el control estatal y la restauración del orden. Esta crisis social y política, sumada a los carteles que se volvieron millonarias organizaciones multinacionales, causaron preocupación en la comunidad internacional, presionando a que Colombia acepte la cooperación estadounidense en términos de lograr el control y erradicación del tráfico de drogas. Así, Colombia decidió compartir la responsabilidad de encontrar una solución a este fenómeno con EE.UU. Sin embargo, la evidencia sugiere que no se priorizó la lucha al comercio de estupefacientes, y que al contrario EE.UU. aprovechó su oportunidad de injerencia para perseguir sus propios intereses.

A continuación se detalla las conclusiones obtenidas durante el proceso de realización y análisis de la presente investigación:

- La nueva legislación que se aplicó al fenómeno de las drogas a partir de la declaración de guerra contra las drogas por parte del gobierno de Nixon cambió el enfoque y la dinámica social con respecto al consumo de sustancias narcóticas. Estados Unidos disminuyó el dinero para programas de prevención y tratamiento, mientras que los adictos fueron tratados como criminales hedonistas. Además, se asoció el consumo de las drogas con ciertas minorías raciales dentro del país. Así, el discurso de la guerra contra las drogas, permitió instaurar leyes más estrictas y prepotentes, y a la vez ganar el apoyo de la clase media blanca que se preocupaba por el aumento en la tasa de criminalidad en las urbes de la nación.

- La administración de Nixon manipuló y exageró la información de modo que lo que se presentaba al público ayude a que se acepte y se popularice la guerra contra las drogas. De esta manera, se exageró la cifra de adictos que habían perpetrado crímenes durante esos años, y sobre todo se ignoró deliberadamente los reportes científicos sobre los efectos de las drogas alucinógenas, como la marihuana y el LSD, ya que se las usaría como símbolos para combatir contra el movimiento hippie y el síndrome de Vietnam. Esto provocó que se apliquen medidas más estrictas específicamente contra estas drogas, facilitando así la expansión de la demanda de cocaína, que es más dañina para la salud, como producto sustituto.
- Estados Unidos consideraba que el descontrol que se daba por el tráfico de droga en los países productores se debía a la asimetría entre los grandes países que constituían la demanda de la misma y los países productores que eran por lo general menos desarrollados. Esto ocasionaría que la potencia del norte busque convertirse en el líder mundial, brindando asistencia a los países con menos recursos para que estos puedan combatir efectivamente contra la industria y comercio de sustancias ilícitas.
- Las políticas aplicadas por EE.UU. durante la guerra contra las drogas contribuyeron a la expansión del negocio de cocaína dentro de Colombia. Las redadas realizadas en otros países trasladaron el cultivo de marihuana al territorio colombiano, el tráfico de marihuana se diversificaría en comercio aprovechando la elevada demanda por este alcaloide por parte de EE.UU.
- La interacción entre ambos países jugó un rol importante en la iniciativa de involucrarse en el negocio de la venta de cocaína, ya que esta se dio a partir de la confusión de los contrabandistas norteamericanos, que al tomar a los pasadores colombianos por bolivianos, les preguntaron por la venta de cocaína. Asimismo, serían los miembros estadounidenses de los Cuerpos de Paz quienes enseñarían los procesos de elaboración de este alcaloide a partir de la planta de coca.

- La mayoría de los individuos que se vieron involucrados inicialmente en el cultivo de las drogas eran campesinos desplazados que tenían pocos recursos económicos y que tampoco tenían acceso a los mercados formales para comercializar sus productos.
- La industria del narcotráfico de cocaína tuvo la oportunidad de expandirse en el territorio colombiano por la falta de control y presencia estatal en las regiones periféricas del país. La crisis social por el conflicto interno empezó en la segunda mitad del siglo XX con la época de La Violencia, la cual sirvió de punto de origen para la creación de los grupos insurgentes y los grupos paramilitares para contrarrestarlos. La sociedad colombiana empezaría a tolerar y aceptar los actos delictivos y violentos como medios de solución de conflictos y para alcanzar sus objetivos. Esto permitió que los individuos se vieran rápidamente involucrados en el negocio del tráfico de drogas y que crearan redes de comercialización en otros países con sus compatriotas migrantes.
- Las ganancias millonarias obtenidas por los carteles de droga les permitieron extenderse hasta convertirse en organizaciones a nivel multinacional. El poder económico obtenido por estos sindicatos de exportación entorpeció el funcionamiento de las diferentes esferas sociales dentro de Colombia. Así, la labor de las instituciones públicas quedó desprestigiada por la corrupción de sus miembros, quienes habían sido sobornados. La economía formal tendría un retroceso por la falta de garantías y el desequilibrio que provocaba el lavado de grandes sumas de dinero. Así, las consecuencias dentro de Colombia a causa del narcotráfico no se limitaron a los problemas originados por la violencia ejercida por los carteles, sino que se derivaron múltiples procesos de descomposición estructural debido al crecimiento de esta industria.
- La escalada del conflicto interno colombiano y el aumento del tráfico de cocaína atrajeron la atención de la comunidad internacional, ya que la inestabilidad y la violencia se extenderían fuera de las fronteras del país. La incapacidad del gobierno para controlar y subsanar esta situación provocó que el país se vea en la necesidad de aceptar ayuda foránea con respecto al comercio de narcóticos.

- Estados Unidos aplicó la teoría de las narcoguerrillas, la cual proponía una alianza definitiva entre las guerrillas insurgentes y los grupos narcotraficantes. Este concepto se proporcionó para distraer la atención del público de la relación entre los militares y las mafias de drogas. Asimismo, sirvió para que EE.UU. pueda destinar sus recursos a la guerra contrainsurgente, ya que a esta se la hacía parecer como una extensión de la lucha antidrogas. Sin embargo, nunca hubo la suficiente evidencia para probar la existencia de esta supuesta alianza durante el periodo de estudio; además, de la incongruencia que se presenta en los intereses antagónicos entre ambos grupos, los cuales se pueden observar en los testimonios expuestos en la presente investigación.
- El gobierno colombiano no priorizó la guerra contra las drogas, permitiendo así que se elaboren leyes que favorecían a los carteles y que las fuerzas armadas se alíen a estos grupos narcotraficantes. La designación de los recursos se enfocó principalmente en la lucha contra las guerrillas, usando así cualquier medio disponible. Esta situación dio origen a la relación entre las mafias, los grupos paramilitares y el ejército nacional, por lo cual no solo las operaciones de control y detención se volverían ineficientes, sino que se irrespetarían los derechos humanos, dando lugar a una represión civil.
- Los esfuerzos por erradicar la producción de cocaína tuvieron poco éxito en su propósito de disminuir la disponibilidad de las drogas en los mercados de consumo, y por el contrario contribuyeron al aumento del precio de los cultivos, estimular la producción en zonas más alejadas y contribuir a la inestabilidad en la región. De igual manera, los proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de cultivos no tuvieron un impacto considerable en Colombia debido a las restricciones de seguridad que se presentaron por el conflicto interno que ahí de desarrollaba.
- La escuela constructivista ha permitido observar detalladamente el proceso de construcción social que se dio en los dos países con respecto a las drogas, debido a la interacción entre los mismos. Las políticas y acciones tomadas por cada uno de los Estados correspondían a defender sus intereses, los cuales se habían constituido a través de la compartición de

símbolos y valores en un marco de entendimiento. De igual manera, el Constructivismo toma en cuenta a los diferentes actores no estatales, como las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares, que en este formaron parte activa dentro del desarrollo de este conflicto de alcance internacional. Además, se aprovechó la teoría de Securitización, que es parte de esta escuela, para explicar la influencia y el poder que puede tener la retórica de un discurso al momento de categorizar a algo como una amenaza. En este caso, se puede ver como la guerra contra las drogas en repetidas ocasiones no era el verdadero propósito de las autoridades gubernamentales, sino que servía como excusa y coartada para justificar los medios engañosos o ilegales que se aplicaban para conseguir sus fines.

- La política norteamericana durante la administración de Reagan fue belicista e intervencionista. Así, las acciones ejecutadas durante la década de los 80 correspondían a tácticas neocolonialistas que buscaban preservar y fortalecer la hegemonía de la potencia del norte dentro del continente. Reagan irrespetó el derecho de soberanía de los demás países, así como incumplió los compromisos que se habían realizado con anterioridad a través de estrategias políticas y manipulación. La CIA no tuvo reparos en aprovechar el narcotráfico, colaborando al crecimiento de esta industria con el fin de obtener fondos para financiar al grupo mercenario de los Contra en Nicaragua, empeorando así la situación social de ambos países latinoamericanos.

VIII. RECOMENDACIONES

En respuesta a los resultados de esta investigación, a continuación se enlistan las principales recomendaciones que se consideraron pertinentes en este caso. Las sugerencias aquí expuestas buscan ofrecer soluciones a los problemas actuales, tomando como partida el análisis de los eventos acontecidos en el periodo de estudio, por esta razón en algunos casos éstas han sido reajustadas para que resulten más concretas en virtud de los cambios más recientes, como por ejemplo las nuevas iniciativas de integración regional en el continente americano. Las recomendaciones expuestas buscan ser complementarias para responder de forma eficiente a la complejidad de la problemática del consumo y comercio de drogas, que afecta en áreas de: salud pública, seguridad nacional, desarrollo económico y en la agenda de política internacional.

- El paradigma de enfoque con respecto a la lucha contra las drogas debe tener en cuenta las propuestas presentadas en el 2009 por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Esta Comisión que fue constituida por los ex presidentes de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, respectivamente, buscó proponer un cambio de paradigma con respecto al enfoque prohibicionista impulsado por Estados Unidos y enfocarse en los beneficios y las limitantes de los programas de reducción de daños que se implementaron dentro de la Unión Europea (Jelsma y Blickman, 2009: 1). La aplicación de una política de “cero tolerancia” resulta incongruente y ha probado ser ineficaz frente a la realidad mundial, por lo que es momento de aplicar un enfoque más pragmático, como el de reducción de daños y riesgos, que permita contener de una manera más completa los daños relacionados con el uso de drogas para los consumidores y la sociedad en general.
- El tema de las drogas debe tratarse dentro del campo de la salud pública en el caso de adicción y en el campo de salud para la prevención. Los Estados debe considerar a los consumidores y adictos como personas enfermas, para así poderles brindar la ayuda que necesitan en lugar de simplemente ponerlos en prisión y agravar el problema. Para esto se debe destinar los recursos que actualmente se concentran en las acciones penales, en los aspectos sociales y culturales que inciden en el uso y abuso de sustancias

narcóticas. Por ejemplo, la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia para la lucha contra las drogas en el 2015 fue de 320 millones de dólares (El Comercio, 2014: 1), entonces se podría desviar progresivamente un porcentaje de este monto, empezando en un 20%, lo cual equivaldría a 64 millones de dólares, que destinarían a proyectos de salud y educación para la ciudadanía. Este enfoque corresponde al presentado en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC)⁵⁸ en junio de 2015, el cual busca situar la seguridad y los derechos de la personas en el centro de la generación de las políticas de drogas, por lo tanto EE.UU., que envía representantes de la DEA a dicha conferencia se viera presionado por las demandas mayoritarias de la comunidad internacional (ODC, 2015: 1).

- La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal organismo intergubernamental del continente, en el cual se realizan permanentemente foros de diálogo, análisis de políticas y tomas de decisiones con respecto a esta problemática, también se pueden aprovechar esta oportunidad para crear nuevas mesas de diálogos que involucren a actores no estatales y colaborar a solucionar el actual problema de representatividad que se da dentro de este organismo.
- La OEA debe procurar la creación de un marco legal homogéneo con respecto a la legislación del comercio y el consumo de sustancias narcóticas para todos los países del continente, mediante el diálogo y la negociación entre todos los países involucrados. La evidencia presentada señala el alcance multinacional que tiene el negocio de las drogas y la forma en que este involucra a todos los países, volviéndolos responsables en diversa medida. El problema de salud está presente en todos los países, ya que en todos se registra consumo de sustancias narcóticas, especialmente en los países de Norteamérica. Por otro lado, en las regiones de Sudamérica y Centroamérica los problemas del narcotráfico se presentan mayoritariamente en el impacto que tiene sobre la economía, la sociedad, la seguridad y la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, es necesario evitar que la heterogeneidad legislativa entre los países facilite la

⁵⁸ En este evento se reúnen aproximadamente 400 delegados de Estados de todas partes del mundo junto a representantes de la ONU y de la DEA para buscar estrategias innovadoras y soluciones eficaces con respecto a la problemática de las drogas ilícitas (ODC, 2015: 1).

realización de actividades ilícitas aprovechándose de estas circunstancias, como ocurre en el caso del lavado de dinero.

- La inseguridad generada por el narcotráfico afecta en mayor proporción a las sociedades cuyos Estados no están en condiciones de entregar respuestas eficaces. Por esta razón, la OEA debe buscar marcos de entendimiento y cooperación que permitan a los países interactuar y ayudarse entre ellos para asegurar la acción eficaz de los organismos policiales, judiciales y penitenciarios. La corrupción y la impunidad que derivan de la inestabilidad política de un país permiten a los delincuentes actuar libremente por más severas que sean las penas correspondientes a sus crímenes. Se debe llegar a acuerdos de cooperación que permitan fortalecer el Estado de Derecho, impidiendo que las organizaciones criminales dominen sobre los territorios o influyan sobre las decisiones públicas, para que este pueda garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de sus ciudadanos.
- De igual forma, en el marco de la OEA se debe abordar el estudio del problema de las drogas de una manera flexible y diferenciada que tome en cuenta las particularidades de cómo este afecta particularmente a cada país, para llegar a un consenso que satisfaga las necesidades de las poblaciones afectadas. Esta problemática tiene una amplia gama de tipos de manifestaciones e impactos en los países y en las subregiones del continente, por ello es necesario incorporar nuevos conocimientos dentro de las políticas para hacerlas más efectivas al momento de evitar daños y costos no deseados y tener en consideración los cambios culturales y económicos que se han dado con el tiempo. Así, el Estado colombiano debe hacer un análisis profundo de su historia y el proceso de desestabilización que dio paso al crecimiento del narcotráfico, para así proponer soluciones completas que tomen en cuenta su historia y la idiosincrasia de su población. De igual forma, este proceso debe ser realizado por los demás países para que al momento de generar nuevas políticas se comprendan diferentes realidades y asegurar el éxito manteniendo la unidad en la diversidad.
- La Oficina de las Naciones Unidas para el control de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) debe emitir reportes sobre la eficacia de las

diferentes políticas de drogas basadas en una evaluación científica de las mismas y no solo en bases ideológicas. Dentro de estos análisis se debe tomar en consideración las diferencias en las consecuencias y patrones de uso entre las diferentes sustancias. Por ejemplo, los riesgos relacionados con fumar marihuana no son los mismos a los de usar heroína por vía intravenosa o consumir *crack*; se debe enfatizar las diferencias entre el uso recreativo y los patrones de adicción a las drogas. La ONUDD debe garantizar la veracidad de la información que se le proporcione al público, ya que como se ha visto el hecho de manipular u ocultar datos importantes pueden tener consecuencias trascendentales al largo plazo. El acceso a la información con respecto al consumo de drogas y sus efectos debe ser público y presentado regularmente a los ciudadanos para que las autoridades estatales no puedan manipularla a su conveniencia. Los individuos deben tener todos los elementos necesarios para poder formar un juicio de valor completo que justifique su comportamiento. Así, a través de la educación consecuentemente debe prevalecer la concienciación sobre las consecuencias individuales y colectivas de cometer actos delictivos y la resolución de conflictos por métodos no violentos.

- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) debe generar un tratado que vincule a los países a respetar plenamente los derechos humanos específicamente en relación al uso y abuso de narcóticos, de manera que cualquier pena aplicada sea estrictamente proporcional al delito cometido. Así, se evitaría las penas exageradas a los individuos por el mero consumo, ya que después de todo son personas que padecen de adicción, no existiría erradicación forzosa a campesinos que se vieron involucrados a falta de otro medio de subsistencia y se eliminarían las duras sentencias penitenciarias y la pena de muerte por delitos de drogas para los pequeños traficantes. Así, los esfuerzos se enfocarían realmente en priorizar la salud y el bienestar de los individuos.
- En el caso del tráfico de drogas se sugiere atacar los canales de comercialización desde el lado donde se encuentra la demanda con el fin de obtener resultados eficientes y definitivos. Para esto, la Oficina de

Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP⁵⁹) de Estados Unidos debe hacer hincapié en las nuevas políticas que se presentaron en abril de 2012 con un nuevo enfoque para presentar soluciones efectivas ante esta problemática. Estas políticas buscan ser innovadoras y progresistas al momento de tratar la drogadicción como una enfermedad, redirigiendo entre el 2009 y el 2012 aproximadamente 31.000 millones de dólares en programas de prevención y tratamiento, que permitieron la rehabilitación de 120.00 adictos no violentos sin la necesidad de encarcelarlos. Así, las estadísticas indican que si bien la tasa de estadounidenses que consumen actualmente drogas ilícitas es un tercio de la tasa a finales de la década de los 70, las medidas enfocadas en salud y prevención, entre el 2008 y el 2012 han demostrado mejores resultados, reduciendo en un 40% el uso de cocaína y en un 50% el de metanfetamina (Porter, 2012: 1). Conjuntamente, se debe gestionar la creación de programas comunitarios y la intervención temprana a nivel de atención médica para prevenir e impedir los casos de drogodependencia antes de que se produzcan.

- EE.UU. como líder en la lucha antidrogas debe enfocar su cooperación internacional en la transferencia de tecnología y conocimientos relacionados con este fenómeno, para que de esta manera los países productores puedan diseñar sus propias estrategias y fortalecer sus estructuras sociales en sus puntos débiles. Para esto, la ONCDP ha destinado 1.200 millones de dólares entre 2009 y 2012 para crear programas de desarrollo que les permitan a los agricultores de los países productores producir cultivos alternativos y rentables, mientras que se les proporciona mayor seguridad contra los grupos criminales y narcotraficantes. Sin embargo, a pesar de este nuevo *“enfoque del siglo XX”*, aún más del 52% de los recursos asignados a la lucha contra las drogas se enfocan aún en la aplicación de la ley y actividades de intercepción, dejando así menos del 8% para la ejecución de programas internacionales (Kaufman, 2012: 1). Por lo tanto, se vuelve menester que las autoridades norteamericanas mantenga la congruencia con su discurso y la reasignación de recursos para estas propuestas alternativas, de forma que

⁵⁹ En ingles, White House Office of National Drug Control Policy.

permitan la creación programas sostenibles que con el tiempo proporcionen resultados reales.

- Los organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) deben realizar informes específicos sobre los casos de cooperación internacional se debe hacer un seguimiento más riguroso de los procesos y los individuos para asegurarse que la asistencia brindada tenga la menor cantidad de errores en su aplicación en comunidades extranjeras. De igual manera, efectuar un análisis retrospectivo de los casos de injerencia norteamericana dentro de la región para así elaborar una queja formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que denuncie violaciones a la soberanía y a los derechos civiles que se han dado dentro de los países de la región. Es necesaria la creación de comités *ad hoc* dentro de estos organismos que tengan la exclusiva tarea de analizar las posibles intenciones y las consecuencias más probables que derivarán de los actos de intervencionismo extranjero dentro de sus comunidades.
- En el marco de la UNASUR se debe dar énfasis a las falencias estructurales que se dan dentro de las diferentes esferas sociales y no solo enfocarse en los problemas superficiales. En el caso de Colombia, es menester que el gobierno exija más responsabilidad y compromiso de parte de todos los ciudadanos colombianos, especialmente de los funcionarios públicos, para que no se vean involucrados en el negocio del tráfico de drogas. Asimismo, los países vecinos a Colombia deben permanecer alertas con respecto a un posible traspaso del conflicto o del comercio de drogas dentro de sus fronteras. Los problemas pueden escalar vertiginosamente cuando llegan a la esfera internacional, ya que bajo estas circunstancias aumentan la cantidad de variables que se deben tomar en consideración al momento de proponer soluciones.
- La Organización de Naciones Unidas (ONU) deben analizar las implicaciones que los procesos de interacción entre los Estados puedan tener dentro de sus sociedades. Por ejemplo, en el caso de que existan conexiones criminales entre los individuos de dos países se deben buscar soluciones no solo para esa específica solución sino también para sus

futuras posibles implicaciones en el futuro. Conjuntamente, la labor del Consejo de Seguridad, como encargado de mantener la paz y la seguridad entre las naciones, debe estar supervisada cuando involucren a un país miembro, sobre todo si tiene derecho a veto, con el fin de garantizar que las perspectivas aplicadas y las medidas tomadas no estén parcializadas, y se priorice el bienestar común; es decir en este caso que no respondan a las necesidades e intereses de Estados Unidos, sino que busquen lograr un consenso para subsanar la crisis de la problemática de las drogas en Colombia.

- La ONU debe priorizar la búsqueda de propuestas para los problemas que generan las falencias en las estructuras sociales de ciertos países, ya que estas sirven de partida para el fenómeno de la adicción a las drogas. Pues, en muchos casos los adictos son personas enfermas y alienadas, resultado de una sociedad que ellos consideran corrupta e inequitativa. Para esto, primero se debe trabajar en conjunto con las agencias especializadas de salud estatales⁶⁰ para formular programas de reinserción a la sociedad para los adictos a las sustancias narcóticas. Consecuentemente, se debe trabajar junto con los organismos estatales y no estatales que sean responsables del desarrollo y bienestar, enfocados lograr la plena satisfacción de las necesidades básicas, disminuir la inequidad social, asegurar un crecimiento económico sustentable, para mejorar la calidad de vida de los individuos

⁶⁰ Por ejemplo el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, The U.S. Department of Health and Human Services en Estados Unidos, o el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador.

LISTA DE REFERENCIAS

LIBROS

- APEP. (1990). *Cocaína: Problemas y soluciones andinos*. Lima, Perú: Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz.
- Barriga, F. (1993). *Droga, problema mundial*. Quito, Ecuador: IEEPRI.
- Bertram, E., Blachman, M., Sharpe, K. y Andreas, P. (1996) *Drug War Politics: The Price of Denial*. California, EE.UU: University of California Press, Ltd. Recuperado el 24 de febrero de 2015 de: <https://books.google.com.ec/books?id=baWsThZgBaQC&pg=PA104&dq=war+on+drugs+laws+and+policias+nixon&hl=es-419&sa=X&ei=dO3sVIKhEMawggTayILYDg&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=war%20on%20drugs%20laws%20and%20policias%20nixon&f=false>
- Calvo, H. (2008). *Colombia, laboratorio de embrujos: democracia y terrorismo de Estado*. Madrid, España: Editorial Foca.
- Camacho, A. (1988). *Droga y sociedad en Colombia: El poder y el estigma*. Bogotá, Colombia: CIDSE.
- Camacho, A. (1989). Colombia: Violencia y "Narcocultura". En D. García. (Ed.), *Coca, cocaína y narcotráfico: Laberinto en los Andes* (pp. 191-205). Lima, Perú: Comisión Andina de Juristas.
- Castillo, F. (1996). *Los nuevos jinetes de la cocaína*. Bogotá, Colombia: La Oveja Negra Ltda.
- Chesepesiuk, R. (1999). *The War on Drugs: an International Encyclopedia*. California, EE.UU.: ABC-CLIO
- Chernik, M. (2008). *Acuerdo posible: solución negociada al conflicto armado colombiano*. Bogotá, Colombia: Ediciones Aurora.
- Chomsky, N. (2004). *Hegemonía o Supervivencia: El dominio mundial de EE.UU.* Bogotá, Colombia: Editorial Norma S.A.
- Crandall, R. (2002). *Driven by drugs: U.S. Policy toward Colombia*. Colorado, USA: Lynne Rienns Publishers, Inc.
- Cueva, C. (2010). *Securitización y construcción de percepciones: Plan Colombia y la seguridad humana: 1998-2005*. Quito, Ecuador: Edimpres S.A.
- Gerber, J. y Jensen, E. (2001). *Drug War American Style: The Internationalization of Failed Policy and its alternatives*. Ciudad de New York, EE.UU: Garland Publishing. Recuperado el 26 de febrero de: <https://books.google.com.ec/books?id=gPZRAwAAQBAJ&pg=PA161&dq=us+world+leader+for+drug+war&hl=es-419&sa=X&ei=8uXvVI-0L8H4ggTAwoGoBQ&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=us%20world%20leader%20for%20drug%20war&f=false>

- Gott, R. (1971). *Las guerrillas en América Latina*. Santiago de Chile, Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Guzmán, G., Fals, O. y Umaña, E. (2005). *La Violencia en Colombia Tomo I*. Bogotá Colombia: Alfaguara S.A.
- Heffer, J. (1992). *La Guerra Fría*. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.
- Henderson. J. (2015). *Colombia's Narcotics Nightmare: How the drug trade destroyed peace*. Carolina del Norte, EE.UU: McFrandland & Company, Inc. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de: https://books.google.com.ec/books?id=EjJzBgAAQBAJ&pg=PA35&dq=cocaine+history+colombia&hl=es-419&sa=X&ei=rpgbVYDnl8G_ggTaq4No&ved=0CDsQ6AEwBA#v=onepage&q=cocaine%20history%20colombia&f=false
- Holmes, J., Amin, S. y Curtin, K. (2008). *Guns, Drugs, and Development in Colombia*. Texas, EE.UU: The University of Texas Press
- Labrousse, A. (1993) *La droga, el dinero y las armas*. México D.F., México: Siglo Veintiuno editores, S.A. Recuperado el 22 de marzo de 2015 de: https://books.google.com.ec/books?id=cWhUUQZpUSQC&pg=PA18&dq=consecuencias+trafico+drogas+colombia&hl=es-419&sa=X&ei=9TQsVb_uDuq1sATdtYGIBw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=consecuencias%20trafico%20drogas%20colombia&f=false
- Lee, R. (1998). *The White Labyrinth: Cocaine and Political Power*. New Jersey, EE.UU.: Library of Congress
- Maxwell, A. (1989). Una ley contradictoria. En D. García. (Ed.), *Coca, cocaína y narcotráfico: Laberinto en los Andes* (pp. 327-338). Lima, Perú: Comisión Andina de Juristas.
- Medina, M. (1984). Yo acuso a Ronald Reagan. En TANA. (Ed.), *Tribunal Antiimperialista de Nuestra América: Capítulo Ecuador* (pp.9-32). Quito, Ecuador: Editorial El Conejo.
- Moreno, E. (2009). *El delito de narcotráfico*. Quito, Ecuador: Editorial Jurídica del Ecuador.
- Núñez, J. (1984). Las agresiones yanquis a América Latina. En TANA. (Ed.), *Tribunal Antiimperialista de Nuestra América: Capítulo Ecuador* (pp.9-32). Quito, Ecuador: Editorial El Conejo.
- Pizarro, E. (1992). *Las FARC (1949-1966): De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*. Bogotá, Colombia: Tercer Mundo Editores.
- Ramírez, M., Stanton K., y Walsh, J. (2005). Colombia: un círculo vicioso de drogas y guerra. En C. Youngers, y E. Rosing. (Ed.), *Drogas y democracia en América Latina* (pp.131-x). Buenos Aires, Argentina; Editorial Biblos.
- Ramírez, S. (2001). *El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta Colombiana S.A.

- Restrepo, L. (2001). *El Plan Colombia y la Internacionalización del conflicto*. Bogotá, Colombia: Editorial Planeta Colombiana, S.A.
- Roldós, M. (2012). Actualidad y vigencia de la carta de conducta. Guayaquil, Ecuador: EDUQUIL.
- Roncken, T. (2004). *La lucha contra las drogas y la proyección militar de Estados Unidos*. Quito, Ecuador: Abya – Yala.
- Roppel, G. (2011). *Estados Unidos: Intervenciones del poder imperial en cuarenta países del mundo*. Bogotá, Colombia: Ediciones Aurora.
- Samper, E. (2013). *Drogas, prohibición o legalización: Una nueva propuesta*. Bogotá, Colombia: Random House Mondadori, S.A.S
- Thoumi, F. (2002). *El imperio de la droga: Narcotráfico, economía y sociedad en Los Andes*. Bogotá D.C., Colombia: Editorial Planeta Colombiana, S.A.
- Thoumi, F. (2008). Las políticas contra las drogas, reformas y relaciones colombo-americanas. En *Narcotráfico: Europa, EEUU, América Latina*. Álvaro Camacho. Barcelona, España: Obreal.
- WOLA. (1991). *The U.S. Military and the War on Drugs in the Andes*. Washington D.C., EE.UU.: Washington Office on Latin America.
- Youngers, C., y Walsh J. (1989). “La Guerra” Contra las Drogas en los Andes: Una política mal encaminada. En D. García. (Ed.), *Coca, cocaína y narcotráfico: Laberinto en los Andes* (pp. 341-359). Lima, Perú: Comisión Andina de Juristas.
- Zárate, A. (2003). *La ley de Herodes y la “Guerra” contralas drogas*. México D.F., México: Universidad Autónoma de Coahuila. Recuperado el 25 de febrero de: <https://books.google.com.ec/books?id=LxUvxm5eBKMC&pg=PA17&dq=drugs+herodes&hl=es-419&sa=X&ei=M4HuVNXgEoa-ggToj4KACA&ved=0CB4Q6AEwAA#v=onepage&q=drugs%20herodes&f=false>
- Ramírez, M., Stanton, K. y Walsh, J. (2005). Colombia: A vicious circle of drugs and war. En *Drugs and democracy in Latin America: The impact of U.S. policy*. Colleta Youngers y Eileen Rosin. Colorado, USA: Lynne Rienns Publishers, Inc.

TESIS DE GRADO

- Belzner, J. y Rodríguez, A. (2004). *Impacto económico y social del narcotráfico en Colombia de 1980 -1995 y sus costos derivados*. (Maestría Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia). Recuperado el 10 de junio de 2015 de: <http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/11851/10001272.pdf?sequence=2>

Bonilla, A. (1992). *National Security Decision-making in Ecuador: The case of the War on Drugs* (Maestría FLACSO, Quito).

Paéz, A. (1991). *Narcotráfico y violencia en los países andinos* (Maestría FLACSO, Quito).

Paladines, J. (2012). *La sociedad del riesgo y el discurso criminalizador de las drogas* (Maestría FLACSO, Quito).

PUBLICACIONES PERIÓDICOS

Branson, R. (2012, diciembre 7). War on drugs a trillion-dollar failure. *CNN*. Recuperado el 25 de agosto de 2015 de: <http://edition.cnn.com/2012/12/06/opinion/branson-end-war-on-drugs/>

Dufton, E. (2012, marzo 26). The War on Drugs: How President Nixon Tied Addiction to Crime. *The Atlantic*. Recuperado el 23 de febrero de: <http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/the-war-on-drugs-how-president-nixon-tied-addiction-to-crime/254319/>

El Comercio (2014, marzo 4). Obama pide recorte de fondos para Colombia. *El Comercio*. Recuperado el 29 de mayo de 2015 de: <http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/obama-pide-recorte-fondos-colombia-noticia-1713777>

El Tiempo. (2010). Turbay dicta polémico Estatuto de seguridad. *El Tiempo*. Recuperado el 6 de mayo de 2015 de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4169210>

Guerrero, N. (2014). Las revelaciones de William Rodríguez Abadía, el "heredero" del cartel de Cali. *BBC Mundo*. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/11/141118_entrevista_william_rodriguez_cartel_cali_ng

La Redacción, (2013, mayo 29). Bancos de EU, los mayores beneficiarios del narcotráfico. *Proceso*. Recuperado el 2 de junio de 2015 de: <http://www.proceso.com.mx/?p=343415>

Núñez, J. (2015, abril 30). El 'Corolario de la Doctrina Monroe'. *El Telégrafo*. Recuperado el 1 de mayo de 2015 de: <http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/el-corolario-de-la-doctrina-monroe.html>

Echazu, J. (2008, noviembre 7). La guerra falsa y la DEA. *Bolpress*. Recuperado el 17 de enero de 2015 de: <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2008110707#>

Mizrahi, D. (2013, diciembre 1). Cómo era Pablo Escobar, el narcotraficante más temible del mundo. *Infobae América*. Recuperado el 23 de marzo de 2015 de: <http://www.infobae.com/2013/12/01/1527524-como-era-pablo-escobar-el-narcotraficante-mas-temible-del-mundo>

RPP. (2013, agosto 19). UE destina fondos para proyectos antidrogas en Bolivia. *RPP Noticias*. Recuperado el 26 de mayo de 2015 de: http://www.rpp.com.pe/2013-08-19-ue-destina-fondos-para-proyectos-antidrogas-en-bolivia-noticia_623213.html

REVISTAS

Bentham, J. (2010) Securitization: What makes something a security threat. *Criminal Justice*. Recuperado el 22 de enero de 2015 de: <http://www.drtoconnor.com/2010/2010lect01a.htm>

Revista Colombiana de Psiquiatría. (2003). Homicidio y lesiones infligidas intencionalmente por otra persona. Colombia 1973-1996. Redalyc. Recuperado el 26 de Julio de 2015 de: <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80632301>

Thoumi, F. (2011). Competitive Advantages in the Production and Trafficking of Coca-Cocaine and Opium-Heroin in Afghanistan and the Andean Countries. *Webpace*. Recuperado el 26 de febrero de: <http://webpace.pugetsound.edu/facultypages/bdillman/382Readings/Reading2.pdf>

REVISTAS CIENTÍFICAS

Alai, (1989a). EE.UU. y el narcotráfico: un doble juego. *Agencia latinoamericana de Información*, 120, 11.

Alai, (1989b). ¿Contra quién es la guerra? *Agencia latinoamericana de Información*, 121, 9-11.

Amatangelo, G. (2005). Militarization of the U.S. Drug Control Program. *Institute for Policy Studies*. Recuperado el 6 de mayo de 2015 de: http://www.ips-dc.org/militarization_of_the_us_drug_control_program/

Arriola, J. (2013). El Constructivismo: su revolución “onto-epistemológica”. *Revista de Opinión Filosófica*. Recuperado el 9 de mayo de 2015 de: <http://www.abavaresco.com.br/revista/index.php/opiniaofilosofica/article/viewFile/174/164>

Bagley, B. (1988). Colombia and the War on Drugs. *JSTOR*. Recuperado el 19 de marzo de 2015 de: <http://www.jstor.org/discover/10.2307/20043675?sid=21106165736613&uid=2&uid=4&uid=3737912>

Beckett, K. y Sasson, T. (2013). The rise of the modern “tough on crime” movement. *Defending Justice*. Recuperado el 1 de marzo de 2015 de: <http://www.publiceye.org/defendingjustice/pdfs/chapters/toughcrime.pdf>

Bonilla, A. (2004). El discurso de la seguridad nacional y la guerra de las drogas. *AFESE* 40, 35-43.

Carvajal, L. (2009). Posmodernismo y constructivismo: su utilidad para analizar la política exterior colombiana. *Redalyc*. Recuperado el 23 de enero de 2015 de: <http://www.redalyc.org/pdf/531/53117118014.pdf>

- Campesi, G., (2012) Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea. *Revista Crítica Penal y Poder*. nº 3. Barcelona, España: Universidad de Barcelona.
- Chica, C. (2004). El conflicto también se define en las relaciones exteriores. *Revista futuros* 21. Recuperado el 17 de enero de 2015 de: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistafuturos.info%2Fraw_text%2Fraw_futuro5%2Fconflicto_colombia.doc&ei=p-jFVN_wPMKANrKWgegK&usg=AFQjCNGLP4mla-23828ZGIGU-Gjh5JeouQ&bvm=bv.84349003,d.eXY&cad=rja
- Cruz, M., Revilla J. y Seminario B. (1994). ¿Es relevante la Coca? 'Narcodólares y tipo de cambio real. *Apuntes* 35. Recuperado el 27 de Julio de 2015 de: <https://www.google.com/ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCsQFjADahUKEwj089Xq9vzGAhUJGj4KHciCWU&url=http%3A%2F%2Frevistas.up.edu.pe%2Findex.php%2Fapuntes%2Farticle%2Fdownload%2F345%2F335&ei=9fy2VbSIEIm0>
- Duke, B. (1999, junio 4). Race and the War on Drugs. *Ethics of development in a global environment*. Recuperado el 27 de febrero de 2015 de: https://web.stanford.edu/class/e297c/poverty_prejudice/paradox/hduke.html
- Gaviria, A. y Mejía D. (2009). Cuarenta años después. *Foro económico*. Recuperado el 21 de enero de 2015 de: http://focoeconomico.org/wp-content/Files/gaviria_mejia.pdf
- Guzzini, S. (2000). A Reconstruction of Constructivism in International Relations. *European Journal of International Relations*. Recuperado el 25 de enero de 2015 de: <http://www.artsrn.ualberta.ca/courses/PoliticalScience/661B1/documents/GuzziniReconstructionofConstructivisminIR.pdf>
- Hidalgo, J. (2011). El fracaso de la guerra contra las drogas. *La ilustración liberal*. Recuperado el 19 de enero de 2015 de: <http://www.ilustracionliberal.com/45-46/el-fracaso-de-la-guerra-contra-las-drogas-juan-carlos-hidalgo.html>
- Jelsma, M. y Blickman, T. (2009). Experiencias alternativas en Europa y Estados Unidos. *Nueva sociedad*. Recuperado el 29 de mayo de 2015 de: <http://nuso.org/articulo/experiencias-alternativas-en-europa-y-estados-unidos/>
- Linton, M. (2015). La guerra contra las drogas: de Richard Nixon a Barack Obama. *Nueva Sociedad*. Recuperado el 20 de mayo de 2015 de: <http://nuso.org/articulo/la-guerra-contra-las-drogas-de-richard-nixon-a-barack-obama/>
- Lee, R. (1988). Dimensions of the South American cocaine industry. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*. Recuperado el 25 de marzo de 2015 de: <http://www.jstor.org/discover/10.2307/165981?sid=21105847293681&uid=2&uid=4&uid=3737912>

- McDonald, M. (2013). Securitization and the Construction of Security. *European Journal of International Relations*. Recuperado el 28 de enero de 2015 de: <http://ejt.sagepub.com/content/14/4/563.short?rss=1&ssource=mfr>
- Medina, C., Posso, C. y Tamayo, J. (2011). Costos de la violencia urbana y políticas públicas: algunas lecciones de Medellín. *Borradores de economía*. Recuperado el 28 de julio de 2015 de: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra674.pdf>
- Merino, M. (2006). Propuesta metodológica de Análisis Crítico del Discurso de la discriminación percibida. *Revista Signos*. Recuperado el 26 de agosto de 2015 de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09342006000300006
- Montagne, M. (1991). Descriptive Epidemiology of International Cocaine Trafficking. *National Institute on Drug Abuse Research*. Recuperado el 28 de julio de 2015 de: <http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/110.pdf>
- Nieto, P. y García, P. Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006). *Confines*. Recuperado el 9 de marzo de 2015 de: <http://confines.mty.itesm.mx/articulos7/RivasP.pdf>
- Onuf, N. (2002). Worlds of Our Making: The Strange Career of Constructivism in International Relations. *Columbia: University of South Carolina Press*. Recuperado el 25 de enero de 2015 de: https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fhome.aubg.bg%2Ffaculty%2Ffmtzankova%2FPOS%2520102%2520Readings%2FOnuf_%2520The%2520Strange%2520Career%2520of%2520Constructivism%2520in%2520International%2520Relations.doc&ei=oFPtVPnoJlymNo3eg6AH&usg=AFQjCNGhQSmJzoOVbMDsCYcamYLHwPus5g&sig2=9gNkTT7blbQNBKYmjgHalQ&bvm=bv.86956481,d.eXY&cad=rja
- Orozco, G. (2006). El concepto de seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*. Recuperado el 25 de agosto de 2015 de: <http://www.raco.cat/index.php/revistacidob/article/viewFile/28455/28289>
- Pauselli, G. (2012). Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda externa. *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo*. Recuperado el 2 de marzo de 2015 de: <http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29>
- Pilger J. (1999 octubre 19). Comment & Analysis: Phoney war The US is planning a massive intervention in Colombia under the pretext of fighting the 'narco-guerrilla'. *ProQuest*. Recuperado el 10 de enero de 2015 de: <http://puceftp.puce.edu.ec:2066/docview/245443985/5F207F05EF374F5APQ/1?accountid=13357>
- Ramos, M. (1991). América Latina y la Política Exterior de Estados Unidos. *Revista de Estudios Políticos Nueva Época*. Recuperado el 20 de marzo

de 2015 de: file:///C:/Users/David/Downloads/Dialnet-AmericaLatinaYLaPoliticaExteriorDeEstadosUnidos-2138278.pdf

Rouse, B. (1991). Trends in Cocaine Use in the General Population. *National Institute on Drug Abuse Research*. Recuperado el 28 de julio de 2015 de: <http://archives.drugabuse.gov/pdf/monographs/110.pdf>

Velásquez, E. (2007). Historia del paramilitarismo en Colombia. Redalyc. Recuperado el 22 de marzo de 2015 de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221014794012>

Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *The MIT Press*. Recuperado el 25 de enero de 2015 de: <http://ic.ucsc.edu/~rlipsch/Pol272/Wendt.Anarch.pdf>

PÁGINAS WEB

Banco Mundial. (2015). Gasto militar (% del PIB). *Banco Mundial*. Recuperado el 30 de julio de 2015 de: <http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?page=5>

Bass, T. (1999). The United States War on Drugs. *Stanford*. Recuperado el 27 de febrero de 2015 de: https://web.stanford.edu/class/e297c/poverty_prejudice/paradox/htele.html

Colombia Info. (2014). Narcotráfico. *Nuestra historia*. Recuperado el 10 de enero de 2015 de: <http://www.colombia.com/colombiainfo/nuestrahistoria/narcotrafico.asp>

Drug Policy Alliance. (2015). A Brief History of the Drug War. *The Drug Policy Alliance*. Recuperado el 29 de Julio de 2015 de: <http://www.drugpolicy.org/new-solutions-drug-policy/brief-history-drug-war>

Hirschkind, L. (2008). La desaparición de la coca en el Ecuador. Recuperado el 25 de agosto de 2015 de: <http://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/apachita/apachita-13/139-la-desaparicion-de-la-coca-en-el-ecuador>

Kaufman, S. (2012). En EE.UU. consumo de drogas ilícitas ha disminuido desde la década de 1970. *IPP Digital*. Recuperado el 29 de mayo de 2015 de: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/04/201204184080.html#axzz1tXQRil8G>

Kline, H. (2015a). La violencia, dictatorship, and democratic restoration. *Encyclopedia Britannica*. Recuperado el 6 de marzo de 2015 de: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126016/Colombia/25342/La-Violencia-dictatorship-and-democratic-restoration>

Kline, H. (2015a). The growth of drug trafficking and guerrilla warfare. *Encyclopedia Britannica*. Recuperado el 6 de marzo de 2015 de:

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/126016/Colombia/25343/The-growth-of-drug-trafficking-and-guerrilla-warfare>

La silla vacía. (2012, marzo 2). Breve historia de la criminalización de las drogas. *La silla vacía*. Recuperado el 21 de enero de 2015 de: <http://lasillavacia.com/elblogueo/narcorama/31854/breve-historia-de-la-criminalizacion-de-las-drogas#>.

Manning, J. (2001). The Drug Wars. *The Eighties Club*. Recuperado el 28 de julio de 2015 de: <http://eightiesclub.tripod.com/id332.htm>

Medline Plus. (2015). Intoxicación con Paraquat. Recuperado el 17 de abril de 2015 de: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001085.htm>

Mujica M., y Thoumi F. (1996, diciembre). Las negociaciones de paz y la participación de las guerrillas colombianas en el narcotráfico. *Universidad de los Andes*. Recuperado el 15 de enero de 2015 de: <http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/246/view.php>

Narconon. (2015). Cocaine: Its History, Uses and Effects. *Narconon International*. Recuperado el 29 de julio de 2015 de: <http://www.narconon.org/drug-information/cocaine-circa-1900-1990s.html>

NIH. (2005). ¿Qué tratamientos hay para la adicción a la heroína?. *La heroína: Abuso y adicción*. Recuperado el 31 de marzo de 2015 de: <http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/la-heroína-abuso-y-addicion/que-tratamientos-hay-para-la-adiccion-la-heroína>

NIH. (2014). Commonly Abused Drugs. *National Institute on Drug Abuse*. Recuperado el 27 de febrero de 2015 de: <http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/commonly-abused-drugs/health-effects>

OND. (2012). Marihuana (cannabis sativa). *Observatorio Nacional de Drogas del Ecuador*. Recuperado el 5 de mayo de 2015 de: http://www.drogasinfo.gob.ec/?page_id=205

ODC. (2015). Colombia plantea Nuevo enfoque de política de drogas ante 400 delegados de 5 continentes. *Observatorio de Drogas de Colombia*. Recuperado el 24 de julio de 2015 de: <http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/ArtMID/2976/ArticleID/1196/Colombia-plantea-nuevo-enfoque-de-politica-de-drogas-ante-400-delegados-de-5-continentes>

PBS. (2015). The Business – Colombian Traffickers. *Frontline*. Recuperado el 18 de marzo de 2015 de: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/inside/colombian.html>

Porter, C. (2012). Estrategia Obama contra las drogas hace hincapié en salud y prevención. IPP Digital. Recuperado el 29 de mayo de 2015 de: <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/article/2012/05/201205024949.html#axzz3bZhZxj1V>

Ramírez, M. (2013). Historia de la extradición en Colombia. *Extradición en Colombia y en el mundo*. Recuperado el 26 de agosto de 2015 de: <http://extradicion.com.co/historia-de-la-extradicion-en-colombia/>

Rivera, G. (1998). Aporte de la historia de la Coca en Colombia. Universidad de Castilla. Recuperado el 21 de enero de 2015 de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDcQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2292612.pdf&ei=wpC9VJn9G8uhNumCgrgP&usg=AFQjCNHOGBu9vXsGI0ltB_1_PAg-zK4Bg&bvm=bv.83829542,d.eXY&cad=rja

Rioja Salud. (2014). Info Drogas. *Cocaína*. Recuperado el 26 de febrero de 2015 de: <http://infodrogas.org/inf-drogas/la-cocaina>

Slaughter, A. (2011, mayo 09). International Relations, Principal Theories. *Princeton*. Recuperado el 22 de enero de 2015 de: https://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf

U.S. Library of Congress. (2011). Relations with the United States. *Country Studies*. Recuperado el 13 de marzo de: <http://countrystudies.us/colombia/98.htm>

Van Munster, R. (2012). Securitization. *Oxford Bibliographies*. Recuperado el 19 de enero de 2015 de: <http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199743292/obo-9780199743292-0091.xml>

DOCUMENTOS

Cámara de Representantes de Colombia. (2011). Decreto 1188 de 1974. *Información legislativa*. Recuperado el 21 de enero de 2015 de: ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/decreto/1974/decreto_1188_1974.html

UNODC. (2012). Cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos. *United Nations Office on Drugs and Crime*. Recuperado el 10 de enero de 2015 de: <https://www.google.com.ec/#q=unodc>

Calvani, S. (2005). Should Colombia just reduce its illicit crops, or also diminish the number of cocaine producers, salves of cocaine traffickers, salves of armed groups?. En A. Camacho. *Drug Trafficking: Perspectives from Europe, Latin America and the United States*, pp. 21-27. Recuperado el 26 de marzo de 2015 de: http://www.drugpolicy.org/docUploads/Drug_Trafficking_Europe_Latin_America_United_States.pdf

Fryer, W. (1993, agosto 30). U.S. Drug Control in the Americas: Time for a Change. *Drugwar*. Recuperado el 27 de marzo de 2015 de: <http://www.wesfryer.com/drugwar.html>

ONU. (1971). Convenio sobre sustancias psicotrópicas 1971. International Narcotics Control Board. Recuperado el 1 de abril de 2015 de:

https://www.incb.org/documents/Psychotropics/conventions/convention_1971_es.pdf

Páez, C. (2013). Cuatro décadas de Guerra contra las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio. *Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia*. Recuperado el 18 de marzo de 2015 de: http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/pensamiento_estrategico/documentos_sobre_region/d.Cuatro%20D%20E%20cadas%20de%20Guerra%20contra%20las%20Drogas%20II%20ED%20cit%20Un%20Balance%20Costo%20-%20Beneficio%20-%20Agosto%202012%20-%20Cesar%20PAEZ.pdf

PBS. (2015). The Colombian Cartels. *Frontline*. Recuperado el 23 de marzo de 2015: <http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/business/inside/colombian.html>

Rodríguez, H. (2015). Estadísticas Militares de Suramérica y Argentina. *Rebelión*. Recuperado el 30 de julio de 2015 de: <http://www.rebelion.org/docs/127506.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1

TENDENCIA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN LA POBLACIÓN ADULTA DE EE.UU.

	1972	1974	1976	1979	1982	1985
Durante su vida	3.2%	3.4%	4.1%	9.0%	14.8%	12.5%
Durante el último mes	0.9%	0.7%	0.7%	2.6%	3.0%	3.2%

Fuente: Rouse (1991)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 2

PORCENTAJES DE FRECUENCIA DE APARICIÓN DE ESTOS TÉRMINOS EN PUBLICACIONES EN INGLÉS

Año	Cocaína	LSD	Marihuana
1960	0.000130%	0.000035%	0.000098%
1961	0.000140%	0.000035%	0.000099%
1962	0.000145%	0.000036%	0.000112%
1963	0.000125%	0.000037%	0.000201%
1964	0.000110%	0.000051%	0.000289%
1965	0.000100%	0.000074%	0.000375%
1966	0.000098%	0.000101%	0.000461%
1967	0.000087%	0.000124%	0.000498%
1968	0.000120%	0.000131%	0.000545%
1969	0.000129%	0.000187%	0.000623%
1970	0.000140%	0.000235%	0.000691%
1971	0.000155%	0.000247%	0.000615%
1972	0.000189%	0.000278%	0.000602%
1973	0.000203%	0.000284%	0.000594%
1974	0.000245%	0.000297%	0.000571%
1975	0.000251%	0.000282%	0.000533%
1976	0.000262%	0.000295%	0.000502%
1977	0.000270%	0.000242%	0.000463%
1978	0.000281%	0.000217%	0.000401%
1979	0.000289%	0.000202%	0.000354%
1980	0.000296%	0.000198%	0.000315%
1981	0.000340%	0.000175%	0.000298%
1982	0.000421%	0.000149%	0.000274%
1983	0.000465%	0.000135%	0.000253%
1984	0.000545%	0.000112%	0.000247%
1985	0.000613%	0.000101%	0.000229%
1986	0.000716%	0.000097%	0.000215%
1987	0.000870%	0.000058%	0.000207%
1988	0.000952%	0.000029%	0.000201%
1989	0.001050%	0.000024%	0.000197%
1990	0.001250%	0.000025%	0.000202%

Fuente: Gaviria y Mejía (2009)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 3

IMPORTACIONES ESTIMADAS DE COCAÍNA ILÍCITA EN TONELADAS MÉTRICAS

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Estados Unidos	30	44	40	50	56	85	100	150	178	200
Canadá y Europa	5	7	12	13	15	18	20	25	30	35

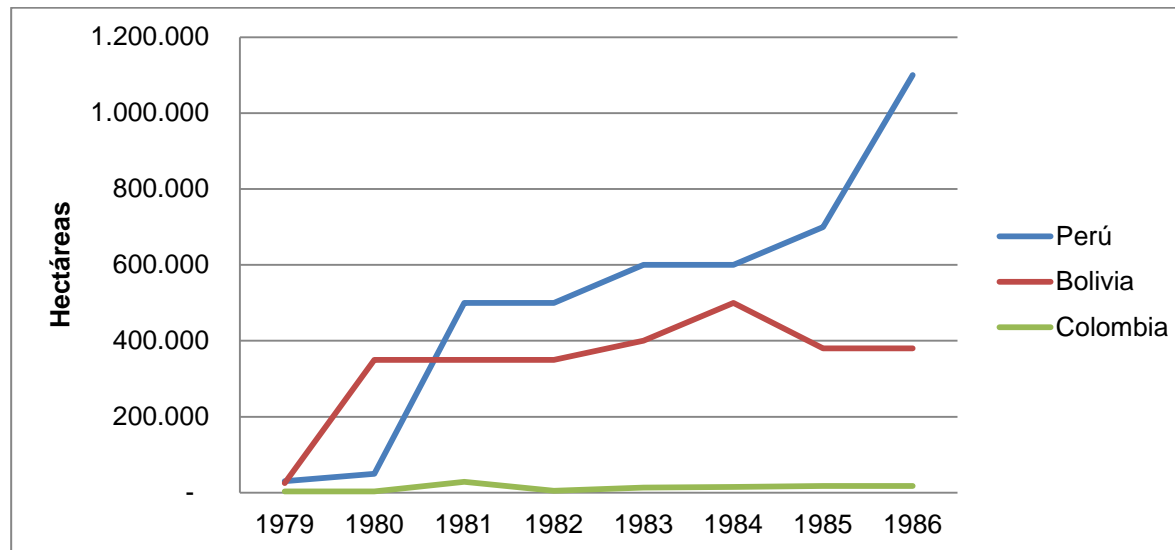
Fuente: Montagne (1991)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 4

HECTÁREAS DE CULTIVOS DE HOJA DE COCA EN LOS PAÍSES ANDINOS

	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
Perú	30,000	50,000	500,000	500,000	600,000	600,000	700,000	1,100,000
Bolivia	25,000	350,000	350,000	350,000	400,000	500,000	380,000	380,000
Colombia	3,000	3,000	29,000	5,000	13,000	15,000	18,000	18,000



Fuente: Montagne (1991)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 5

PRODUCCIÓN TOTAL DE COCAÍNA EN COLOMBIA

Año	Toneladas
1980	175
1981	180
1982	187
1983	240
1984	165
1985	206
1986	267
1987	317

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e investigación para la Paz (1990).
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 6

HECTÁREAS CON CULTIVOS ILEGALES EN COLOMBIA

Año	Hoja de coca	Marihuana
1980	1,100	6,231
1981	2,300	6,952
1982	3,100	7,393
1983	6,200	8,351
1984	10,200	6,000
1985	12,100	2,000
1986	13,500	2,800
1987	24,200	5,085
1988	22,500	4,188
1989	34,000	2,200
1990	42,400	1,964

Fuente: Belzner y Rodríguez (2004).
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 7

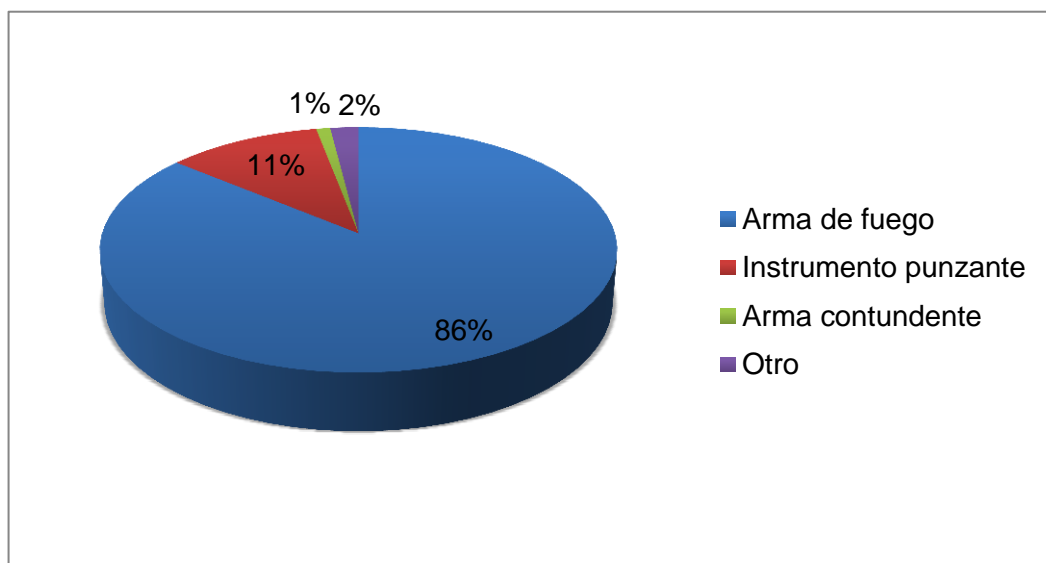
CARACTERÍSTICAS DEL DELITO EN MEDELLÍN EN LOS 80

Tipo de delito	Porcentaje	Arma empleada en el homicidio	Porcentaje
Tráfico de drogas	44%	Arma de fuego	86%
Asalto y robo	20%	Instrumento punzante	11%
Violencia intrafamiliar	5%	Arma contundente	1%
Lesiones comunes	3%	Otro	2%
Homicidio	2%		
Porte de armas	9%		
Otros	17%		

Fuente: Medina, Posso y Tamayo (2011)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 8

GRÁFICO CIRCULAR DE LAS ARMAS USADAS EN HOMICIDIOS



Fuente: Medina, Posso y Tamayo (2011)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

MAPA DE LAS GUERRILLAS MÓVILES Y LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA



ANEXO 10

PRECIOS DE 1 KG DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA EN 1981

Precios de 1 kg de clorhidrato de cocaína en 1981		
Costos de producción	\$	1,500.00
Precio de venta en Bogotá	\$	20,000.00
Precio de venta en New York	\$	60,000.00
Potencial del kilo adulterado	\$	500,000.00

Fuente: Manning (2011) y PBS (2015)

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 11

HOMICIDIOS A NIVEL NACIONAL EN COLOMBIA ENTRE 1946 – 2006

Violencia	Actores en conflicto	Año(s)	No. de muertes	Tasa por 100.00 habitantes	Dptos. Más violentos superiores al promedio nacional
Período 1 La Violencia (1946-1957)	Liberales- conservadores Grupos de autodefensa comunistas	1947	13,968	-	Antiguo Caldas
		1948	43,557	404	(Caldas, Quindío, Risaralda)
		1949	18,519	168	Tolima
		1950	50,253	447	Antioquía
		1951	10,319	90	Norte de Santander
		1952	13,250	113	Santander
		1953	8,650	71	Valle del Cauca
		1954	900	7	Meta
		1955	1,013	8	Huila
		1956	11,136	86	Cundinamarca
		1957	2,877	22	
Período 2 Conflicto de baja intensidad (1964-1984)	Guerrillas Estado	1958-62	19,449	32	Norte de Santander Meta Risaralda Quindío Boyacá Caquetá Antioquia Bolívar Cauca
		1963-67	18,827	31	
		1968-72	21,691	32	
		1970	2,089	35	
		1971	2,354	37	
		1972	2,579	38	
		1973	3,708	33	
		1974	3,966	35	
		1975	3,871	33	
		1976	4,266	36	
		1977	4,881	40	
		1978	6,601	39	
		1979	7,503	37	
		1980	8,569	37	
		1981	10,194	36	
		1982	9,959	36	
		1983	8,951	35	
		1984	9,912	-	
Período 3 Violencia		1985	11,919	-	Antioquia Cundinamarca Valle del Cauca Santander Risaralda Caldas
		1986	14,315	-	
		1987	16,535	-	
		1988	21,509	-	
		1989	23,441	-	
		1990	24,308	69.5	
		1991	28,284	79.2	
		1992	28,224	77.5	
		1993	28,173	75.8	

multipolar Intensificada (1985 -)	1994	26,828	70.8	Norte de Santander
	1995	25,398	65.8	Tolima
	1996	26,642	67.7	Meta
	1997	25,379	63.3	Boyacá
	1998	23,096	56.5	Cesar
	1999	24,358	58.5	Santander
	2000	26,540	62.7	Magdalena
	2001	27,841	64.6	Atlántico
	2002	28,837	65.8	Cauca Córdoba
	2003	23,523	52.7	Quindío
	2004	20,208	44.1	
	2005	18,111	39.9	
	2006	17,479	37.3	

Fuente: Chernick (2008) y Revista Colombiana de Psiquiatría (2003)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 12

VENTA DE INMUEBLES ATRIBUIBLE A LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA

Años	Millones de US\$
1979	\$ 323
1980	\$ 388
1981	\$ 609
1982	\$ 1,013
1983	\$ 547
1984	\$ 1,037
1985	\$ 700
1986	\$ 307
1987	\$ 425
1988	\$ 106
Total	\$ 5,455

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e investigación para la Paz (1990).
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 13

TRÁFICO DE DROGAS Y PARTICIPACIÓN COLOMBIANA

Año	Peso Tons	PPM Kilo US\$	US\$ mill.	Apropiac. Colombiana	Marih. US\$ mill.	Total US\$ mill.
1976	20	70	1,400	910	400	1,310
1977	30	70	2,100	1,365	500	1,865
1978	35	70	2,450	1,590	600	2,190
1979	40	70	2,800	1,820	500	2,320
1980	50	60	3,000	1,950	400	2,350
1981	70	60	4,200	2,730	300	3,030
1982	90	60	5,400	3,510	200	3,710
1983	100	50	5,000	3,250	170	3,420
1984	120	45	5,400	3,510	170	3,680
1985	130	40	5,200	3,380	110	3,480
1986	160	30	4,800	3,120	35	3,920
1987	230	25	6,500	4,250	70	4,320
1988	270	18	6,140	3,990	165	4,155
1989	250	22	6,900	4,485	180	46,665

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e investigación para la Paz (1990).
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 14

DÓLAR NEGRO Y OFICIAL EN EL BALANCE EXTERNO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

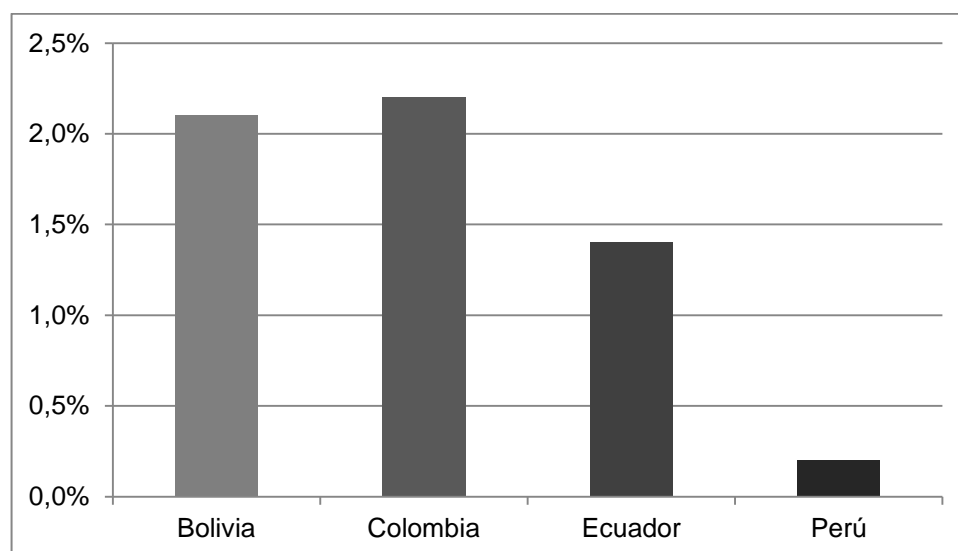
Año	Prima del dólar negro sobre el oficial	Balance en cuenta corriente en % del PIB
1970	12.0	-3.9
1971	11.0	-6.2
1972	5.9	-2.0
1973	6.2	0.0
1974	5.4	1.5
1975	-1.4	0.0
1976	-1.3	1.5
1977	-5.6	2.8
1978	-6.8	2.1
1979	-8.3	1.6
1980	-6.2	0.5
1981	-4.7	-3.7
1982	-0.7	-5.3
1983	11.1	-5.2
1984	13.8	-1.0
1985	2.2	0.6
1986	-0.3	1.3
1987	0.4	-0.2
1988	1.1	-0.9
1989	0.6	-0.2

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e investigación para la Paz (1990).
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 15

GASTO MILITAR EN LATINOAMÉRICA EN 1989

País	US millones	% del PIB
Argentina	\$ 3,000.00	1.8%
Bolivia	\$ 125.00	2.1%
Brasil	\$ 17,673.00	2.5%
Chile	\$ 2,442.00	3.4%
Colombia	\$ 2,562.00	2.2%
Ecuador	\$ 411.00	1.4%
Paraguay	\$ 121.00	1.7%
Perú	\$ 520.00	0.2%
Uruguay	\$ 636.00	3.5%
Venezuela	-	-



Fuente: Banco Mundial (2015) y Rodríguez (2008)
Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla

ANEXO 16

ASISTENCIA ECONÓMICA DE EE.UU. A LA INICIATIVA ANDINA EN 1990 (USD MILLONES)

Propósito	Monto	Porcentaje
Militarización	\$ 40.30	59%
Desarrollo económico	\$ 3.60	5%
Cumplimiento de la ley	\$ 20.00	29%
Apoyo a la DEA	\$ 4.40	6%
Total	\$ 68.30	100%

Fuente: Crandall (2002).

Elaborado por: Jonathan David Morales Olalla